



**Consejo Económico  
y Social**

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/2004/3/Add.1  
26 de noviembre de 2003

ESPAÑOL  
Original: ESPAÑOL/FRANCÉS/  
INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
60º período de sesiones  
Tema 11 b) del programa provisional

**LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR  
LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TORTURA  
Y LA DETENCIÓN**

**Opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria**

El presente documento contiene las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en sus períodos de sesiones 35º, 36º y 37º, celebrados en noviembre/diciembre de 2002, mayo de 2003 y septiembre de 2003 respectivamente. En el informe que el Grupo de Trabajo presentará a la Comisión de Derechos Humanos en su 60º período de sesiones (E/CN.4/2004/3) figura un cuadro con la lista de todas las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo y los datos estadísticos correspondientes.

## ÍNDICE

	<i>Página</i>
Opinión N° 15/2002 (China).....	3
Opinión N° 16/2002 (Emiratos Árabes Unidos).....	7
Opinión N° 17/2002 (República Árabe Siria).....	10
Opinión N° 18/2002 (República Centroafricana) .....	13
Opinión N° 19/2002 (Perú).....	15
Opinión N° 20/2002 (Túnez) .....	18
Opinión N° 21/2002 (Estados Unidos de América).....	18
Opinión N° 1/2003 (Viet Nam) .....	21
Opinión N° 2/2003 (China).....	24
Opinión N° 3/2003 (Egipto) .....	27
Opinión N° 4/2003 (Argelia) .....	29
Opinión N° 5/2003 (Estados Unidos de América).....	30
Opinión N° 6/2003 (Túnez) .....	32
Opinión N° 7/2003 (China).....	35
Opinión N° 8/2003 (República Islámica del Irán) .....	41
Opinión N° 9/2003 (Cuba).....	43
Opinión N° 10/2003 (China).....	54
Opinión N° 11/2003 (República Árabe Siria).....	59
Opinión N° 12/2003 (China).....	62
Opinión N° 13/2003 (China).....	65
Opinión N° 14/2003 (Maldivas) .....	70
Opinión N° 15/2003 (Túnez) .....	73
Opinión N° 16/2003 (Cuba).....	77
Opinión N° 17/2003 (Cuba).....	81
Opinión N° 18/2003 (República Árabe Siria).....	86

## OPINIÓN N° 15/2002 (CHINA)

*Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de julio de 2002.*

*Relativa a:* Yao Fuxin.

### **El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria fue creado en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos, la cual prorrogó y aclaró su mandato en la resolución 1997/50, y lo reconfirmó en la resolución 2000/36. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió la comunicación al Gobierno.
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber facilitado oportunamente la información necesaria.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
  - i) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
  - ii) Cuando la privación de libertad resulta del enjuiciamiento o condena por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
  - iii) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un carácter arbitrario (categoría III).
4. Habida cuenta de las alegaciones presentadas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que facilitó al Grupo del Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está ahora en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.
5. De acuerdo con la información presentada al Grupo por la fuente, Yao Fuxin, ciudadano chino, fue detenido el 17 de marzo de 2002 en la ciudad de Liaoyang, provincia de Liaoning, a menos de un kilómetro de su casa, por agentes de seguridad vestidos de paisano pertenecientes a la Oficina de Seguridad Pública de Liaoyang, quienes no mostraron ningún mandamiento de detención. Sin embargo, las autoridades de Seguridad Pública negaron que hubiesen detenido a Yao Fuxin hasta el 21 de marzo de 2002. Yao Fuxin permaneció detenido en secreto en un lugar desconocido. Posteriormente, fue trasladado al Centro de detención de Tieling en Liaoyang.

6. El 30 de marzo de 2002, Yao Fuxin fue acusado formalmente de "organizar manifestaciones ilegales" y de "reunir a una muchedumbre para alterar el orden social" un delito castigado con pena de prisión de siete años según el artículo 290 1) del Código Penal chino.

7. En su calidad de antiguo empleado en la Fábrica de Ferroaleaciones en la ciudad de Liaoyang, Yao había contribuido a llevar a cabo una investigación independiente de la contabilidad de la compañía, después de que los directores de la fábrica hubiesen declarado la quiebra y hubiesen sido objeto de múltiples acusaciones de estar implicados en escándalos de corrupción con las autoridades locales. Yao también había movilizado a los obreros en diversas acciones para presentar peticiones al gobierno municipal de Liaoyang, al gobierno provincial de Liaoning y al Gobierno central de Beijing. El 11 y el 12 de marzo de 2002, había encabezado una manifestación frente a las oficinas del gobierno municipal, integrada por miles de trabajadores descontentos de la Fábrica de Ferroaleaciones, así como de otras fábricas locales (Fábrica de Textiles de Liaoyang; Fábrica de Cueros de Liaoyang; Fábrica de Herramientas de Precisión de Liaoyang; Fábrica de Instrumentos de Liaoyang; y Fábrica de Émbolos de Liaoyang). Los manifestantes, que estaban descontentos por la falta de pago de los salarios y prestaciones, pedían la dimisión del Presidente del Congreso Popular de Liaoyang, alegando que no había representado eficazmente los intereses de los trabajadores ante el Gobierno. La emisora de televisión de Liaoyang, controlada por el Estado, anunció que los trabajadores habían violado la legislación china sobre manifestaciones y que algunos de ellos habían "estado en connivencia con elementos extranjeros hostiles".

8. La fuente informa además de que el 18 de marzo de 2002, los trabajadores de más de 200 fábricas de la localidad y la región protestaron por la detención de Yao Fuxin y exigieron que fuera inmediatamente puesto en libertad. El 11 de abril de 2002, las autoridades permitieron que la esposa de Fuxin, Guo Xiujing, lo visitase en el Centro de detención de Tieling. La esposa comunicó que la salud de Yao Fuxin se había agravado rápidamente. Las autoridades penitenciarias advirtieron a su hija Yao Dan, que Yao Fuxin se encontraba muy grave después de haber sufrido un ataque al corazón, y que le habían trasladado al hospital. Según los informes, la policía envió al hospital 10.000 yuan (1.205 dólares de los EE.UU.) para cubrir los gastos de su tratamiento, pero no permitieron que sus parientes lo visitasen en el hospital lo que dio lugar a especulaciones de que había recibido una fuerte paliza mientras estaba detenido. Según los familiares de Yao Fuxin, éste se encontraba en perfecto estado de salud antes de su detención y, según su historial clínico, nunca había tenido problemas cardíacos.

9. Según, la fuente, Yao Fuxin había sido detenido únicamente por haber ejercido de manera pacífica sus derechos a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a la libertad de asociación, derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

10. En su respuesta a las alegaciones de la fuente, el Gobierno declaró que Yao Fuxin había estado empleado en la fábrica de acero laminado de Liaoyang. Debido a las pérdidas de explotación sufridas durante varios años, en octubre de 2001, la reunión general de representantes de los empleados de la Fábrica de Ferroaleaciones de Liaoyang decidió, después de celebrar consultas, presentar la declaración de quiebra, y se iniciaron oficialmente los procedimientos. Entre el 11 y el 21 de marzo de 2002, más de 500 empleados y jubilados de la Fábrica de Ferroaleaciones de Liaoyang solicitaron al Gobierno un aumento de los subsidios de traslado y tasas de indemnización económica, y pidieron que se castigara a los administradores corruptos y otro personal de la empresa. El gobierno municipal de Liaoyang examinó con suma

atención sus demandas y creó inmediatamente una junta de investigación para que procediese a una investigación a fondo y detallada de las alegaciones de los empleados, y adoptó las siguientes medidas para resolver la cuestión:

- a) Castigo, de conformidad con la ley, de los funcionarios corruptos. Las autoridades judiciales investigaron las actividades ilícitas y delictivas llevadas a cabo por los funcionarios corruptos y tomaron las medidas siguientes: una persona fue condenada; otra persona está siendo procesada; una persona ha sido encarcelada; tres personas están en libertad bajo fianza en espera de juicio, y se han iniciado acciones penales contra otras siete personas;
- b) Se han tomado todas las medidas para recaudar fondos y garantizar las condiciones básicas de vida de los empleados de la fábrica;
- c) Se está movilizando ayuda para colocar al personal despedido en otros empleos. Gracias a las medidas del gobierno local la situación se calmó rápidamente.

11. Yao Fuxin no es en realidad un empleado de la Fábrica de Ferroaleaciones de la ciudad de Liaoyang. Sin embargo, durante los acontecimientos mencionados Yao estuvo en connivencia con los empleados de la Fábrica de Ferroaleaciones de Liaoyang, aprovechando su descontento para planear, instigar y llevar a cabo diversas acciones destructivas. El Sr. Yao y sus cómplices irrumpieron en el edificio del gobierno local, causando alboroto en las oficinas, destrozando los vehículos públicos, interrumpiendo el tráfico y alterando el orden público. Las actividades ilícitas llevadas a cabo por el Sr. Yao y sus cómplices desorganizaron gravemente las operaciones de producción de la ciudad así como las vidas cotidianas de sus habitantes y su rutina de trabajo, poniendo en peligro la seguridad y los bienes públicos y provocando una fuerte protesta por parte del público en general. Toda vez que el comportamiento del Sr. Yao constituía una violación de las disposiciones pertinentes de los reglamentos chinos sobre la organización de reuniones y manifestaciones, el 27 de marzo, las autoridades de seguridad pública, actuando de conformidad con las disposiciones del artículo 296 del Código Penal chino procedieron a su detención como sospechoso del delito de organizar una reunión, marcha o manifestación ilegal. Desde que el Sr. Yao fue detenido, todos sus derechos e intereses han sido protegidos plenamente, su estado de salud sigue siendo bueno y no ha sido objeto de ninguna forma de tortura.

12. De las circunstancias mencionadas se desprende claramente que el Sr. Yao fue detenido porque sus actividades constituían una violación del derecho penal del país. Ante unas actividades delictivas de este tipo, ningún país regido por el estado de derecho puede permanecer inactivo. Las medidas adoptadas por las autoridades judiciales contra el Sr. Yao son plenamente compatibles con la legislación y en modo alguno constituyen una detención arbitraria.

13. Comentando la respuesta del Gobierno, la fuente señaló que las acciones llevadas a cabo por Yao Fuxin y sus compañeros durante todos los acontecimientos mencionados en la comunicación habían sido pacíficas, y que la referencia del Gobierno a las infracciones y otros actos violentos del Sr. Yao y otros carecía de todo fundamento. La fuente añade que el 20 de marzo, tres días después de la detención de Yao Fuxin, los representantes de los trabajadores de la Fábrica de Ferroaleaciones que deseaban presentar una petición a los funcionarios del gobierno municipal entraron precipitadamente en el edificio durante una tormenta repentina.

Éste fue el único momento en que alguien "irrumpió en el edificio del gobierno local". La fuente añade que según la esposa de Yao Fuxin, el Sr. Yao y otros dirigentes sindicales lejos de incitar a la violencia o de desorganizar los transportes públicos disuadieron en varias ocasiones a los trabajadores de bloquear las líneas de ferrocarril.

14. La fuente afirma que la detención y encarcelamiento de Yao Fuxin se debe exclusivamente al ejercicio de su derecho a la libertad de reunión y asociación. La práctica constante del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha consistido en considerar que una detención realizada simplemente para castigar el ejercicio de los derechos protegidos por los instrumentos nacionales es arbitraria. De hecho, los instrumentos internacionales pertinentes protegen únicamente el ejercicio *pacífico* de la libertad de reunión y asociación.

15. Para evaluar si la detención de Yao Fuxin es arbitraria es esencial determinar si el Sr. Yao ejerció en esta ocasión el derecho de libertad de reunión pacífica o si por el contrario llevó a cabo actos violentos. La exposición de los acontecimientos por la fuente y por el Gobierno coinciden en que la quiebra de la fábrica y las subsiguientes dificultades para pagar los salarios a los empleados produjeron tirantez en la localidad; las versiones de la fuente y del Gobierno son completamente contradictorias, sin embargo, en lo referente al carácter pacífico o violento de las acciones del Sr. Yao.

16. La posición del Grupo de Trabajo es que el Gobierno no justificó con argumentos convincentes su versión de que los actos de Yao Fuxin fueran violentos. A juicio del Grupo de Trabajo podría haberse dejado constancia de las diversas actividades de la agitación y del papel violento que Yao Fuxin supuestamente desempeñó en ellas. Pero el Gobierno no justificó sus alegaciones con documentos convincentes, tales como copias de los registros oficiales, declaraciones de los testigos en las actuaciones penales iniciadas contra Yao Fuxin o decisiones de los tribunales dictadas contra él. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que, *prima facie*, no puede considerarse que el ejercicio por Yao Fuxin del derecho de reunión y asociación no fuese pacífico.

17. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Yao Fuxin es arbitraria por estar en contravención con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que China es signatario, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y considere la posibilidad de ratificar lo antes posible el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 28 de noviembre de 2002

## **OPINIÓN N° 16/2002 (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de agosto de 2002.*

*Relativa a:* Georges Atkinson, ciudadano británico, empresario e ingeniero paisajista.

### **El Estado no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Copiar el texto del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Copiar el texto del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las alegaciones hechas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
5. Según la fuente, Georges Atkinson, ciudadano británico nacido el 16 de mayo de 1951, empresario e ingeniero paisajista, fue detenido el 1° de marzo de 1997 en Dubai, poco antes de la fecha prevista para su regreso a los Estados Unidos. Sólo el 5 de abril de 1998 fue acusado de haber pagado comisiones ilícitas a un cierto Stephen Trutch, que a la sazón trabajaba como ingeniero para el Jeque Mohammed. El Sr. Atkinson, que había participado en el diseño de tres campos de golf y otras actividades paisajistas entre 1982 y 1993 negó las acusaciones.
6. En varias ocasiones, los jueces ordenaron que fuera puesto en libertad bajo fianza, pero estas órdenes no se cumplieron. En vez de ello, su detención se prolongó en varias ocasiones, aunque no debería haberse prolongado más de tres veces de conformidad con las disposiciones legales que habrían sido aplicables a su caso.
7. El 17 de septiembre de 1998, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió la opinión N° 17/1998 (Emiratos Árabes Unidos). En aquel momento, el Grupo de Trabajo consideró que la privación de libertad de Georges Atkinson era arbitraria por contravenir lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 36 a 39 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y corresponder a la categoría III de los principios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo (véase E/CN.4/1999/63/Add.1).
8. No obstante la opinión emitida por el Grupo de Trabajo, el Sr. Atkinson fue finalmente sentenciado en febrero de 1999 a una pena de prisión de seis años y al pago de una indemnización de 7.820.144 Dh. El 28 de febrero de 2000, el Sr. Atkinson completó la mitad de su sentencia y un año más tarde, el 28 de febrero de 2001, las dos terceras partes de la sentencia (es decir, cuatro años de prisión efectiva). El 28 de febrero de 2002 había cumplido cinco años en prisión, es decir, las tres cuartas partes de su sentencia, más un período adicional de seis meses. Según la fuente, la legislación y el derecho consuetudinario pertinente de Dubai permiten la puesta en libertad discrecional de un recluso en cualquier momento después de haber

cumplido la mitad de la sentencia, y la puesta en libertad obligatoria después de haber cumplido las tres cuartas partes de la sentencia, siempre que el recluso hubiese dado muestras de buena conducta durante el encarcelamiento y no se hubiese determinado que constituía un peligro para la seguridad nacional o para el público. La fuente afirma además que los registros penitenciarios demuestran de manera concluyente que las autoridades penitenciarias estaban de acuerdo en que el Sr. Atkinson había cumplido estos criterios.

9. Sin embargo, el mismo tribunal que había condenado al Sr. Atkinson le pidió que satisficiera "una orden pendiente de indemnización" por valor de 99.822 Dh, una suma considerable. Los funcionarios le aseguraron repetidas veces que si pagaba esta suma sería puesto en libertad. El 19 de marzo de 2002 pagó la suma exacta de 99.822 Dh al tribunal y se le entregó un recibo. En la misma fecha las autoridades carcelarias escribieron al Procurador General confirmando que el Sr. Atkinson había completado su sentencia y había pagado "todas las sanciones financieras pendientes", y solicitaron su puesta en libertad y la devolución del pasaporte para que pudiera ser deportado. El 15 de junio de 2002, los registros del Sr. Atkinson en la Oficina del Procurador General (Ref. 1462-97) mostraban que su caso había concluido y su expediente se había cerrado. Sin embargo no fue puesto en libertad.

10. La fuente comunica además que el Sr. Atkinson nunca ha sido una amenaza para el orden público y que sus supuestos crímenes no implicaban violencia ni eran delitos graves, como el tráfico de estupefacientes. Otros reclusos condenados por delitos tales como asesinato, violación, robo y delitos financieros graves y que habían recibido sentencias más severas que la suya (incluida la pena de muerte y la cadena perpetua) habían sido puestos en libertad anteriormente como resultado de las mencionadas disposiciones de la legislación nacional de Dubai.

11. En su respuesta, de fecha 13 de noviembre de 2002, el Gobierno declaraba que después de ser declarado culpable por el Tribunal Penal de Dubai, el 13 de diciembre de 1998, el Sr. Atkinson había sido condenado a seis años de prisión y al pago de 7.820.144 Dh, a saber una multa de 7.720.322 Dh (aproximadamente 1,3 millones de £) y una indemnización de 99.822 Dh (unas 16.000 £). La legislación de los Emiratos dispone la puesta en libertad de un recluso después de que haya cumplido las tres cuartas partes de su sentencia, siempre que haya dado pruebas de buena conducta.

12. En la fecha en que el Sr. Atkinson completó las tres cuartas partes de su pena de prisión (31 de agosto de 2001), no había pagado parte alguna de la suma ordenada por el tribunal, pese a tener recursos importantes, lo que se consideró como una decisión evidentemente obstruccionista. En consecuencia no se tomó ninguna decisión para reducir su pena de prisión. Sin embargo, en su carta de 12 de noviembre de 2000 dirigida al Emir de Dubai solicitando clemencia, el Sr. Atkinson declaró que disponía de recursos por un total de 7.695.600 Dh. Al abogado del Sr. Atkinson se le dijo que su cliente tendría que facilitar una lista actualizada, detallada y verídica de todos sus bienes y los de su familia inmediata, así como de los bienes transferidos a otras personas desde su detención en marzo de 1997.

13. El Sr. Atkinson no facilitó esta información, pero el 19 de marzo de 2002, pagó 99.822 Dh como parte de la cantidad fijada. La ley dispone que si la cantidad pagada por la persona condenada es insuficiente para cubrir la suma total fijada, el pago se aplicará primeramente al pago de la multa y después al pago de la indemnización.



14. En el caso de que no se pague la suma ordenada por el tribunal, la legislación dispone que se añadan más días a la sentencia (hasta un máximo de seis meses). Debido a la importancia de la suma ordenada por el tribunal, el período adicional en el caso del Sr. Atkinson habría sido seis meses completos. A juicio del Gobierno, este período adicional comienza el 1º de marzo de 2003, cuando termina la pena de prisión de seis años completos, y finalizará el 31 de agosto de 2003.

15. El Gobierno añadió que se estudiaría la cuestión si el Sr. Atkinson hubiera facilitado, como se le pidió, una declaración verídica de sus recursos. Como alternativa, podría pagar la cantidad pendiente de la multa y la indemnización ordenada por el tribunal.

16. En su réplica a la respuesta del Gobierno, la fuente repitió los argumentos que, a su juicio demostraban que la detención del Sr. Atkinson era arbitraria.

17. De lo que precede se deduce que la comunicación plantea una cuestión de interpretación de los reglamentos nacionales relativos a los procedimientos para la ejecución de una pena de prisión y, en particular, al derecho a la puesta en libertad anticipada. La fuente invoca la violación de la legislación interna como prueba de su afirmación de que el hecho de que el Sr. Atkinson siguiese encarcelado después del 28 de febrero de 2002 constituye una detención arbitraria.

18. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con sus métodos de trabajo y su mandato, puede pedirle que examine la legislación interna para asegurarse de que se han aplicado las leyes del país y, en tal caso, cercionarse de que esta legislación se ajusta a las normas internacionales. En el caso actual, en el que no se trata de una cuestión de aplicación sino de interpretación de una disposición legislativa interna relativa a la puesta en libertad anticipada, el Grupo de Trabajo considera que el expediente a su disposición no contiene la información que se necesitaría para tomar una decisión. No obstante, el Grupo de Trabajo desea señalar que si a una persona condenada que reúne los requisitos para su puesta en libertad condicional o anticipada se le niega la oportunidad de reclamar su derecho o se la mantiene injustamente detenida, el hecho de que esta persona siga encarcelada puede considerarse que equivale a una detención arbitraria.

19. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la opinión siguiente:

Por lo que respecta al encarcelamiento de George Atkinson desde la fecha de su detención hasta la fecha en que fue sentenciado, el 13 de diciembre de 1999, el Grupo de Trabajo subraya que este encarcelamiento fue de carácter arbitrario según la opinión del Grupo de Trabajo N° 17/1998, aprobada el 17 de septiembre de 1998 (véase E/CN.4/1999/63/Add.1). En esta opinión, el Grupo de Trabajo pedía también al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para remediar la situación conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1997/50, pidió a los gobiernos interesados que tuviesen en cuenta las opiniones del Grupo de Trabajo y, llegado el caso, que adoptasen las medidas apropiadas para rectificar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad y que informasen al Grupo de Trabajo sobre las medidas que hubiesen adoptado. El Grupo

de Trabajo lamenta que el Gobierno no tuviese en cuenta la recomendación de que adoptase las medidas apropiadas para rectificar la situación.

Por lo que respecta, al período actual de encarcelamiento, desde la fecha de la sentencia dictada el 13 de diciembre de 1999, el Grupo de Trabajo considera que no dispone de información suficiente para emitir una opinión sobre si este encarcelamiento es de carácter arbitrario, lo que supondría una interpretación de los reglamentos internos sobre la concesión de la puesta en libertad anticipada.

Aprobada el 29 de noviembre de 2002

### **OPINIÓN N° 17/2002 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 17 de junio de 2002.

*Relativa a:* Joseph Amine Houeiss y Ayoub Chalaweeet.

#### **El Estado no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno el haberle facilitado la información necesaria.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus comentarios al respecto. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y las circunstancias del caso.
5. Según la fuente, el caso se refiere a dos ciudadanos libaneses detenidos en el Líbano y trasladados a la República Árabe Siria, donde se encuentran ahora encarcelados.
6. Joseph Amine Houeiss, nacido en 1960 y residente en Bolonia, Mont-Liban (Líbano), fue detenido, según se afirma, el 2 de junio de 1992, en la carretera de Dhour Choueir, en Bolonia, por miembros del ejército sirio tras un accidente en que su automóvil colisionó con un vehículo militar sirio. Como consecuencia de ello murieron dos soldados sirios y un tercero resultó herido.
7. Al parecer, el Sr. Houeiss fue trasladado a Siria, donde se le acusó de homicidio voluntario. Durante su juicio, celebrado en 1994 ante un tribunal militar en Siria, declaró que el accidente de carretera ocurrió en circunstancias en que sufría un ataque de epilepsia. Según parece, el tribunal desestimó su declaración y lo condenó a 20 años de trabajos forzados en Siria.
8. En 1998 un médico que lo atendía en la cárcel confirmó que el Sr. Houeiss era efectivamente epiléptico. Según informaciones recientes su salud se está deteriorando. Según la fuente, las autoridades libanesas nunca han solicitado la repatriación de ciudadanos libaneses detenidos en Siria.

9. La fuente considera que el encarcelamiento del Sr. Houeiss es arbitrario porque fue detenido en el Líbano por el ejército sirio y luego trasladado a Siria, donde fue juzgado y condenado por hechos ocurridos en el Líbano, sin el debido trámite de extradición.
10. Georges Ayoub Chalawee, nacido en 1962, y residente en Ashrafieh, Beirut, fue detenido, según se afirma, el 30 de marzo de 1994 en el Ministerio de Salud en Beirut, adonde había acudido con su padre. Fue conducido a un lugar desconocido para ser interrogado, y desde entonces su padre no lo ha vuelto a ver. Sólo seis meses más tarde el padre del Sr. Chalawee se enteró de que éste se encontraba encarcelado en Siria.
11. Según la fuente, el Sr. Chalawee fue encarcelado inicialmente en la prisión conocida como Sección Palestina en Damasco, desde donde fue conducido a la prisión de Mazzé, también en Damasco, donde recibía visitas de su familia. Hace cuatro años, el Sr. Chalawee fue trasladado a la prisión de Saydnaya, donde no se le permite recibir visitas.
12. La fuente considera que el encarcelamiento del Sr. Chalawee es arbitrario porque fue detenido en el Líbano y trasladado a Siria, donde se encuentra encarcelado sin que se hayan formulado cargos contra él, sin juicio alguno, y sin ningún procedimiento de extradición.
13. En su respuesta, el Gobierno de la República Árabe Siria señala que las dos personas mencionadas por la fuente en la comunicación fueron detenidas en 1992 tras un accidente de carretera en el que su vehículo colisionó con un vehículo militar sirio, matando a dos soldados e hiriendo gravemente a un tercero. Fueron condenados por el tribunal a 20 años de prisión por haber causado el accidente deliberadamente. El Gobierno añade que en 1998 las dos personas anteriormente mencionadas afirmaron que el conductor del vehículo en el momento del accidente, Sr. Joseph Houeiss, había sufrido una conmoción que le ocasionó un ataque de nervios. Las autoridades pertinentes están examinando esta afirmación y se informará al Grupo de Trabajo de los resultados oportunamente en cuanto se disponga de ellos.
14. En su respuesta, la fuente sigue impugnando la legalidad de la detención de Joseph Amine Houeiss en Siria, puesto que los hechos de que se le culpa ocurrieron en el Líbano, añadiendo que sufrió un ataque epiléptico que condujo al accidente y que su estado de salud fue reconocido oficialmente por el médico que lo atendió durante varios años en la prisión central de Damasco (se adjunta el certificado médico de fecha 5 de agosto de 1998). La fuente afirma que Georges Ayoub Chalawee fue detenido en el Líbano en 1994, no en 1992 como lo afirma el Gobierno, y que no sabía que estaba vinculado con el caso Houeiss, puesto que no se mencionó su nombre durante el juicio. La fuente impugna su detención en Siria por las razones mencionadas *supra* y añade que también protesta porque no se respetó el derecho del Sr. Houeiss a un juicio público, y por el hecho de que no se le ha autorizado a recibir visitas familiares desde 1998.
15. De lo que antecede, y teniendo en cuenta los documentos proporcionados por la fuente, el Grupo de Trabajo opina que debería tratarse cada caso por separado.
16. En relación con el caso de Joseph Amine Houeiss, para poder opinar si la detención es arbitraria o no, el Grupo de Trabajo debe determinar en primer lugar si el caso corresponde a una de las tres categorías de detención arbitraria definidas en sus métodos de trabajo y, en consecuencia, si corresponde al ámbito del mandato del Grupo de Trabajo. En relación con la

categoría I, es evidente que la privación de libertad del Sr. Houeiss tiene una base legal, a saber, un juicio. Con respecto a la categoría II, no cabe duda de que la privación de libertad no es el resultado del ejercicio legítimo de los derechos humanos a que se hace referencia. Con esto nos queda la categoría III. En el caso de que se trata, la fuente no denuncia una violación del derecho del Sr. Houeiss a un juicio equitativo; impugna más bien la legalidad de su detención por haber sido detenido por el ejército sirio en el Líbano y conducido a Siria, donde fue enjuiciado y sentenciado por hechos ocurridos en el Líbano.

17. A este respecto, el Grupo de Trabajo no cree que el traslado no autorizado de la persona de un país a otro para ser juzgado por un tribunal que es posible que no tenga jurisdicción territorial sea suficiente en este caso para clasificar la detención de arbitraria. Para que el Grupo de Trabajo pueda calificar la detención de arbitraria, debe determinar que el incumplimiento total o parcial por parte del tribunal de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio con las debidas garantías fue de gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario.

18. Con respecto a la afirmación de que el tribunal que juzgó a Joseph Amine Houeiss no tuvo en cuenta el hecho de que el accidente fue causado por su ataque de epilepsia, debe señalarse que aunque el Grupo de Trabajo, como lo ha afirmado reiteradamente, se ha abstenido siempre de evaluar las pruebas en las que se basa la decisión de un tribunal para privar a una persona de su libertad, la situación en el presente caso es diferente, puesto que el Sr. Houeiss fue conducido a Siria, juzgado por un militar tribunal y condenado a 20 años de prisión por creerse que causó intencionalmente la colisión con el vehículo militar sirio que provocó la muerte de dos soldados y dejó a un tercero gravemente herido. Por lo tanto, si se confirma su estado de salud, y resulta que, como siempre lo ha mantenido, la causa del accidente fue un ataque de epilepsia, debería volver a examinarse su caso.

19. La fuente ha facilitado un certificado médico firmado por el médico de la prisión central de Damasco en el que se confirma que el Sr. Joseph Amine Houeiss es epiléptico, y el Gobierno ha informado al Grupo de Trabajo de que las autoridades pertinentes están examinando actualmente esta afirmación, y que se informará al Grupo de Trabajo oportunamente de los resultados en cuanto se disponga de ellos. A la luz de todo esto, el Grupo de Trabajo decide mantener el caso de Joseph Amine Houeiss en suspenso en espera de nueva información, de conformidad con el apartado c) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

20. En relación con el caso de Georges Ayoub Chalawet, el Grupo de Trabajo toma nota de las discrepancias entre las alegaciones de la fuente y la respuesta del Gobierno. La fuente afirma que fue detenido en el Ministerio de Salud del Líbano el 30 de marzo de 1994, interrogado en un lugar secreto y luego conducido a Siria, donde se encuentra actualmente encarcelado sin juicio y sin que se le haya informado de los cargos que pesan contra él (por lo menos, ésa era la situación hasta 1998, fecha a partir de la cual se suspendieron las visitas familiares). En su respuesta, el Gobierno afirma que fue detenido en 1992 con Joseph Amine Houeiss, juzgado en el mismo caso y condenado a 20 años de prisión. Aunque el Gobierno no ha facilitado documento alguno para respaldar su argumento, la fuente ha proporcionado una copia de la sentencia dictada contra el Sr. Houeiss. El Grupo de Trabajo observa que esta sentencia, dictada el 7 de febrero de 1994 por el Primer Tribunal Militar de Damasco, se refiere únicamente al Sr. Joseph Amine Houeiss, sin hacerse mención alguna del Sr. Chalawet o de cualquier otra persona que pudiera haber estado

implicada con el Sr. Houeiss en este caso. Si el Sr. Chalaweet fue detenido con el Sr. Houeiss en 1992 por participación en el mismo caso, ¿por qué no se les juzgó juntos?

21. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que Georges Ayoub Chalaweet se encuentra privado de libertad desde el 30 de marzo de 1994 sin que se haya informado de ningún cargo contra él, sin una orden judicial sobre la legalidad de su detención y sin contacto alguno con su familia desde 1998, lo cual constituye una serie de violaciones de gravedad tal que confieren a su privación de libertad un carácter arbitrario. Dicha privación de libertad contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios 10 a 12 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

22. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la opinión siguiente:

Por lo que respecta a Joseph Amine Houeiss, el Grupo de Trabajo decide mantener el caso en examen en espera de información adicional y más reciente, de conformidad con el apartado c) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Por lo que respecta a Georges Ayoub Chalaweet, el Grupo de Trabajo opina que la privación de libertad es arbitraria, en contravención de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los principios 10 a 12 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y que corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos sometidos al Grupo de Trabajo.

23. El Grupo de Trabajo, una vez emitida esta opinión, pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y adopte medidas apropiadas con miras a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 29 de noviembre 2002

### **OPINIÓN N° 18/2002 (REPÚBLICA CENTROAFRICANA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 19 de agosto de 2002.

*Relativa al:* Teniente coronel Bertrand Mamour.

#### **El Estado no es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Copiar el texto del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no hay respondido en el plazo de 90 días.
3. (Copiar el texto del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)

4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. Al no haber recibido información alguna de éste, el Grupo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y las circunstancias del caso de que se trata, especialmente porque los hechos mencionados y las denuncias contenidas en la comunicación no han sido impugnados por el Gobierno.

5. El teniente coronel Bertrand Mamour, nacido en 1946 en Ouadja, coordinador nacional del Comité técnico de desarme de la República Centroafricana, e ingeniero en redes de telecomunicaciones, fue detenido el 16 de mayo de 2002 por falta disciplinaria, por haber abandonado sin autorización las instalaciones militares donde se encontraba los días 11 y 12 de mayo de 2002. Las autoridades le impusieron los arrestos de rigor en los locales de la comandancia de la gendarmería de Bangui. El 16 de junio de 2002 debió de haber recibido la autorización para salir, pero sigue detenido. Se ha informado al Grupo de Trabajo de que su familia debe venir a alimentarlo diariamente y cuidar de él, porque su salud se ha resentido a causa de esta detención. Según la información recibida, el teniente coronel Mamour no ha participado en los dos motines que tuvieron lugar en 1996 en la República Centroafricana, ni en el intento de derrocar al Gobierno del 28 de mayo de 2001, dirigido por el general Kolingba. Se le ha considerado siempre como un oficial correcto y leal.

6. La fuente añade que su detención podría deberse a divergencias con el general de división Xavier Sylvestre Yagongo, delegado para la defensa, encargado de la reestructuración de las fuerzas armadas, quien habría informado al Primer Ministro de que el teniente coronel Mamour había caído en el círculo de oficiales cuya mala conducta la comandancia general debía reprimir a toda costa. Al parecer acusó al teniente coronel Mamour de haber proferido palabras injuriosas contra él y de haber sustraído fraudulentamente el sueldo de uno de sus colegas. La detención prolongada del teniente coronel Mamour sería pues el resultado de un conflicto con el general Yagongo.

7. El Grupo de Trabajo reitera que los particulares están protegidos por el derecho internacional contra todo tipo de privación de libertad, ya sea que ésta tenga su origen en el marco de un procedimiento penal o de cualquier otra disposición legal. En el caso de que se trata, y sin pronunciarse sobre el carácter arbitrario o no del período de detención disciplinaria de 30 días, habida cuenta de que en la legislación de la República Centroafricana se prevé la detención de los militares hasta 30 días por razones disciplinarias, el Grupo de Trabajo constata que la prolongación de la detención del teniente coronel Mamour más allá de este período no puede justificarse con disposición jurídica alguna. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que a partir del 15 de junio de 2002 y hasta la fecha la detención del teniente coronel Mamour es arbitraria y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de sus métodos de trabajo.

8. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad del teniente coronel Bertrand Mamour a partir del 15 de junio de 2002 es arbitraria en el sentido de la categoría I de las categorías aplicables en el examen de los casos de que se ocupa el Grupo de Trabajo.

9. El Grupo de Trabajo, después de emitir esta opinión, pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para remediar la situación, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y adopte iniciativas adecuadas con miras a pasar a ser Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 29 de noviembre 2002

### **OPINIÓN N° 19/2002 (PERÚ)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 21 de agosto de 2002.

*Relativa a:* Rolando Quispe Berrocal.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno su respuesta pero lamenta que ésta haya sido remitida con posterioridad al plazo de 90 días establecido en los métodos de trabajo del Grupo.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Según las informaciones transmitidas por la fuente, Rolando Quispe Berrocal, soldado voluntario prestando su servicio militar como recluta en el cuartel Domingo Ayarza (ex cuartel "Los Cabitos") de Ayacucho, fue atacado por tres militares portando pasamontañas el 8 de julio de 2002, mientras se encontraba haciendo guardia en el almacén del cuartel, almacén del cual era responsable. Pudo reconocer la voz de dos de sus atacantes. Éstos le pusieron un trapo en la boca con una sustancia que le adormeció y le hizo luego perder el conocimiento.
5. Se afirma que durante la mañana siguiente, al no presentarse a la formación ni al desayuno, fue despertado por un superior quien, en castigo por su ausencia, le obligó a efectuar 20 flexiones con los brazos ("planchas"). El recluta no pudo hacer más de diez y tuvo que ser trasladado a la enfermería del cuartel, desde donde se ordenó su traslado al Hospital Regional de Huamanga, Ayacucho. Ahí un médico especialista pudo detectar que esta persona tenía en el recto un objeto compuesto por un envase de talco, que en su parte superior tenía acoplada una bombilla de luz de aproximadamente 5 cm de diámetro. El objeto medía en su totalidad 18 cm.
6. La fuente afirma que mientras el soldado Quispe Berrocal se encontraba internado en el hospital, fue puesto bajo custodia militar, la cual impidió o dificultó el contacto de esta persona con sus familiares, abogados, miembros de organizaciones de derechos humanos y periodistas. En esta situación de aislamiento, fue interrogado por efectivos militares y obligado a firmar y estampar sus huellas digitales en hojas en blanco y en escritos que no se le permitió leer con anterioridad. Se afirma también que un abogado militar, al cual extrañamente los custodios sí permitieron el acceso al detenido, intentó imponerse como su abogado defensor, lo que fue rechazado por el recluta.

7. Rolando Quispe Berrocal interpuso una denuncia penal por las torturas y lesiones sufridas ante el fuero común. En respuesta, se le abrió instrucción en el fuero privativo militar por interponer denuncias falsas. Se habría afirmado que en realidad se trata de un homosexual infiltrado en el ejército, y que él mismo se habría introducido el objeto encontrado en su cuerpo.
8. Se alega que desde entonces, tanto Rolando Quispe Berrocal como sus familiares vienen sufriendo diversos actos de hostigamiento y presiones, e incluso amenazas de muerte. Efectivos militares habrían intentando persuadir a esta persona a que retire y se retracte de su denuncia y a que modifique su versión de los hechos. Incluso se le habría amenazado de muerte.
9. El 15 de julio de 2002, algunos medios de comunicación locales difundieron como cierto el falso rumor de que el soldado Quispe Berrocal había fallecido. Se alega que oficiales militares ofrecieron dinero al padre de esta persona "para ir a Lima a divertirse" a cambio de convencer a su hijo de cambiar su versión de los hechos y retirar su denuncia. Al rechazar el ofrecimiento, efectivos militares intentaron echarle del hospital por la fuerza. Un sacerdote de apellido Zegarra, capellán del ejército y miembro de la vicaría castrense, y un teniente coronel del ejército de apellido Bernal, increparon al recluta Quispe Berrocal y a sus familiares que "sus denuncias estaban perjudicando al ejército» y que éstas "podrían motivar la salida del ejército de padres de familia".
10. El 17 de julio de 2002, un fiscal impidió a dos oficiales militares el acceso a la habitación del hospital donde se encontraba el soldado Quispe Berrocal. Éste se encontraba rindiendo una prueba judicial pericial de evaluación psicológica. Los militares, quienes se presentaron como abogados del Servicio Jurídico Militar, se retiraron profiriendo, delante del fiscal, insultos y amenazas contra el soldado Quispe Berrocal y gritando frases como "muerto el perro, muerta la rabia". Ante esta situación, el fiscal tuvo que suspender la actuación judicial.
11. El poder judicial, resolviendo una acción de hábeas corpus interpuesta en favor del soldado Quispe Berrocal, ordenó la suspensión de su servicio militar. Pese a ello, el 2 de agosto de 2002, el Juzgado Militar Permanente de Ayacucho encontró que el soldado Quispe Berrocal era culpable de la comisión del delito de falsedad, afirmando que se había inflingido lesiones a sí mismo, y le condenó a la pena de 30 días de detención y al pago de una multa de 1.500 soles (aproximadamente 420 dólares de los Estados Unidos). Mientras tanto, los responsables de los actos de tortura y lesiones sufridas por Rolando Quispe Berrocal se encuentran libres y disfrutando de impunidad.
12. La fuente añade que en adición a la detención y condena de la víctima, a la que se acusa de haberse autolesionado, no se ha tampoco adoptado ninguna medida de protección para garantizar la vida, la integridad física y psicológica, y la seguridad de Rolando Quispe Berrocal ni de sus familiares, pese a las amenazas de muerte proferidas por miembros del ejército en presencia incluso de un fiscal y durante la celebración de actuaciones judiciales. Se alega por último que pese a lo establecido por la Ley N° 26999, no se ha abierto ningún proceso judicial en el fuero común por las torturas sufridas por esta persona.
13. En su respuesta, el Gobierno del Perú informa que esta persona ha sido condenada por el Consejo Supremo de Justicia Militar por delito de falsedad al considerar que fue esta misma persona quien se ha causado las lesiones. El Fiscal Militar habría solicitado se le impusiese seis



meses de reclusión militar y se le condenase al pago de 2.000 soles por concepto de reparación civil. El delito de falsedad se encuentra tipificado en el artículo 301, inciso 4, del Código de Justicia Militar.

14. El Gobierno informa también de que pese a la condena de Rolando Quispe Berrocal, el fuero común viene realizando las investigaciones pertinentes para determinar alguna presunta responsabilidad penal en las tres personas denunciadas por el Sr. Quispe Berrocal como posibles autores de un delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura, y contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento real.

15. El Grupo de Trabajo, por las informaciones de que dispone y que el Gobierno no ha contradicho, estima que el soldado Quispe Berrocal tuvo que ser ingresado a un hospital e internado por haber sido sujeto de torturas y malos tratos, hechos que denunció al fuero común, encontrándose bajo custodia militar, mientras duró el proceso iniciado por la justicia militar por falsedad en su contra.

16. Durante el período que duró este proceso, se observa que Rolando Quispe Berrocal fue seriamente impedido de ejercer su derecho a la defensa, dificultándole comunicarse, entre otros, con abogados de su elección y disponer de medios adecuados para preparar su defensa, siendo amenazado, presionado, y obligado a firmar papeles en blanco y documentos que no pudo leer. Se le impidió asimismo ejercer sus derechos como denunciante en el caso de torturas agravadas.

17. Asimismo, el Grupo de Trabajo ha constatado que se le ha dificultado acceder, a pesar de que la ley lo dispone expresamente, a los beneficios de la justicia del fuero común.

18. Por lo expuesto, el Grupo de Trabajo considera que la detención del soldado Quispe Berrocal es una grave contravención de normas internacionales relativas a un juicio imparcial de una gravedad tal, que confieren a su privación de libertad un carácter arbitrario.

19. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Rolando Quispe Berrocal es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual la República del Perú es Parte, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

20. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que tome las iniciativas adecuadas con vista a cumplir plenamente con sus obligaciones como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estudie la posibilidad de enmendar su legislación militar para adaptarla a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a las demás normas internacionales pertinentes aceptadas por ese Estado.

Aprobada el 2 de diciembre de 2002

### **OPINIÓN N° 20/2002 (TÚNEZ)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 16 de julio de 2002.

*Relativa a:* Hamma Hamami, Abdeljabar Madouri y el Sr. Samir Taamallah.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Véase el texto del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno el haberle facilitado oportunamente la información solicitada.
3. (Copiar el texto del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. El Grupo de Trabajo toma nota con satisfacción de que el Gobierno le ha informado de que las personas mencionadas ya no están privadas de libertad. Esta información ha sido comunicada a la fuente, que la ha confirmado.
5. El Gobierno ha informado en efecto de que el Sr. Hamma Hamami fue condenado por el Tribunal de Apelación de Túnez a tres años y dos meses de prisión, y de que éste condenó a los Sres. Abdeljabar Madouri y Samir Taamallah, respectivamente, a un año y a nueve meses de prisión. El Gobierno ha informado asimismo de que el 4 de septiembre de 2002 Hamma Hamami y Samir Taamallah fueron puestos en libertad condicional por razones humanitarias después de haber cumplido siete meses de detención y que, el 5 de noviembre de 2002, Abdeljabar Madouri fue a su vez puesto en libertad tras cumplir nueve meses de detención. La fuente mantiene que la privación de libertad fue arbitraria y pone en duda la liberación por razones humanitarias.
6. El Grupo de Trabajo, sin prejuzgar el carácter arbitrario o no de la detención, decide clasificar el caso de los Sres. Hamma Hamami, Abdeljabar Madouri y Samir Taamallah conforme al apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobado el 3 de diciembre de 2002

### **OPINIÓN N° 21/2002 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 1° de mayo de 2002.

*Relativa a:* Ayub Ali Khan y Azmath Jaweed.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno el haberle facilitado la información necesaria.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)

4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno, pero lamenta que no le haya proporcionado toda la información solicitada y que no haya facilitado su tarea investigando puntos concretos del caso citados en una carta de fecha 1º de mayo de 2002 del Presidente Relator del Grupo de Trabajo. El 22 de noviembre 2002 el Grupo de Trabajo transmitió la respuesta proporcionada por el Gobierno a la fuente. Hasta la fecha, ésta no ha comunicado al Grupo de Trabajo sus comentarios. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y las circunstancias del caso, en el contexto de las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno a éstas.

5. De conformidad con la información presentada al Grupo de Trabajo por la fuente, Ayub Ali Khan (alias Syed Gul Mohammed Shah), nacido en 1967, de nacionalidad india, y Azmath Jaweed, también de nacionalidad india, residían en Nueva Jersey y buscaban empleo antes de ser arrestados el 13 de septiembre de 2001 en la estación de ferrocarril Amtrak en San Antonio, Texas, por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en relación con los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos.

6. Según los informes ambas personas se encuentran detenidas sin cargos o acusaciones en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York, en régimen de aislamiento. También se ha afirmado que se encuentran detenidos por mera presunción y sospechas infundadas en relación con los ataques del 11 de septiembre de 2001, y que todas las investigaciones necesarias han concluido. No se ha demostrado que Ayub Ali Khan y Azmath Jaweed no tuvieron participación alguna en dichos acontecimientos.

7. La fuente informa además de que Ayub Ali Khan y Azmath Jaweed son las únicas fuentes de ingresos para sus familias en la India. La anciana madre de Ayub Ali Khan sufre de hipertensión y diabetes y no podía comunicarse con su hijo. También se informó de que los familiares se comunicaron con el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa para saber si eran objeto de alguna actuación judicial y solicitaron un visado para ingresar en los Estados Unidos, sin recibir respuesta alguna.

8. En su respuesta, que no contiene información concreta sobre los casos de que se trata, el Gobierno se refiere a las preocupaciones generales señaladas en la comunicación e insiste en que en todas las detenciones efectuadas por las autoridades federales, estatales y locales deben respetarse las medidas de protección sustantivas y de procedimiento aplicables en los Estados Unidos.

9. El Gobierno también señaló que para que una persona pueda ser privada de libertad y sometida a custodia federal, estatal o de la administración local, la detención sólo puede tener lugar sobre la base de un auto de detención y de una orden posterior que justifique la prolongación de la detención. Además, en general los detenidos, ya sea por motivos penales o cargos vinculados con la inmigración, tienen derecho a comparecer ante una instancia administrativa o judicial para determinar la legalidad de su detención. Hay algunas excepciones a esta norma en el contexto de la inmigración, que a juicio del Gobierno no son pertinentes en el presente caso.

10. En esas comparecencias, los interesados tienen derecho a impugnar los cargos que se les imputan y a pedir su puesta en libertad. En los procedimientos penales se les notifica su derecho a estar representado por un abogado de oficio si no pueden costearse un abogado privado. En los procedimientos de inmigración se comunica a los interesados que gozan del privilegio de estar representados por un abogado sin costo alguno para el Gobierno, y se les facilita una lista de abogados voluntarios. Además, tanto en los procedimientos penales como en los de inmigración, se notifican a todos los detenidos las acusaciones interpuestas contra ellos y se les ofrece la oportunidad de solicitar su libertad condicional, aplazamientos para preparar su defensa, la oportunidad de examinar y confrontar las pruebas de la acusación y el derecho a apelar.

11. Por las razones que anteceden, el Gobierno estima que el Grupo de Trabajo no debería examinar la comunicación porque no se ha demostrado que el Sr. Khan y el Sr. Jaweed hayan sido sometidos a detención arbitraria.

12. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo habría deseado una mayor cooperación por parte del Gobierno, que ha dispuesto de más de 7 meses, y no sólo de los 90 días previstos en el párrafo 15 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, para aclarar la situación de estas personas. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que el Gobierno solicitó un plazo adicional, que fue concedido de conformidad con el párrafo 16 de los métodos de trabajo, pero señala que, en su respuesta, no hizo más que describir el procedimiento habitual con arreglo a la legislación de los Estados Unidos sin proporcionar información alguna sobre las personas de que se trata. De hecho, el Gobierno inició su respuesta con las palabras "Sin proporcionar información específica alguna sobre los casos de que se informa...".

13. El Grupo de Trabajo habría agradecido una información más amplia sobre los casos que se examina para poder cerciorarse de que se estaban observando las garantías establecidas en las normas internacionales pertinentes y en la legislación de los Estados Unidos, en particular habida cuenta de que la fuente afirma que las familias de las personas mencionadas han intentado comunicarse con los detenidos, sin éxito, y de que se han dirigido a las autoridades de los Estados Unidos para indagar las razones de su prolongada detención, también sin éxito.

14. A este respecto, en los documentos de que dispone el Grupo de Trabajo consta que la madre de Ayub Ali Khan recibió una carta de fecha 14 de noviembre de 2001 de un abogado designado por el Gobierno de los Estados Unidos para prestar asistencia a su hijo. En la carta se confirmaba que el Sr. Khan había sido detenido como testigo esencial en las investigaciones por parte del FBI de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que se le mantenía detenido, conjuntamente con otra persona, sin cargos u orden de detención.

15. A la luz de lo que precede, el Grupo de Trabajo estima que el Sr. Khan y el Sr. Jaweed han permanecido detenidos más de 14 meses, según parece en régimen de aislamiento, sin que se les haya informado oficialmente de cargo alguno, sin poder comunicarse con sus familiares y sin que se haya pedido a un tribunal que dictamine sobre la legalidad de su detención.

16. La gravedad de esta serie de violaciones confiere un carácter arbitrario a su detención, que constituye una violación de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que son Parte los Estados Unidos de América y que garantizan, respectivamente, el derecho al examen de la legalidad de la detención por una autoridad judicial competente, y el derecho a un

juicio con las debidas garantías, así como los principios 10 a 12 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

17. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Ayub Ali Khan y del Sr. Azmath Jaweed es arbitraria, por contravenir los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que los Estados Unidos son Parte, y los principios 10 a 12 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, y corresponde a la categoría III de los principios aplicables al examen de casos sometidos al Grupo de Trabajo.

18. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación y se respeten las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 3 de diciembre 2002

### **OPINIÓN N° 1/2003 (VIET NAM)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 21 de enero de 2003.

*Relativa a:* Le Chi Quang.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 18 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información relativa al caso.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. A la luz de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con agrado la cooperación del Gobierno. La respuesta facilitada por el Gobierno fue transmitida a la fuente, que formuló sus comentarios al Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso.
5. Según la información facilitada por la fuente al Grupo de Trabajo, Le Chi Quang, abogado e informático vietnamita, nacido el 30 de junio de 1970, fue detenido por las fuerzas de seguridad el 21 de febrero de 2002 sobre las 9.50 horas cuando enviaba un mensaje de correo electrónico en un cibercafé de Hanoi. Al parecer las fuerzas de seguridad llevaron a Le Chi Quang a su casa, donde le confiscaron diversos documentos y su computadora.
6. Según la información recibida, Le Chi Quang fue detenido por haber publicado diversos artículos en Internet en los que se exigían reformas políticas y en los que se criticaba la política del Gobierno, en especial respecto de los acuerdos fronterizos por tierra y por mar entre China y

Viet Nam. El 24 de septiembre de 2002, después de permanecer ocho meses en detención, Le Chi Quang fue acusado según se informa de propugnar el pluralismo y un sistema multipartidista, de difundir documentos que se oponían al Partido Comunista vietnamita y de participar en actividades de la Asociación contra la Corrupción.

7. El 8 de noviembre de 2002, después de un juicio que duró tres horas, el Tribunal Popular de Hanoi condenó a Le Chi Quang a cuatro años de cárcel y a tres años de arresto domiciliario por difundir propaganda contra el Estado, de conformidad con el artículo 88 del Código Penal. Según la información recibida, los padres de Le Chi Quang fueron los únicos observadores a los que se permitió entrar en sala de audiencia. Al parecer no se permitió que ningún abogado extranjero representara a Le Chi Quang, con lo que se le privó del derecho a solicitar la asistencia de un abogado de su elección.

8. Según la información facilitada por la fuente, actualmente Le Chi Quang está encarcelado en la prisión B14. Al parecer, él y otro prisionero comparten una celda de 6 m<sup>2</sup>, duermen en el suelo sucio y hacen sus necesidades en un cubo.

9. La fuente también informa de que Le Chi Quang padece una disfunción renal grave e inflamaciones estomacales. Se teme que en la cárcel no pueda recibir la atención médica necesaria.

10. En su respuesta de fecha 17 de marzo de 2003, el Gobierno afirmó que en Viet Nam nunca se ha detenido, perseguido ni juzgado a nadie por escribir artículos de prensa que pidan una reforma o critiquen la política del Gobierno. La Constitución, las leyes y los reglamentos de Viet Nam estipulan claramente que todos los ciudadanos vietnamitas tienen derecho a la libertad de información, expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación.

11. Se afirma también que Le Chi Quang cometió actos que violaban el artículo 88 del Código Civil de la República Socialista de Viet Nam. Todas las actividades relacionadas con su detención, instrucción, enjuiciamiento y juicio han sido conformes a las leyes y reglamentos de Viet Nam, a saber, el Código de Enjuiciamiento Criminal promulgado el 30 de junio de 2000 que fue enmendado posteriormente el 9 de junio de 2002. Oportunamente se informó a la familia de Le Chi Quang de su detención, enjuiciamiento y juicio. El juicio fue público, de conformidad con las garantías procesales, y se garantizó el derecho del acusado a la defensa y a la autodefensa, y cabe señalar que finalmente el acusado decidió no interponer ningún recurso. El Gobierno también informa de que en virtud del Código de Organización de los Tribunales Populares y del Código de Enjuiciamiento Criminal, los tribunales populares son la única instancia que decide si se permite que los abogados extranjeros estén presentes en la sala de audiencia para defender al acusado.

12. El Gobierno afirmó que actualmente Le Chi Quang está cumpliendo su condena y recibe el mismo trato que los demás reclusos que han cometido delitos similares y que si estuviera enfermo recibiría el cuidado adecuado y el tratamiento médico apropiado sin ninguna discriminación.

13. En su réplica, la fuente señala que en su respuesta el Gobierno no menciona los delitos de los que está acusado, en realidad, Le Chi Quang y añade que, según la acusación de la Fiscalía, Le Chi Quang está acusado de recoger, escribir y distribuir documentos que contienen distorsiones de la situación política del país y la situación interna del Partido y del Gobierno.

14. De lo que antecede parece que la comunicación contiene numerosas denuncias, algunas de las cuales entran en el ámbito del mandato del Grupo de Trabajo. De esas denuncias, las relativas a las condiciones de detención serán remitidas al Relator Especial contra la tortura. La opinión del Grupo de Trabajo se limita a los aspectos legales de la detención, que son los únicos que entran en su mandato.
15. En cuanto a los aspectos legales de la detención en cuestión, según la fuente, Le Chi Quang fue detenido, juzgado y condenado a cuatro años de cárcel a los que seguirán tres años de arresto domiciliario, por haber publicado artículos en Internet en los que se criticaba la política del Gobierno y los acuerdos fronterizos entre los Gobiernos de Viet Nam y China, por haber exigido reformas y por haber participado en actividades de una asociación contra la corrupción. En su respuesta, el Gobierno afirmó que Le Chi Quang no fue detenido por haber expresado su opinión sino por haber cometido actos que violaban el artículo 88 del Código Penal de Viet Nam. El Gobierno no especifica el carácter de los cargos imputados por violar el artículo 88 y tampoco indica qué actos dan lugar a dichos cargos.
16. En consecuencia, el Grupo de Trabajo supone que los actos de los que se acusó a Le Chi Quang fueron los descritos en la comunicación, es decir, poner por escrito, expresar y difundir opiniones. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que esas acciones simplemente representan el ejercicio pacífico de los derechos de libertad de expresión y opinión que se garantizan en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Viet Nam es Parte.
17. En cuanto a la cuestión de la violación de la legislación nacional mencionada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con su mandato, debe garantizar la coherencia de la ley nacional con las disposiciones internacionales pertinentes previstas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes a los que el Estado en cuestión se ha adherido. Como consecuencia, incluso si la detención es conforme a la legislación nacional, el Grupo de Trabajo debe garantizar que también sea coherente con las disposiciones pertinentes del derecho internacional. Sin embargo, en el caso actual, habida cuenta de que el Gobierno no parece imputar a Le Chi Quang ningún otro cargo, aparte de los mencionados en la comunicación de la fuente, no puede considerarse que la legislación nacional en la que se basa ese cargo sea coherente con las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:
- La privación de libertad de Le Chi Quang es arbitraria porque contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

19. Después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que estudie la posibilidad de modificar la legislación y ajustarla a la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás normas internacionales pertinentes aceptadas por ese Estado.

Aprobada el 6 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 2/2003 (CHINA)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 27 de enero de 2003.*

*Relativa a:* Yang Jianli.

#### **El Estado ha firmado, pero todavía no ha ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 18 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información solicitada.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. A la luz de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. Sin embargo, el Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya abordado todas las importantes cuestiones planteadas por la fuente. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus comentarios. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.
5. Según la información facilitada por el Grupo de Trabajo, Yang Jianli, de 39 años, ciudadano de China y residente legal en los Estados Unidos de América, fue detenido el 26 de abril de 2002 en el aeropuerto de Kunming por miembros de la Oficina de Seguridad Pública de Kunming porque se sospechaba que había entrado en China con documentos de identidad falsos o incompletos. Las fuerzas que llevaron a cabo la detención no mostraron ningún auto de formal detención ni ninguna otra orden de una autoridad pública.
6. Según los informes, Yang Jianli fue llevado a un hotel cercano al aeropuerto. Pudo hablar por teléfono con su mujer, Fu Xiang, que estaba en su casa de Brookline (Massachusetts) la noche del 26 de abril de 2002. Yang Jianli informó a su mujer de que le habían detenido y de que se encontraba en la habitación de un hotel vigilado por policías. Volvió a hablar con ella al día siguiente. Desde entonces, ha permanecido detenido en régimen de incomunicación. Se cree que se encuentra en el Centro de detención de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing.



7. Según la información facilitada, Yang Jianli nació en China y sigue siendo ciudadano de ese país. Al parecer en junio de 1989 se vio obligado a huir de China por su participación en los eventos conocidos popularmente como la "rebelión de 1989 de la plaza Tiananmen". En 1992 obtuvo un permiso de residencia para extranjeros ("*green card*") del Gobierno de los Estados Unidos. En 1991, se doctoró en matemáticas en la Universidad de California (Berkeley). Diez años después, obtuvo un doctorado en economía política y administración en la Facultad de Administración Kennedy de la Universidad de Harvard. Yang Jianli es el fundador y Presidente de la organización "Fundación para la China del siglo XXI" y ha participado activamente en el movimiento para promover la democratización desde el decenio de 1980.

8. Al parecer las autoridades se han negado a permitir que miembros de la familia visiten a Yang Jianli y a que dispongan lo necesario para facilitarle asistencia letrada. No se ha presentado ninguna acusación formal contra él. También se ha informado de que las autoridades reconocieron extraoficialmente la detención de Yang Jianli aproximadamente dos meses después de producirse ésta, cuando el 21 de junio de 2002 las autoridades policiales de la ciudad de Linyi, en la provincia de Shandong, informaron por teléfono al hermano de Yang Jianli, Yang Jianjun, de que éste había sido detenido oficialmente el 2 de junio de 2002.

9. Se afirmaba que, según la legislación china, el hecho de que las autoridades no proporcionaran una copia del auto oficial de prisión a la familia de Yang Jianli les impedía facilitarle asistencia letrada. Se añadía que los abogados no podían defender un caso sin una copia del auto formal de prisión.

10. Se dijo que en el artículo 64 de la Ley de procedimiento penal de la República Popular de China se estipula que 24 horas después de la detención de una persona, la instancia que ha ordenado la detención debe notificar a la familia o al empleador del detenido los motivos de ésta y el centro de detención, excepto en los casos en los que esta notificación pudiera obstaculizar la fase de instrucción. Las autoridades no lo hicieron.

11. Además se dijo que el artículo 69 de la Ley de procedimiento penal permite detener a una persona sin orden judicial en determinadas circunstancias de emergencia. Normalmente una persona puede permanecer detenida durante un máximo de 37 días. Se denunció que las autoridades no pusieron en libertad a Yang Jianli en el plazo máximo de 37 días.

12. La fuente señaló que aunque la ley exige que al detenido se le permita tener acceso a una asistencia letrada rápida, Yang Jianli no ha podido ponerse en contacto con ningún abogado. Las autoridades no han proporcionado a la familia de Yang Jianli ninguna copia del auto formal de prisión para que su familia disponga lo necesario para facilitarle asistencia letrada, lo que efectivamente niega a Yang Jianli el derecho a asistencia letrada.

13. La fuente también informa de que la mujer de Yang Jianli se desplazó de los Estados Unidos a China para intentar descubrir dónde permanecía detenido su marido y los motivos de su detención y para facilitarle asistencia letrada. Llegó a China el 23 de mayo de 2002 y fue expulsada de dicho país por la fuerza el mismo día.

14. En los comentarios sobre las denuncias formuladas por la fuente, el Gobierno afirmó que Yang Jianli fue detenido por las autoridades de seguridad pública de China en abril de 2002 por entrar ilegalmente en el país con el pasaporte de otra persona. El 21 de junio de 2002, después

de haber obtenido la autorización necesaria de la fiscalía de Beijing, fue encarcelado por las autoridades de seguridad pública de Beijing bajo sospecha de que sus actividades violaban las disposiciones del artículo 322 del Código Penal chino, en relación con el delito de cruzar ilegalmente la frontera de un Estado, y, de conformidad con las debidas garantías procesales, se informó de ello a sus familiares en el país. Durante la instrucción del caso de Yang Jianli, las autoridades judiciales se cercioraron de que era posible que hubiera cometido otros delitos y su caso todavía se está investigando, de conformidad con la ley.

15. China es un Estado signatario o Parte en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, e indefectiblemente respeta las disposiciones universales sobre derechos humanos. Al mismo tiempo, China ha adoptado una extensa legislación doméstica para salvaguardar los derechos humanos. En virtud de la Constitución de China, los ciudadanos gozan de libertad de expresión, prensa, reunión y asociación y de otras muchas libertades, y la Constitución estipula que no se puede detener a ningún ciudadano salvo con la autorización o por decisión de la Fiscalía, y que las autoridades de seguridad pública son las únicas que pueden proceder a la detención. En cuanto a la prevención de tortura, el Código Penal de China y el Código de Procedimiento Penal, así como la Ley de policía y otras leyes, contienen disposiciones estrictas al respecto. Yang Jianli fue detenido únicamente porque se sospechaba que había violado la legislación de China. En ese caso concreto, las autoridades de seguridad pública de China han actuado en estricta conformidad con las debidas garantías procesales, y se han protegido plenamente los legítimos derechos de la persona en cuestión. Las medidas adoptadas contra Yang Jianli no constituyen un caso de detención arbitraria.

16. En su respuesta a las observaciones del Gobierno, la fuente afirmó que el Gobierno no pudo refutar o negar la mayor parte de las denuncias relacionadas con la detención de Yang Jianli.

17. Habida cuenta de que el proceso penal contra Yang Jianli está en curso, el Grupo de Trabajo señala que su tarea no consiste en evaluar los hechos y las pruebas de un caso particular, ya que eso equivaldría a sustituir a los tribunales nacionales, lo que no corresponde al ámbito del mandato del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo debe evaluar si se han respetado las normas internacionales en el proceso penal en el curso del cual se ha privado y se sigue privando a Yang Jianli de libertad.

18. A ese respecto, el Grupo de Trabajo consideró que el Gobierno no impugnó ni refutó la denuncia de que las autoridades sólo reconocieron extraoficialmente la detención de Yang Jianli aproximadamente dos meses después de que se produjera ésta, cuando informaron por teléfono al hermano de Yang Jianli de que éste había sido detenido el 2 de junio de 2002, si bien en realidad fue detenido en el aeropuerto el 26 de abril y ha permanecido encarcelado desde entonces. El Gobierno no cuestionó el argumento de la fuente de que el silencio de las autoridades era contrario al artículo 64 de la Ley de procedimiento penal de la República Popular de China, que estipula que en las 24 horas que siguen a la detención de una persona, la autoridad que lleva a cabo la detención debe comunicar a la familia el motivo de la detención y el lugar del arresto, excepto en aquellos casos en los que dicha notificación pudiera obstaculizar la etapa de instrucción del caso. El Gobierno no invocó esas circunstancias. Tampoco se cuestionó que el hecho de que las autoridades no hubiesen entregado una copia del auto formal de prisión a la

familia de Yang Jianli les había impedido facilitarle asistencia letrada. Además, el Gobierno tampoco negó que, no obstante las disposiciones del artículo 69 de la Ley de procedimiento penal, que permiten detener a una persona durante 37 días sin ninguna orden judicial en determinadas circunstancias de emergencia, Yang Jianli permaneció detenido después de que hubiera expirado el plazo de 37 días.

19. En consecuencia, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que mantener detenido a Yang Jianli durante más de dos meses sin ninguna orden judicial de detención y sin permitir que su familia contrate a un abogado para defenderle constituye una violación de las normas básicas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial.

20. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La inobservancia de las normas internacionales relativas al derecho de Yang Jianli a un juicio imparcial es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario. Por consiguiente, su arresto y detención son arbitrarios porque son contrarios a lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

21. Después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Yang Jianli de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la vez que lo insta a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 7 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 3/2003 (EGIPTO)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de febrero de 2003.*

*Relativa a:* Mu'awwadh Mohammad Youssef Gawda.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya facilitado la información relativa a la comunicación de la fuente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. A la luz de las acusaciones formuladas, el Grupo de Trabajo lamenta la falta de cooperación del Gobierno, a pesar de los reiterados llamamientos del Grupo de Trabajo para que presentara sus comentarios sobre las denuncias de la fuente. No obstante, el Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso.

5. Según la información presentada al Grupo, Mu'awwadh Mohammad Youssef Gawda (o Moawed Mohamed Yousif Goda), abogado, fue detenido el 18 de mayo de 1991 en su casa de El Cairo. Según se afirma, los funcionarios del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado le propinaron una paliza en su casa antes de trasladarlo a la sede del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado en la plaza Lazoghly (El Cairo), donde se dice que fue torturado durante el interrogatorio. Seguidamente fue trasladado a la prisión de Istiqbal Tora. Su esposa presentó una petición en su nombre al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que el 17 de junio de 1991 ordenó que le pusieran en libertad. El 29 de junio de 1991 el Ministerio del Interior se opuso a esa orden.

6. El 7 de julio de 1991 un segundo tribunal decidió que fuera puesto en libertad. Sin embargo, se afirma que funcionarios del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado lo trasladaron clandestinamente a la sede de dicho Servicio donde fue torturado de nuevo. El 13 de julio de 1991 se expidió una nueva orden de detención y lo volvieron a llevar a la prisión de Istiqbal Tora. Una vez más, su esposa impugnó la detención. El 28 de agosto de 1991 un tribunal ordenó que le pusieran en libertad pero el Ministerio del Interior puso objeciones el 9 de septiembre de 1991. Un segundo tribunal desestimó esas objeciones el 15 de septiembre de 1991 y ordenó una vez más que se pusiera en libertad al detenido, que permaneció en la sede del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado durante unos días y después volvió a la prisión al dictarse otro auto formal de prisión.

7. Al mes de marzo de 1996, se habían dictado más de 21 órdenes de puesta en libertad. Gawda permaneció en la prisión de Istiqbal Tora durante casi dos años, período durante el cual en numerosas ocasiones fue llevado a la plaza de Lazoghly, donde se afirma que fue torturado cada vez. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Al-Marg, y luego al centro penitenciario de Abu Za'bal, a la prisión industrial de Abu Za'bal, a la prisión de alta seguridad, a la prisión Al-Wadi Al-Gadid y, en verano de 1995, a la prisión de Istiqbal Tora, donde permaneció detenido sin cargos ni juicio.

8. Se afirma que en enero de 2001 ningún médico había visitado a Mu'awwadh Mohammad Youssef Gawda, que por entonces se encontraba en la prisión Al-Fayoum. Se dice que tenía problemas renales, hipertensión, presión sanguínea alta, perforación del tímpano del oído derecho y hemorroides.

9. Según la fuente, Gawda ha estado en detención administrativa, sin acusación ni juicio o condena, durante más de 11 años, a pesar de que tribunales competentes han dictado más de 21 autos de libertad. Se dice que su detención prolongada no sólo es contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a las normas internacionales, sino también a la legislación egipcia, que dispone que nadie puede permanecer en detención administrativa durante más de seis meses.

10. A falta de comentarios del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha de llegar a la conclusión de que el hecho de mantener a Mu'awwadh Mohammad Youssef Gawda detenido durante casi 12 años sin acusación ni juicio o condena, a pesar de que tribunales competentes han dictado más de 21 autos de libertad, representa una grave violación del derecho a la libertad de Mu'awwadh Mohammad Youssef Gawda por parte del Gobierno de Egipto.

11. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Mu'awwadh Mohammad Youssef Gawda es arbitraria porque es contraria a lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

12. Después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En opinión del Grupo de Trabajo, dadas las circunstancias, las medidas necesarias serían su puesta en libertad inmediata y una indemnización por la detención arbitraria.

Aprobada el 7 de mayo de 2003

#### **OPINIÓN N° 4/2003 (ARGELIA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 26 de septiembre de 2002.

*Relativa a:* Karim Abrica, Chabane Adryen, Kader Belaidi, Kamel Bendou, Khadir Benouareth, Karim Benseddouk, Azeddine Ikane, Hocine Kaci, Farès Ouedjdi, Hacène Saleh, Abderrahmane Si-Yahia, Kamel Soufi, Kamel Talbi, Chabane Tiza.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con agradecimiento de la información sobre esos casos que el Gobierno interesado le ha transmitido dentro del plazo de 90 días contados desde el envío de la carta del Grupo de Trabajo.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Gobierno le ha comunicado la puesta en libertad provisional de los interesados por orden del juez de instrucción el 5 de agosto de 2002.
5. Después de examinar toda la información que le ha sido presentada, y sin pronunciarse sobre si la detención fue o no arbitraria, el Grupo de Trabajo decide, a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, archivar el caso.

Aprobada el 7 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 5/2003 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 8 de enero de 2003.

*Relativa a:* Mourad Benchellali, Khaled Ben Mustafa, Nizar Sassi y Hamed Abderrahaman Ahmed.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya facilitado la información solicitada.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo deplora la falta de cooperación del Gobierno a pesar de las repetidas invitaciones del Grupo de Trabajo a que presente sus observaciones sobre las denuncias de la fuente. No obstante el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos.
5. La comunicación presentada por el Grupo de Trabajo se refiere a Mourad Benchellali, Khaled Ben Mustafa, Nizar Saddi y Hamed Abderrahaman Ahmed:
  - a) Mourad Benchellali, ciudadano francés nacido en 1981 y residente en Vénissieux (Francia), fue detenido según se informa en el otoño de 2001, durante la intervención dirigida por los Estados Unidos de América en el Afganistán contra el régimen talibán y la organización Al Qaeda. Al parecer fue detenido en el Pakistán por la policía o el ejército pakistaníes, entregado a las fuerzas armadas de los Estados Unidos y trasladado más tarde a la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo.
  - b) Khaled Ben Mustafa, ciudadano francés nacido en 1972 residente en Malakoff (Francia), fue al parecer capturado en el otoño de 2001, durante la intervención dirigida por los Estados Unidos en el Afganistán. Fue detenido según se informa por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la frontera entre el Afganistán y el Pakistán, y en enero de 2002, lo trasladaron a Guantánamo.
  - c) Nizar Sassi, ciudadano francés nacido en 1979 residente en Vénissieux (Francia), también fue capturado al parecer por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el Afganistán durante el otoño de 2001 y trasladado a Guantánamo.
  - d) Hamed Aderrahaman Ahmed, ciudadano español nacido en 1974 residente en Ceuta (España), también fue al parecer detenido durante la intervención dirigida por los Estados Unidos en el Afganistán. Fue detenido según se informa en el Pakistán, entregado a las fuerzas armadas de los Estados Unidos y trasladado más tarde a Guantánamo.

6. Según la información recibida, no se han formulado acusaciones contra estas cuatro personas. No han podido consultar a ningún abogado ni recibir asistencia letrada, ni han comparecido ante ningún juez en un tribunal competente. Además, no se les ha permitido ninguna comunicación, excepto las visitas de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y las cartas de sus familiares a través de este Comité.

7. La fuente de la comunicación cree que, habida cuenta de que el Gobierno ha negado la condición de prisioneros de guerra y la aplicación de las Convenciones de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, a las personas capturadas durante su intervención en el Afganistán y detenidas en Guantánamo, habría que aplicar la normativa internacional de derechos humanos.

8. De conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo revisados, el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo, en una carta de 8 de enero de 2003, señaló la comunicación a la atención del Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas en Ginebra. Invitó al Gobierno a facilitar toda información que considerase pertinente sobre los hechos mencionados por la fuente y la legislación aplicable a la detención y encarcelamiento de las personas antes mencionadas. De conformidad con los métodos de trabajo revisados, el plazo de respuesta era de 90 días desde el envío de la carta. Dado que no se facilitó ninguna respuesta ni se solicitó ninguna prórroga del plazo de 90 días, el 10 de abril de 2003 se envió una nota verbal a la Misión Permanente de los Estados Unidos en la que se le comunicaba que el Grupo de Trabajo examinaría la detención de las personas antes mencionadas en su 36º período de sesiones, que tendrá lugar en Ginebra del 5 al 9 de mayo de 2003. No se recibió ninguna respuesta a la nota verbal.

9. Desde su establecimiento en 1991, el Grupo de Trabajo se ha esforzado constantemente por resolver casos dentro de su mandato mediante el diálogo con los autores de las comunicaciones individuales y los gobiernos. Ese diálogo es especialmente importante para combatir el terrorismo internacional habida cuenta de la dificultad de lograr un equilibrio justo entre los intereses de la comunidad internacional y la limitación de los derechos y libertades individuales que, a veces inevitablemente, implica la lucha contra el terrorismo (véase, a este respecto, la opinión jurídica del Grupo de Trabajo sobre las medidas de privación de libertad de las personas detenidas en la bahía de Guantánamo en los párrafos 61 a 64 del documento E/CN.4/2003/8). Esta es la razón por la que el Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya formulado ningún tipo de observación acerca de la comunicación.

10. A pesar de la falta de información del Gobierno, el Grupo de Trabajo tiene el deber de emitir una opinión. Debe basarse en la disposición del párrafo 16 de sus métodos de trabajo revisados, que estipula que "aun cuando no se haya recibido una respuesta al expirar el plazo, el Grupo de Trabajo puede emitir una opinión sobre la base de todos los datos recopilados".

11. En base a la información facilitada por la fuente, que el Grupo de Trabajo considera exacta y coherente por lo que respecta a los hechos, el Grupo de Trabajo no puede sino llegar a la conclusión de que la privación de libertad de Mourad Benchellali, Khaled Ben Mustafa, Nizar Sassi y Hamed Abderrahaman Ahmed carece de todo fundamento jurídico.

12. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la opinión siguiente:

La privación de libertad de Mourad Benchellali, Khaled Ben Mustafa, Nizar Sassi y Hamed Abderrahaman Ahmed es arbitraria, infringe el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que los Estados Unidos de América son Parte, y corresponde a la categoría I de los principios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. Después de emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 8 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 6/2003 (TÚNEZ)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 12 de diciembre de 2002.

*Relativa a:* Abdallah Zouari.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente que facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, habida cuenta de las denuncias formuladas, de la respuesta dada por el Gobierno y de las observaciones de la fuente. El caso que se expone a continuación fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente forma.
5. Según la fuente, el Sr. Abdallah Zouari, nacido el 15 de junio de 1956, de nacionalidad tunecina, periodista, responsable del semanario prohibido *El Fajr*, órgano del movimiento islámico Ennahada, detenido en Túnez el 19 de agosto de 2002 por la policía del Servicio de la Seguridad del Estado y condenado a ocho meses de cárcel sin remisión de pena, se encuentra en la actualidad detenido en paradero desconocido.



6. El Sr. Zouari fue detenido por policías de paisano del Servicio de la Seguridad del Estado en Túnez, delante del bufete de su abogado, Samir Ben Amor, por infracción de una decisión de control administrativo adoptada en virtud de una sentencia dictada el 28 de agosto de 1992 por el tribunal militar de Túnez.

7. El Sr. Zouari acababa de ser puesto en libertad, el 6 de junio de 2002, después de haber cumplido una pena de 11 años de cárcel por "pertenencia a una organización ilegal" (había sido detenido el 12 de abril de 1991). El Sr. Zouari había sido condenado asimismo a cinco años de control administrativo una vez cumplida su condena y, el 15 de julio de 2002, le notificaron una orden de confinamiento en Zarzis (región de Hassi Jerbi, en el Sáhara) cuando su residencia y su familia están en Túnez.

8. El Sr. Zouari presentó un recurso de anulación ante el tribunal administrativo por abuso de autoridad contra la orden de confinamiento dictada por el Ministro del Interior. Fue detenido y condenado por el Tribunal Superior de Zarzis a ocho meses de cárcel sin remisión de pena por infracción de la orden de confinamiento, mientras que el Tribunal administrativo todavía no ha dictado su fallo.

9. El Sr. Zouari fue encarcelado en la prisión de Harboub (Gobernación de Médenine), y luego en la prisión de Houareb (Gobernación de Kairouan). El 29 de octubre de 2002, el comité de apoyo al Sr. Zouari visitó la prisión de Houareb con un miembro de su familia, pero la administración penitenciaria les comunicó que el Sr. Zouari había sido trasladado a otra prisión, sin precisar el lugar.

10. La fuente considera que la detención y el encarcelamiento del Sr. Zouari son arbitrarios, puesto que son consecuencia de las opiniones políticas que expresa como periodista de un semanario prohibido y de su pertenencia a un movimiento de oposición política ilegal, cuando ya había cumplido 11 años de cárcel por los mismos motivos.

11. La fuente indica asimismo que el control administrativo que permite al Ministro del Interior alejar de su ciudad de residencia a un condenado que ya ha cumplido su condena es una medida arbitraria encaminada a prolongar la detención ilegalmente, y que la detención y el encarcelamiento actual del Sr. Zouari son la consecuencia de esta medida de control administrativo.

12. Además, la fuente afirma que el traslado de prisión sin precisar el lugar es una infracción de la reglamentación, que establece que la familia del detenido debe ser informada de todo cambio de lugar de detención.

13. En su respuesta, el Gobierno afirma que la persona mencionada estaba implicada en una causa penal por pertenencia a una organización integrista y terrorista, Ennahada, un movimiento ilegal que, según el Gobierno, alienta al fanatismo, el odio religioso y racial y la práctica de la violencia y el terrorismo. Habiendo planeado un levantamiento destinado a cambiar la forma de gobierno mediante la violencia, esta organización movilizó a sus miembros, incluido el Sr. Zouari, que es uno de los principales instigadores. En base a la confesión del interesado y los resultados de las investigaciones realizadas, que demostraban su complicidad en la preparación y ejecución de un plan terrorista, el tribunal lo condenó, el 27 de agosto de 1992, a 11 años de prisión y a 5 años de control administrativo por los cargos formulados contra él.

14. El Gobierno añade que el interesado fue puesto en libertad el 6 de junio de 2002 después de haber cumplido su condena en la cárcel. El 15 de julio de 2002, y de conformidad con la sentencia del 27 de agosto de 1992, la autoridad competente dictó una orden que fijaba el lugar de residencia del interesado en la región de "Kasusiba Hassi Jebri" en "Zarzis" durante el período de control administrativo. La orden se dictó con arreglo al artículo 23 del Código Penal, como una pena complementaria de vigilancia administrativa, cuya ejecución tiene lugar después de que el condenado haya purgado su pena de cárcel y que confiere a las autoridades administrativas competentes el derecho de fijar el lugar de residencia del condenado. Ante el incumplimiento de la orden en cuestión por el interesado, el tribunal cantonal de Zarzis lo condenó a ocho meses de prisión. El Gobierno llega a la conclusión de que de la detención del Sr. Zouari no reviste ningún carácter arbitrario, ya que su condena es el resultado de una decisión judicial adoptada por un tribunal competente tras un proceso imparcial en el que se han respetado todas las garantías previstas por la ley.

15. La fuente reitera las acusaciones contenidas en su comunicación y precisa que no se refiere a la primera condena, aunque la detención de la primera condena es tan arbitraria como la de la segunda. Añade que la puesta en libertad del Sr. Zouari por "razones humanitarias" no debe hacer olvidar el carácter arbitrario de su detención.

16. De lo que antecede, se deduce que el Sr. Zouari fue detenido una primera vez el 12 de abril de 1991, y condenado por el Tribunal Militar de Túnez a 11 años de prisión sin remisión de pena y 5 años de control administrativo. Cumplió la totalidad de la pena de prisión y fue puesto en libertad el 6 de junio de 2002. El 15 de julio de 2002, el Ministro del Interior le comunicó una orden de confinamiento dictada en virtud de la decisión de control administrativo. El 19 de agosto de 2002, fue detenido de nuevo por infracción de la orden de confinamiento y el 22 de agosto de 2002 fue condenado a ocho meses de prisión sin remisión de pena. La fuente se refiere a esta última detención y su encarcelamiento actual, que somete a la consideración del Grupo de Trabajo.

17. Teniendo en cuenta la fecha de la detención y la de la condena, el interesado habría cumplido la totalidad de la pena de ocho meses de prisión a más tardar el 22 de abril de 2003 y en principio se encuentra únicamente bajo la orden de alejamiento de su ciudad de residencia. La fuente reconoce que el Sr. Zouari ha sido puesto en libertad, pero precisa que esta medida se adoptó por razones humanitarias. La fuente no precisa si se trata de una puesta en libertad anticipada.

18. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la opinión siguiente:

Después de examinar toda la información de que dispone, y sin prejuzgar el carácter arbitrario de la detención, el Grupo de Trabajo, de conformidad con el apartado d) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, decide archivar el caso del Sr. Zouari.

Aprobada el 9 de mayo de 2003

## OPINIÓN N° 7/2003 (CHINA)

*Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de agosto de 2002.*

*Relativa a:* Chen Gang, Zhang Wenfu, Zhong Bo, Liu Li, Wu Xiaohua, Gai Suzhi, Liu Junhua, Zhang Jiuhai, Zhu Xiaofei.

### **El Estado ha firmado, pero no ha ratificado todavía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por haberle transmitido oportunamente la información necesaria.
3. (Texto idéntico al párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente que facilitó al Grupo sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a las mismas.
5. Según la información transmitida por la fuente, Chen Gang, varón de 28 años residente en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, fue detenido en abril de 2002 por miembros de la policía de la ciudad de Lanzhou, que lo golpearon y maltrataron. Permanece detenido en el Centro de detención de Luergou en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, y al parecer se encuentra en estado crítico. Asimismo, la fuente informa de que Chen Gang estuvo detenido durante 15 días en noviembre de 1999, cuando fue a Beijing a pedir al Gobierno que dejase de perseguir al Falun Gong. En enero de 2000, el jefe del Comité de Política y Derecho de la ciudad de Tianshui lo mantuvo detenido durante un mes. Más tarde fue enviado al campo de trabajo de Ping'antai, en la ciudad de Lanzhou, para realizar trabajos forzados durante un año. Durante su detención en este campo fue sometido a graves torturas. Según las informaciones recibidas, los guardias le ataron los brazos y las piernas, le taparon la boca y la nariz y lo colocaron bajo una plancha sobre la que saltaron después. En marzo de 2001 fue puesto en libertad, pero la policía no le permitió volver al trabajo y dejó de percibir su sueldo. Asimismo, se afirma que la policía fue a menudo a su residencia para hostigarlo, lo que le indujo a abandonar su hogar para vivir en las calles.
6. Zhang Wenfu, varón residente en la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning, fue detenido al parecer el 19 de enero de 2002 y recluido en el Centro de detención de Pulandian durante 50 días. Al parecer, el 8 de marzo de 2002, fue trasladado sin mediar procedimiento legal alguno a la División N° 5 del campo de trabajo de Dalian, donde permaneció bajo una estrecha vigilancia durante más de 40 días. No le permitían lavarse la cara ni los dientes, y fue obligado a realizar duras tareas durante muchas horas al día. El 18 de abril de 2002, fue trasladado a la División N° 8 del campo de trabajo de Dalian. El 28 de abril de 2002 inició una huelga de hambre para protestar por las condiciones de su detención. Como respuesta, fue torturado al parecer por tres jefes de equipo, Li Xuezhong, Li Shaofu y Peng Dahua, y un

recluso, Chi Diandong. Le taparon la boca y los ojos con cinta adhesiva, lo esposaron y le golpearon la cabeza con una porra de goma. También lo golpearon con una tabla. Los torturadores le clavaron palillos dentro de su boca, lo que le hizo sangrar profusamente. Más tarde, lo encerraron esposado en una celda y fue obligado a permanecer tumbado sobre una tabla de madera durante un día.

7. Zhong Bo, mujer de 42 años empleada en la fábrica de productos químicos Anda y residente en la ciudad de Anda, provincia de Heilongjiang, fue detenida al parecer en su casa el 31 de mayo de 2002 a las 9.00 de la mañana por seis policías dirigidos por Liu Yingshan, un agente de la Oficina 610, organismo que al parecer había sido específicamente creado para perseguir al Falun Gong. En los locales del Departamento de Política y Administración de la ciudad de Anda fue golpeada con un palo de madera por seis policías dirigidos por Wang Jun, subdirector de la comisaría de policía de la ciudad de Anda. En la Oficina 610 le aplicaron descargas eléctricas en la espalda. Sus ojos sangraron y su cara se puso negra e hinchada. Esa noche saltó a través de la ventana de un segundo piso. El examen realizado en el hospital de la ciudad de Daqing, en la provincia de Heilongjiang, determinó que se había roto dos costillas derechas y los dientes. Ha olvidado completamente lo que ocurrió y no puede valerse por sí misma.

8. Liu Li, mujer residente en la ciudad de Taonan, provincia de Jilin, tuerta, fue al parecer detenida en su casa el 28 de julio de 2002 junto a otros practicantes del Falun Gong y conducida a la comisaría de policía de la ciudad de Taonan. El jefe del Departamento de Política y Seguridad, Liu Jinwei, le dijo que la iban a enviar al campo de trabajo de Heizuizi en la ciudad de Changchun, o si no, a clases de reeducación en la ciudad de Daan. Le dijo que no sería puesta en libertad hasta que no renunciase al Falun Gong.

9. Wu Xiaohua, mujer de 47 años, profesora asociada del Departamento de Arte Ambiental en la Escuela de Ingeniería Civil de Anhui en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, fue al parecer sometida a arresto domiciliario en octubre de 2001 durante la Cumbre de Cooperación en Asia y el Pacífico celebrada en Shanghai. Más tarde la enviaron a un campo de trabajo para mujeres. Al parecer, allí la sometieron a diversas formas de tortura, como llenarle la boca de trapos y telas empapadas en orina y sangre menstrual. A mediados de octubre de 2001, el décimo día de la huelga de hambre que inició para protestar contra su detención la trasladaron al Hospital popular N° 4 de la ciudad de Hefei, provincia de Anhui. En el hospital le quitaron la ropa y le aplicaron descargas con agujas y unas porras eléctricas por todo el cuerpo. Un médico, el Dr. Li, la amenazó con aplicarle descargas eléctricas hasta que quedase inconsciente. También le pusieron inyecciones por la fuerza y la obligaron a ingerir drogas. Se informa asimismo de que la profesora Wu fue detenida por primera vez en diciembre de 1999 por pedir en Beijing al Gobierno que pusiera fin a la persecución contra el Falun Gong. Al parecer fue torturada en el Centro de detención de mujeres de Anhui, en la provincia de Anhui. Más tarde la trasladaron al Hospital popular N° 4 de la ciudad de Hefei, donde también fue torturada, al encerrarla en una casa de baños llena de mosquitos durante una noche y obligarla a utilizar como aseo una pocilga llena de telas de araña. A finales de abril de 2001 fue detenida de nuevo.

10. Gai Suzhi, mujer de 63 años, empleada jubilada de la fábrica petroquímica N° 2 de la ciudad de Fushun, provincia de Liaoning, fue detenida al parecer en agosto de 2001 y enviada al campo de trabajo de Wujiabao en la ciudad de Fushun a pesar de que, la ley no permite que haya ningún detenido mayor de 60 años en el campo de trabajo. Ha iniciado varias huelgas de hambre

en el campo para protestar por su detención ilegal. En la actualidad sólo pesa unos 35 kg y está gravemente enferma. Al parecer fue insultada, golpeada y torturada con frecuencia en el campo. Asimismo se informó de que la Sra. Gai había sido detenida por primera vez en diciembre de 2000 cuando fue a Beijing para protestar contra la persecución contra el Falun Gong. Estuvo detenida durante más de dos meses. Posteriormente fue detenida otras dos veces.

11. Liu Junhua, varón de 36 años empleado en la empresa de alimentación Sanjiang en la ciudad de Jiamusi, provincia de Heilongjiang, fue detenido al parecer el 9 de abril de 2002 en su casa de la ciudad de Jiamusi por miembros de la comisaría de policía de Nanwei por su creencia en el Falun Gong. Está encarcelado en el campo de trabajos forzados de Xigemu, provincia de Heilongjiang. Su mujer tuvo que abandonar el hogar para evitar más hostigamientos y persecuciones por parte de la policía local. Había sido detenido con anterioridad y condenado a dos años de reeducación mediante trabajos forzados. A finales de octubre de 2001 lo volvieron a detener en la ciudad de Mishan y fue puesto en libertad tras permanecer en huelga de hambre durante 44 días.

12. Zhang Jiuhai, varón de 35 años del término municipal de Liudian, distrito de Pinggu, condado de Pinggu de la ciudad de Beijing, fue al parecer detenido en su casa el 6 de agosto de 2002 y enviado a clases de reeducación en el condado de Pinggu. Se informó más tarde de que había estado detenido anteriormente, entre agosto de 2000 y febrero de 2002, en el campo de trabajo de Tuanhe, en Beijing, donde había sido sometido a graves torturas, al parecer por no querer renunciar al Falun Gong. En abril de 2002 fue detenido otra vez y le administraron descargas con porras eléctricas en la comisaría de policía del distrito de Haidian, en Beijing. La policía local saqueó su casa en seis ocasiones y detuvo a su padre dos veces.

13. Zu Xiaofei, varón, antiguo empleado de la Fábrica 4810 de Lushun, residente en el distrito de Lushunkou de la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning, fue al parecer detenido por la policía el 26 de noviembre de 2001 en su lugar de trabajo. Lo enviaron directamente al campo de trabajos forzados de Dalian, en la provincia de Liaoning, donde al parecer los guardias ordenaron a otros reclusos que lo vigilaran y torturasen mediante descargas con porras eléctricas. Más tarde lo trasladaron al campo de trabajos forzados de Guanshan en la ciudad de Changtu, provincia de Lianoning, donde lo obligan a realizar duras tareas. Se informó además de que el Sr. Zhu ya había estado detenido dos veces en la comisaría de policía del distrito de Lushunkou, donde el agente de policía Ye Qiang lo torturó asfixiándolo con una cuerda y aplicándole descargas con porras eléctricas.

14. Según la fuente, las nueve personas citadas anteriormente permanecen detenidas de forma ilegal por el único hecho de creer en el Falun Gong. Muchos han sido enviados a campos de reeducación mediante trabajos forzados sin juicio por no querer renunciar a su fe. La fuente añade que sus actividades siempre fueron pacíficas.

15. El Gobierno facilitó al Grupo de Trabajo la siguiente información.

16. En febrero de 2000, Chen Gang, varón de 25 años residente en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu, recibió la orden del Comité de Rehabilitación por el Trabajo de la ciudad de Tianshui de someterse a un año de reeducación mediante el trabajo por alterar repetidamente el orden público. En septiembre de 2002, el Comité ordenó al Sr. Chen cumplir tres años de reeducación por el trabajo por haber alterado otra vez el orden público. Mientras cumplía su condena, el Sr. Chen no sufrió ningún hostigamiento o maltrato.

17. El Comité de Rehabilitación por el Trabajo de la ciudad de Dalian ordenó que Zhang Wenfu, varón de 40 años residente en la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning, cumpliera dos años y seis meses de reeducación por el trabajo, del 20 de enero de 2002 al 19 de julio de 2004, por alteración del orden público. Zhang no empezó ninguna huelga de hambre mientras cumplía su condena.

18. El 21 de octubre de 2002, Zhong Bo, mujer de 42 años residente en la ciudad de Anda, provincia de Heilongjiang, fue detenida por alteración repetida del orden público. El 11 de noviembre fue puesta en libertad condicional por motivos de salud. Nunca le propinaron, como se ha dicho, golpes violentos, ni saltó desde la ventana de un segundo piso, ni se rompió dos costillas.

19. El 3 de febrero de 2001, el Comité Local de Rehabilitación por el Trabajo ordenó que Liu Li, mujer de 46 años residente en la ciudad de Taonan, provincia de Jilin, cumpliera un año de reeducación por el trabajo por alteración del orden público pero, por ser tuerta, se modificó la orden para permitirle someterse a la reeducación por el trabajo fuera del centro de detención. En abril de 2002, mientras cumplía su condena, la Sra. Liu fue condenada otra vez a un año de reeducación por el trabajo por alteración del orden público, que también podía cumplir fuera del centro de detención. En la actualidad la Sra. Liu lleva una vida normal en su casa.

20. El 28 de enero de 2000, las autoridades de rehabilitación por el trabajo ordenaron a Wu Xiaohua, mujer de 48 años, antigua profesora asociada de la Escuela de Ingeniería Civil de Anhui, que cumpliera un año de reeducación por el trabajo por alteración grave del orden público. Mientras cumplía su condena, los empleados del centro observaron que su estado mental era muy distraído y que presentaba otros síntomas anormales, como una tendencia a autolesionarse sin motivo o razón, rechazar la comida y otras aberraciones. El 17 de julio de 2000, el Comité de Evaluación Psiquiátrica de Anhui le diagnosticó esquizofrenia paranoide, y determinó que era incapaz de responder a la reeducación por el trabajo. El Centro de Reeducación por el Trabajo tomó rápidamente medidas para que recibiese atención médica fuera del centro y quedó exonerada de la reeducación por el trabajo. Tras ser sometida a un tratamiento, el estado de salud de la Sra. Wu mejoró, pero volvió a realizar actividades que alteraron gravemente el orden público. El 2 de junio de 2001, el Comité Municipal de Rehabilitación por el Trabajo de Hebei ordenó que fuera examinada por el Comité de expertos de evaluación del hospital psiquiátrico provincial, a fin de determinar su trastorno psiquiátrico. Se diagnosticó que, durante el período de remisión de la esquizofrenia, era capaz de responder a la reeducación, por lo que se ordenó que cumpliera dos años de reeducación por el trabajo. Mientras la Sra. Wu cumplía su condena, las autoridades responsables dispusieron a menudo, por razones humanitarias, que recibiese una rápida atención médica y no sufrió, como se afirma, ningún trato o insulto cruel, ni descargas eléctricas o golpes.

21. En octubre de 2000, el Comité de Rehabilitación por el Trabajo de la ciudad de Fushun condenó a Gai Suzhi, mujer de 62 años residente de la ciudad de Fushun, provincia de Liaoning, a dos años de reeducación por el trabajo, del 19 de octubre de 2000 al 18 de octubre de 2002, por alteración del orden público. Habida cuenta de su edad, su deficiente condición física y sus muchas dolencias, el Centro de reeducación por el trabajo, de conformidad con los reglamentos pertinentes, decidió permitir que se sometiese a la reeducación por el trabajo fuera del centro de

detención. Mientras cumplía su condena, la señora Gai volvió a alterar el orden público y fue condenada a otros tres meses de reeducación por el trabajo. La señora Gai completó su condena el 8 de enero de 2003.

22. El Comité de Rehabilitación por el Trabajo de la ciudad de Jiamusi condenó a Liu Junhua, varón de 36 años residente en la ciudad de Jiamusi, provincia de Heilongjiang, a dos años de reeducación por el trabajo, del 23 de octubre de 1999 al 22 de octubre de 2001, por alteración del orden público. Mientras cumplía su condena, el señor Liu infringió las normas y reglamentos del centro y, el 3 de noviembre de 2000, conspiró con otros reclusos para escapar. El 28 de septiembre de 2001 fue detenido de nuevo por las autoridades de seguridad pública y devuelto al centro para continuar cumpliendo su condena. El 9 de junio de 2002, el Tribunal Popular de la ciudad de Jiamusi, actuando con arreglo a la legislación, lo condenó a 10 años de cárcel sin remisión por el delito de sabotear la aplicación de la legislación estatal.

23. En julio de 2000, Shang Jiuhai, varón de 35 años residente en Beijing, fue condenado a un año de reeducación por el trabajo por alteración del orden público. El 1º de abril de 2002, las autoridades de rehabilitación por el trabajo de la ciudad de Beijing lo condenaron a dos años de reeducación por el trabajo, por haber alterado de nuevo el orden público. En la actualidad está cumpliendo su condena.

24. El 1º de octubre de 2001, el Comité de Rehabilitación por el Trabajo de la ciudad de Dalian condenó a Zhu Xiaofei, varón de 26 años residente en la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning, a dos años y seis meses de reeducación por el trabajo, del 26 de noviembre de 2001 al 25 de mayo de 2004, por alteración del orden público. En la actualidad está cumpliendo su condena en el Centro de reeducación por el trabajo de Guanshan, en la provincia de Liaoning.

25. En sus observaciones, el Gobierno afirma que China es un Estado de derecho. La legislación china salvaguarda plenamente los derechos e intereses legítimos de las personas sometidas a reeducación por el trabajo. En lo que respecta a estas personas, la política básica del Centro de reeducación por el trabajo consiste en reeducarlas, persuadirlas y de esta forma reformarlas; preocuparse por ellas como los padres lo hacen por sus hijos, los maestros por sus estudiantes y los médicos por sus pacientes; considerarlas, ayudarlas y educarlas; y proteger sus derechos e intereses legítimos de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, en la práctica actual de la reeducación por el trabajo se utilizan plenamente procedimientos como la remisión de las penas, la libertad condicional para las condenas que se cumplen fuera del centro y la puesta en libertad anticipada de los detenidos en el centro, a fin de poder reformar lo mejor posible a las personas sometidas a reeducación por el trabajo. Una vez puestos en libertad, los estudiantes pueden volver a sus estudios, los empleados y trabajadores pueden reanudar su trabajo y se respeta plenamente su derecho a una vida y un trabajo normales.

26. En su réplica a la respuesta del Gobierno, la fuente afirma que el Gobierno de China utilizó la "alteración del orden público" como pretexto para detener a Zhong Bo, Liu Li, Wu Xiaohua, Gai Suzhi, Chen Gang, Zhang Wenfu, Liu Junhua, Zhang Jiuhai y Zhu Xiaofei. Según la fuente, el Gobierno no mencionó los delitos concretos de los que se les había acusado. La fuente considera extraño que personas de distintas edades (entre 25 y 62 años), distintas profesiones (trabajadores, profesores, jubilados) y diferentes localidades desarrollen de repente la misma tendencia a "alterar el orden público", muchos de ellos incluso repetidas veces. Según la fuente, Zhong Bo, Liu Li, Wu Xiaohua, Gai Suzhi, Chen Gang, Zhang Wenfu, Liu Junhua, Zhang Jiuhai

y Zhu Xiaofe son todos practicantes del Falun Gong y fueron perseguidos por ejercer la libertad de creencias garantizada por la Constitución china. Fueron detenidos y torturados repetidas veces por negarse a renunciar al Falun Gong.

27. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Gobierno de China ha informado al Grupo que Zhong Bo, Liu Li y Gai Suzhi ya no se hallan detenidas. Transmitida su información a la fuente, el hecho no fue negado.

28. El Grupo de Trabajo observa, por otra parte, que el Gobierno no ha objetado el hecho de que Chen Gang, Zhang Wenfu, Wu Xiaohua, Liu Junhua, Zhang Jiuhai y Zhu Ziaofei son practicantes del Falun Gong y que su detención estaba relacionada con la práctica de esta creencia.

29. A falta de pruebas de que el Falun Gong sea una creencia que se manifiesta de manera violenta, por lo que respecta a los casos que se examinan aquí, su libre ejercicio debe estar protegido por el artículo 18 sobre libertad de creencias y el artículo 19 sobre libertad de opinión y expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

30. Aun cuando la pena de reeducación por el trabajo represente, como afirma el Gobierno, una medida más favorable y que brinda mejores opciones a las personas que la pena de prisión impuesta como resultado de un juicio, ésta sigue siendo, a opinión del Grupo de Trabajo, una privación de libertad de carácter administrativo que puede tener un carácter arbitrario, como lo ha considerado el Grupo en su Deliberación N° 4 de 1993 (véase el capítulo II del documento E/CN.4/1993/24).

31. En su informe sobre su visita a China (párrafo 95 del documento E/CN.4/1998/44/Add.2), el Grupo de Trabajo declaró que la medida de reeducación por el trabajo no debería aplicarse a ninguna persona en razón del ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los casos que se examinan, la detención constituye una medida de coacción destinada a coartar la libertad de las personas para elegir su propia creencia.

32. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que estas personas fueron procesadas y condenadas a la medida administrativa de reeducación por el trabajo y, por lo tanto, privadas de su libertad, sobre todo por ejercer los derechos fundamentales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: el derecho a la libertad de conciencia y de religión (art. 18) y el derecho a la libertad de opinión y de expresión (art. 19).

33. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la opinión siguiente:

Dado que Zhong Bo, Liu Li y Gai Suzhi han sido puestas en libertad desde entonces, el Grupo de Trabajo decide, a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, archivar su caso sin pronunciarse sobre si le detención fue arbitraria.

La detención de Chen Gang, Zhang Wenfu, Wu Xiaohua, Liu Junhua, Zhang Jiuhai y Zhu Xiaofei es arbitraria, ya que es contraria a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría II de los principios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.



34. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de estas personas de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo insta a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 9 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 8/2003 (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 14 de febrero de 2002.

*Relativa a:* Syamak Pourzand.

#### **El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información solicitada.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta facilitada por el Gobierno a la fuente, que formuló sus observaciones al respecto. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.
5. Según la información facilitada por la fuente, Syamak Pourzand, de 72 años de edad, es periodista y director del Centro Cultural de Teherán (Majmue-ye Farhangi-ye Honari-ye Tehran) y está casado con Mehranguiz Kar, abogada. El Sr. Pourzand fue detenido el 24 de noviembre de 2001 en la residencia de Mahin Pourzand (su hermana), en Teherán, por cuatro milicianos que no presentaron ninguna orden ni explicación. El 7 de diciembre de 2001, se pidió al parecer a la Sra. Pourzand que le llevara una muda de ropa. En el momento en que se presentó la comunicación el Sr. Pourzand estaba recluido por orden del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán y actualmente sigue recluido.
6. El día 12 ó 13 de enero de 2002 se permitió a la Sra. Pourzand reunirse con su hermano en el Edare-ye Amaken, o Departamento de Oficinas, también conocido como Comité para la Propagación de la Virtud y la Prohibición del Vicio, en una entrevista que duró 10 minutos. La esposa del Sr. Pourzand, que está siguiendo un tratamiento médico en los Estados Unidos, y su hermana, que vive en Teherán, han presentado al parecer denuncias a la policía y a las autoridades judiciales y han escrito a la Presidencia de la República sin obtener resultados.
7. El Gobierno ha facilitado al Grupo de Trabajo la siguiente información. El Sr. Pourzand fue detenido a raíz de una denuncia presentada por la Sra. Venus Farimer, que declaró haber sido víctima de malos tratos y acoso sexual por parte de él, y se le acusó de varios delitos: faltas contra la moralidad y malos tratos de acuerdo con los artículos 637 y 639 del Código Penal;

propaganda contra la República Islámica del Irán (art. 500); espionaje contra el Estado (arts. 501 y 505); y atentado contra la seguridad del Estado (art. 512). El 22 de noviembre de 2001 el Tribunal General de Teherán ordenó su detención. El 24 de noviembre de 2001, compareció ante los tribunales. En esa misma fecha, el tribunal ordenó una investigación preliminar y devolvió el expediente a la policía. Más tarde, el tribunal ordenó la puesta en libertad bajo fianza del acusado. Al no poder pagar su fianza, se mantuvo en prisión preventiva al Sr. Pourzand que fue recluido en una cárcel dependiente de la Dirección de Prisiones. El 27 de mayo de 2002, el Sr. Pourzand fue trasladado a la prisión de Evin, en Teherán. Una vez finalizadas las investigaciones comenzó el juicio del Sr. Pourzand y se celebraron varias audiencias con asistencia del acusado y de su abogado defensor. El tribunal concluyó que las acusaciones eran ciertas y el 13 de abril de 2002 emitió el veredicto N° 10, por el que declaraba al Sr. Pourzand culpable de los delitos mencionados y le condenaba a 11 años de prisión (la condena debía tener en cuenta el tiempo que ya había pasado en la cárcel), al pago de una multa de 1 millón de rials y 80 azotes. El Sr. Pourzand apeló, pero el 21 de mayo de 2002 el Tribunal de Apelación de Teherán confirmó el fallo.

8. El Grupo de Trabajo lamenta el hecho de que el Gobierno no le haya facilitado el texto de la legislación penal aplicable en las causas contra el Sr. Pourzand, a pesar de que el Presidente-Relator así lo solicitó en su carta de 14 de febrero de 2002. Tampoco se ha facilitado el fallo de 13 de abril de 2002 del Tribunal General de Teherán por el que se condenaba a Syamak Pourzand. El Grupo de Trabajo señala que el texto de las disposiciones de la legislación penal, que no se ha facilitado, y al que el Gobierno sólo se ha referido en términos muy generales, fue la base de la condena del Sr. Pourzand. La referencia a la "propaganda contra la República Islámica del Irán" suscita graves dudas sobre la verdadera naturaleza y motivación de los cargos que se le imputan. Debe tenerse en cuenta que, según la información de que dispone el Grupo de Trabajo, el Sr. Pourzand, periodista y director del Centro Cultural de Teherán, tiene una reputación de ser crítico con el Gobierno.

9. Por tanto, a falta de argumentos presentados por el Gobierno, que demuestren lo contrario, el Grupo de Trabajo no puede menos que concluir que el Sr. Pourzand fue juzgado, declarado culpable y condenado a una pena de prisión en razón de sus convicciones y por haber manifestado sus opiniones.

10. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La detención de Syamak Pourzand es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

11. Después de emitir esa opinión, El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Islámica del Irán que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Syamak Pourzand de conformidad con las disposiciones y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Islámica del Irán es Parte.

Aprobada el 9 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 9/2003 (CUBA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 8 de abril de 2003.

*Relativa a:* Nelson Aguiar Ramírez y otras 78 personas.

#### **El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su apreciación al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha formulado sus comentarios y observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias de los casos considerados, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas.
5. La comunicación, cuyo resumen fue enviado al Gobierno, se refiere a los casos de:
  - a) Nelson Aguiar Ramírez, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, Ciudad de La Habana, detenido a las 6 de la mañana del jueves 20 de marzo de 2003.
  - b) Osvaldo Alfonso, presidente de la organización denominada Partido Liberal Democrático, miembro del comité de relatoría de Todos Unidos, y del comité ciudadano del Proyecto Varela, detenido el martes 18 de marzo de 2003. El 7 de abril de 2003, se le habría condenado a 18 años de prisión.
  - c) Pedro Pablo Álvarez Ramos, Secretario General del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC). Su casa habría sido allanada y objeto de una requisa. Se le habrían incautado libros de la Biblioteca Sindical Emilio Máspero. Se le habrían formulado cargos por los artículos 9.1, 6.1 y 6.3 de la Ley N° 88 sobre Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba.
  - d) Pedro Argüelles Morán, director de la agencia de prensa Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes en Ciego de Ávila.
  - e) Víctor Rolando Arroyo, periodista de la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes (UPECI) y activista del Foro por la Reforma en Pinar del Río. Miembro del comité de relatoría de Todos Unidos.
  - f) Mijail Bárzaga Lugo, miembro de la organización denominada Movimiento 30 de Noviembre, detenido el jueves 20 de marzo.

- g) Alfredo Domínguez Batista, miembro del Comité Ciudadano del Proyecto Varela en Puerto Padre.
- h) Margarito Broche, miembro de la Asociación Paz, Democracia y Libertad, de Caibarién, Villa Clara, detenido el martes 18 de marzo.
- i) Marcelo Cano Rodríguez, activista de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, de Ciudad de La Habana. El 7 de abril de 2003, se le habría condenado a 18 años de prisión.
- j) Carmelo Díaz Fernández, miembro de CUTC.
- k) Eduardo Díaz Fleites, opositor de Pinar del Río, detenido el martes 18 de marzo.
- l) Antonio Díaz Sánchez, miembro del ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, Ciudad de La Habana.
- m) Alfredo Domínguez Batista, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Las Tunas, detenido el miércoles 19 de marzo.
- n) Mario Enríquez Mayo, periodista de Camagüey, de la agencia de prensa independiente Félix Varela, detenido el miércoles 19 de marzo.
- o) Oscar Espinosa Chepe, periodista independiente de Ciudad de La Habana, detenido el miércoles 19 de marzo. Le habrían formulado cargos en virtud de los artículos 7 y 11 de la Ley N° 88. El 7 de abril de 2003 habría sido sentenciado a 20 años de prisión.
- p) Alfredo Felipe Fuentes, miembro del Comité Ciudadano del Proyecto Varela en Artemisa.
- q) Efrén Fernández Fernández, miembro del ejecutivo nacional del Movimiento Cristiano Liberación, detenido el martes 18 de marzo.
- r) Adolfo Fernández Saíenz, periodista independiente y miembro de la organización denominada Partido Solidaridad Democrática.
- s) José Daniel Ferrer Castillo, miembro del ejecutivo nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Santiago de Cuba, detenido el miércoles 19 de marzo. Se le habría formulado cargos por los artículos 4.1 y 6.1 de la Ley N° 88.
- t) Luis Enrique Ferrer García, coordinador del Proyecto Varela en Las Tunas, detenido el miércoles 19 de marzo.
- u) Orlando Fundora Alvarez, miembro de la Asociación Pedro Luis Boitel, Ciudad de La Habana, detenido el martes 18 de marzo.

- v) José Ramón Gabriel Castillo, miembro del Instituto Independiente Cultura y Democracia y periodista independiente en Holguín, detenido el miércoles 19 de marzo.
- w) Próspero Gaínza Agüero, miembro del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica, Holguín, detenido el miércoles 19 de marzo.
- x) Miguel Galván Gutiérrez, periodista de la agencia de prensa independiente Havana Press en Güines, provincia de La Habana.
- y) Julio César Gálvez, periodista independiente en La Habana.
- z) Edel José García Díaz, periodista independiente de Norte Centro Press, quien participara en el reciente Taller Nacional de Ética.
- aa) José Luis García Paneque, director de la agencia de prensa independiente Libertad en la provincia de Las Tunas y a quien le habrían sido confiscados todos los equipos de comunicación y algunos equipos médicos.
- bb) Ricardo González Alfonso, presidente de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Esterling y director de la revista *De Cuba* en La Habana.
- cc) Diosdado González Marrero, activista político en Matanzas.
- dd) Léster González Pentón, periodista independiente en Villa Clara, detenido el martes 18 de marzo.
- ee) Alejandro González Raga, periodista independiente en Camagüey, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, detenido el martes 18 de marzo.
- ff) Jorge Luis González Tanquero, miembro del Movimiento Independentista Carlos Manuel de Céspedes, de Amancio, Las Tunas, detenido el miércoles 19 de marzo.
- gg) Leonel Grave de Peralta, miembro del Comité Ciudadano del Proyecto Varela en Palma Soriano. Se le habrían formulado cargos en virtud de los artículos 4.1 y 6.1 de la Ley N° 88.
- hh) Normando Hernández González, periodista independiente, miembro del Colegio de Periodistas de Camagüey en Vertientes. Se le habría formulado cargos por el artículo 91 de la Ley N° 62, Código Penal.
- ii) Iván Hernández Carrillo, periodista de la agencia de prensa independiente Patria, en Colón, Matanzas.
- jj) Juan Carlos Herrera Acosta, periodista independiente de Guantánamo, detenido el miércoles 19 de marzo.
- kk) Regis Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano Liberación, Ciudad de La Habana.

- ll) José Ubaldo Izquierdo Hernández, activista en Ciudad de La Habana.
- mm) Reinaldo Labrada Peña, opositor de Las Tunas, detenido el miércoles 19 de marzo.
- nn) Librado Linares García, presidente del Movimiento Cubano Reflexión en Camajuaní, Villa Clara, detenido el martes 18 de marzo.
- oo) Marcelo López, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en Ciudad de La Habana, quien habría distribuido a la prensa extranjera los partes de prensa sobre las detenciones, detenido el 24 de marzo. El 7 de abril de 2003, se le habría condenado a diez años de prisión.
- pp) Héctor Maceda Gutiérrez, periodista independiente de Ciudad de La Habana, detenido el miércoles 19 de marzo. El 7 de abril de 2003 habría sido condenado a 20 años de prisión.
- qq) José Miguel Martínez Hernández, activista en la provincia de La Habana.
- rr) Luis Milán Fernández, activista de Santiago de Cuba.
- ss) Rafael Millet Leyva, activista de Isla de la Juventud.
- tt) Roberto de Miranda Hernández, periodista y presidente del Colegio de Pedagogos Independientes, Ciudad de La Habana.
- uu) Rafael Mollet Leyva, activista de Isla de la Juventud.
- vv) Nelson Molinet Espino, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, detenido a las 6 de la mañana del jueves 20 de marzo.
- ww) Félix Navarro Rodríguez, miembro de la organización denominada Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Matanzas, miembro de la comisión de relatoría de Todos Unidos.
- xx) Jorge Olivera Castillo, director de la agencia de prensa independiente Havana Press en Ciudad de La Habana.
- yy) René Oñate, miembro del Proyecto de Artes Plásticas Espacio Interior, Pinar del Río, detenido el martes 18 de marzo. Se encontraría en detención domiciliaria.
- zz) Héctor Palacio Ruiz, director del Centro de Estudios Sociales y miembro del comité de relatoría de Todos Unidos, detenido a las 6 de la tarde del jueves 20 de marzo. Se le habrían formulado cargos en virtud del artículo 91 de la Ley N° 62, Código Penal. Habría sido condenado el 7 de abril de 2003 a 25 años de prisión.
- aaa) Pablo Pacheco Ávila, periodista independiente, miembro de la Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI) en Ciego de Ávila.

- bbb) Arturo Pérez de Alejo, activista de la Organización Independiente de Derechos Humanos Escambray, Manicaragua, detenido el martes 18 de marzo.
- ccc) José Antonio Pérez Moré, opositor de Pinar del Río, detenido el martes 18 de marzo. Se encontraría en detención domiciliaria.
- ddd) Omar Pernet Hernández, miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña, Placetas, Villa Clara, detenido el miércoles 19 de marzo.
- eee) Horacio Julio Piña Borrego, miembro del Comité Ciudadano del Proyecto Varela en Sandino, Pinar del Río, detenido el miércoles 19 de marzo.
- fff) Fabio Prieto Llorente, periodista independiente de Isla de Pinos, detenido el miércoles 19 de marzo.
- ggg) Alfredo Pulido López, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Camagüey, detenido el martes 18 de marzo.
- hhh) José Gabriel Ramos Castillo, activista en Santiago de Cuba.
- iii) Arnaldo Ramos Lausirique, miembro del Instituto Cubano de Economistas Independientes.
- jjj) Blas Giraldo Reyes Rodríguez, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Sancti Spiritu, detenido el miércoles 19 de marzo.
- kkk) Raúl Rivero Castañeda, director de CubaPress, representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), detenido a las 6 de la tarde del jueves 20 de marzo. Se le habría formulado cargos en virtud de la Ley N° 88. El 7 de abril de 2003 habría sido condenado a 20 años de prisión.
- lll) Alexis Rodríguez Fernández, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Palma Soriano. Se le habría formulado cargos por los artículos 4.1 y 6.1 de la Ley N° 88.
- mmm) Omar Rodríguez Saludes, director de la agencia de prensa independiente Nueva Prensa en La Habana y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, detenido el miércoles 19 de marzo.
- nnn) Marta Beatriz Roque Cabello, directora del Instituto Cubano de Economistas Independientes y coordinadora de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, detenida a las 6 de la mañana del jueves 20 de marzo. Se le habría formulado cargos por el artículo 6.3 de la Ley N° 88.
- ooo) Claro Sánchez Altariva, opositor de Santiago de Cuba, detenido el miércoles 19 de marzo.
- ppp) Miguel Sigler Amaya, activista de Opción Alternativa, de Pedro Betancourt, Matanzas, detenido el martes 18 de marzo.

- qqq) Guido Sigler Amaya, activista de Opción Alternativa, de Pedro Betancourt, Matanzas, detenido el martes 18 de marzo.
- rrr) Ariel Sigler Amaya, activista de Opción Alternativa, de Pedro Betancourt, Matanzas. El domicilio de los tres hermanos habría sido allanado en un operativo policial combinado con miembros de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida. La madre de los hermanos Sigler, Dra. Gloria Amaya, habría tenido que ser trasladada al hospital de Jovellanos con un principio de infarto. Ariel Amaya Sigler fue detenido el martes 18 de marzo.
- sss) Ricardo Silva Gual, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Palma Soriano, Santiago de Cuba, detenido el martes 18 de marzo. Se le habría formulado cargos en virtud de los artículos 4.1 y 6.1 de la Ley N° 88.
- ttt) Fidel Suárez Cruz, opositor de Pinar del Río.
- uuu) Manuel Uval González, opositor de Guantánamo, detenido el jueves 20 de marzo.
- vvv) Julio Antonio Valdés Guerra, activista de la provincia de Granma.
- www) Miguel Valdés Tamayo, opositor de Pinar del Río, detenido el miércoles 19 de marzo.
- xxx) Héctor Raúl Valle Hernández, activista en la provincia de La Habana.
- yyy) Manuel Vázquez Portal, periodista de la agencia de prensa independiente Grupo Decoró en Ciudad de La Habana, detenido el miércoles 19 de marzo. Sería procesado en virtud de la Ley N° 88.
- zzz) Antonio A. Villarreal Acosta, activista de Villa Clara.
- aaaa) Orlando Zapata Tamayo, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, de Ciudad de La Habana, detenido a las 6 de la mañana del jueves 20 de marzo.

6. Según informaciones recibidas, entre el 18 y el 26 de marzo de 2003 las fuerzas de seguridad habrían procedido al arresto y detención de las 79 personas arriba mencionadas, en razón de las actividades que ejercen como defensores de derechos humanos, periodistas, escritores, dirigentes de movimientos políticos de oposición, dirigentes sociales disidentes o líderes sindicales. Se afirma que muchas de las personas detenidas tienen en común el participar en el denominado Proyecto Varela, que consiste en la simple difusión de una petición de celebración de un referéndum sobre reformas a los sistemas electoral y político cubanos.

7. La fuente informa que muchos arrestos se habrían producido haciendo uso excesivo de la fuerza. Los domicilios de estas personas habrían sido allanados y muchas de sus propiedades muebles, particularmente libros, cuadernos de notas, disquetes y archivos, habrían sido confiscadas. Se afirma que estas personas habrían sido acusadas de participar en actividades conspirativas junto con James Cason, director de la Sección de Intereses del Gobierno de los Estados Unidos de América en La Habana. El Gobierno de Cuba habría anunciado que todos los



detenidos serán juzgados. Según las informaciones recibidas, los detenidos podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de prisión en virtud, entre otras normas legales, de la Ley N° 88 sobre protección de la independencia nacional y de la economía de Cuba.

8. La fuente informó que el 7 de abril de 2003, 33 de estas personas fueron condenadas a penas que van de los 15 hasta los 27 años de prisión tras ser consideradas culpables de atentar contra la seguridad del Estado y de colaborar con una potencia extranjera. El 7 de abril de 2003, Héctor Palacios habría sido condenado a 25 años de prisión. Oscar Espinosa Chepe, Héctor Maseda y Raúl Rivero habrían sido condenados a 20 años de cárcel. Osvaldo Alfonso y Marcelo Cano habrían sido condenados a 18 años de prisión, mientras Marcelo López habría sido condenado a 10 años. La fuente considera que es la primera vez que el ministerio público solicita, y que los jueces imponen, penas tan severas para hechos de carácter político o social.

9. La fuente considera también que estas personas están siendo sujetas a procedimientos judiciales de carácter sumario, en los cuales no se ha respetado o no se respeta los principios del debido proceso legal. Se afirma que estas personas no habrían sido oportunamente informadas de los cargos que se les imputan; que no habrían tenido un adecuado contacto con sus familias ni con sus abogados; que éstos no habrían podido tener acceso a las pruebas presentadas por el ministerio público contra sus patrocinados ni tiempo para preparar sus defensas. Se afirma también que estas personas no habrían podido convocar testigos en su favor ni objetar las pruebas sometidas por la acusación fiscal.

10. El Gobierno, en su respuesta, que incluye lo dicho por su Ministro de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa en relación a estos casos, sostiene que resulta totalmente falsa la descripción que se realiza acerca de las profesiones y el alegado compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas mencionadas y que ninguna de estas personas es realmente periodista, defensor de derechos humanos, disidente político u opositor, o ejerce cualquier otra profesión de interés o utilidad social o comunitaria. De los 37 acusados que durante años han proclamado ser "periodistas independientes", sólo 4 realmente estudiaron periodismo y fueron periodistas alguna vez; que la mayoría de ellos se mantienen voluntariamente fuera de todo vínculo laboral; recibiendo los medios de sustento y enriquecimiento personal del Gobierno de los Estados Unidos de América y de la mafia terrorista cubano-americana que opera en territorio estadounidense; que estas personas son responsables y ejecutores directos de actos mercenarios dirigidos a subvertir y revocar el orden constitucional e institucional que se diera en referéndum al pueblo cubano, reafirmado por más de 99% de los cubanos con derecho a voto.

11. Con relación a las detenciones, el Gobierno informa que el 24 de febrero de 2003, el 12 y el 14 de marzo, el jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en La Habana, Sr. Canson, en actos organizados por él, realizó reuniones conspirativas con un grupo de mercenarios. El Gobierno tomó el 18 de marzo de 2003 la decisión de arrestar a un grupo de 32 mercenarios que había estado en las reuniones con él y al día siguiente, a otros 33 mercenarios que habían estado participando, recibiendo dinero y dando información distorsionada, para que pueda ser aplicada la Ley Helms-Burton, para que pueda ser aplicado el bloqueo contra Cuba.

12. Con respecto a los procesos en sí, el Gobierno informa que se celebraron 29 juicios prácticamente en todas las provincias del país. Fueron acusadas 75 personas, 74 de ellos hombres, y se han impuesto por los tribunales correspondientes sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad.

13. El Gobierno sostiene que ha habido respeto absoluto al debido proceso y a las garantías para todos los acusados en base a lo siguiente:

- a) Conocieron los cargos que se les imputaban y tuvieron la oportunidad de alegar sobre ellos antes de la celebración del juicio.
- b) Ejercieron el derecho de contar con abogado defensor que, según la legislación cubana, puede ser designado por el acusado o, en su defecto, de oficio. Participaron 54 abogados defensores, 44 de ellos designados por los acusados o sus familias.
- c) Ejercieron su derecho de ser escuchados en juicio por tribunales previamente constituidos. Para cada uno ha habido una vista oral donde ha intervenido el acusado, donde ha ejercido su derecho de volver a intervenir, al final, donde ha respondido preguntas de la defensa y de la fiscalía, donde han participado testigos y peritos. Han participado casi 3.000 personas en los 29 juicios, básicamente familiares, además de cientos de testigos, peritos, y en promedio unas 100 personas por juicio. En cuanto a asistencia de diplomáticos extranjeros en La Habana, se aclara que no tienen por qué estar en un juicio donde no es juzgado un nacional de su país. Los tribunales correspondientes decidieron que no hubiera acceso a la prensa, por razones de seguridad. Para evitar cualquier tipo de incidente se limitó el acceso también a miles de revolucionarios que, indignados por la actitud de estos individuos, hubieran querido estar en los juicios y tampoco han estado.
- d) Todos los acusados y sus defensores han ejercido el derecho de aportar las pruebas a su favor que consideraron conveniente, además de las presentadas por la instrucción policial y por la fiscalía, y de presentar sus testigos; de 28 testigos que no habían sido previamente presentados por la fiscalía, 22 fueron autorizados en el momento por los tribunales a actuar. Todos los abogados defensores tuvieron acceso previo al expediente de la acusación.
- e) Todos tienen derecho, y así les fue notificado en el juicio, de recurrir las sentencias ante un tribunal superior al que fueron condenados, en este caso, ante el Tribunal Supremo; es un derecho que la legislación cubana respeta.
- f) Ha habido el más transparente y escrupuloso respeto a la seguridad física, a la integridad física y moral de cada uno de los acusados en todas las etapas del proceso. No hay la más mínima evidencia del empleo de la coacción, o de la presión o de la amenaza.

14. El Gobierno informa que se ha aplicado el artículo 92 del Código Penal cubano, la Ley N° 62 de 1987, que venía a su vez del Código Penal español colonial y que establece "El que en interés de un Estado extranjero ejecute un hecho con el objetivo de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano, o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación

de libertad de 10 años a 20, o muerte". Por otro lado, se han aplicado varios artículos de la Ley N° 88 de protección de la independencia nacional y de la economía de Cuba: artículo 5.1: "El que busque información para ser utilizada en la aplicación de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminado a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado socialista y la independencia de Cuba, incurre en sanción de privación de libertad"; artículo 6.1: "El que acumule, reproduzca, difunda material de carácter subversivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de cualquier entidad extranjera para apoyar los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra, incurre..." y el artículo 7: "El que con el propósito de lograr los objetivos de la Ley Helms-Burton apoyare el bloqueo y la guerra económica, colaborare por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros..."

15. El Gobierno concluye que el Proyecto Varela forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba, que ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior, con la participación activa de la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en La Habana; forma parte del mismo esquema de subversión, no tiene el menor asidero en las leyes cubanas, y es una burda manipulación de la Constitución y las leyes de Cuba.

16. La fuente, en sus comentarios a la respuesta del Gobierno, dice que entre las 79 personas detenidas figuran: miembros de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional (asociación reconocida a nivel internacional, que ha recibido el Premio de derechos humanos de la República Francesa en 1996 y es miembro de la *Fédération cubana internationale des ligues des droits de l'homme*), tales como Marcelo Cano Rodríguez y Marcelo López; miembros del Instituto de Economistas Independientes como Marta Beatriz Roque Cabello (directora), y Arnaldo Ramos Lausirique; miembros de la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil, como Marta Beatriz Roque Cabello (coordinadora), Orlando Zapata Tamayo, Nelson Aguiar Ramírez y Nelson Molinet Espino; un miembro del Centro de Estudios Sociales, Héctor Palacio Ruiz (director); un miembro del Consejo Unificado de Trabajadores Cubanos (CUTC), Pedro Pablo Álvarez Ramos (secretario general); periodistas independientes como Ricardo González Alfonso, presidente de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Esterling y director de la revista *De Cuba* en La Habana; Raúl Rivero Castañeda, director de *CubaPress*, Óscar Espinosa Chepe, y Héctor Maceda Gutiérrez, periodistas independientes de Ciudad de La Habana; miembros activos de la sociedad civil implicados en el Proyecto Varela, como Osvaldo Alfonso, Alfredo Domínguez Batista, Alfredo Felipe Fuentes, Luis Enrique Ferrer García, Leonel Grave de Peralta, Horacio Julio Piña Borrego.

17. Señala la fuente que constituye una violación al derecho de participación política el que numerosas personas hayan sido detenidas por motivo de haber participado en el Proyecto Varela, una campaña en vista a obtener cambios democráticos por la vía constitucional por medio de la difusión de una petición que apela a la convocatoria de un referéndum sobre reformas políticas y electorales. Este proyecto habría recibido la firma de 11.000 cubanos.

18. Ha habido violaciones a normas internacionales a un debido proceso, ya que tanto la instrucción como el proceso oral han sido particularmente expeditivos con relación a la complejidad de los casos estudiados, y las penas acordadas (condena a penas de 15 a 25 años de prisión). Añade que la mayoría de los abogados no han podido reunirse con sus clientes sino en

las audiencias, y en consecuencia no han podido razonablemente preparar y asegurar su defensa y que las penas pronunciadas son desproporcionadas para infracciones de carácter político y de delitos de opinión.

19. El Grupo de Trabajo recuerda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho pública una declaración de preocupación sobre estos casos en fecha 9 de abril de 2003 sobre la transparencia y expeditividad de los juicios por las cuales se ha condenado a estas personas. Asimismo, los Relatores Especiales sobre el derecho a la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han hecho el 3 de mayo de 2003 una declaración conjunta en la cual manifiestan su preocupación sobre la libertad de opinión y expresión de estos periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos de oposición, lo cual demuestra un alto interés por estos casos.

20. Aunque el Gobierno ha dicho que no todas estas personas tienen estas características, el Grupo de Trabajo hace notar que el ejercicio de derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos es independiente de la calidad de periodista o de defensor de derechos humanos, o de profesión alguna, por lo cual la no calificación como tales no les priva de ejercer sus derechos libremente.

21. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha desmentido la aserción de la fuente de que todas las personas han sido detenidas entre el 18 y el 26 de marzo en conexión al Proyecto Varela. En la respuesta del Gobierno se le nombra como parte de la estrategia de subversión contra Cuba y se confirma que los arrestos han tenido lugar por haber asistido estas personas a reuniones con la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en La Habana los días 24 de febrero, 12 y 14 de marzo de 2003.

22. No está claro cómo la conexión de estas reuniones y la búsqueda de recursos de parte de las personas mencionadas en la comunicación, hayan constituido una apelación a la violencia. El artículo 13 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General en su resolución 53/144 de 9 de diciembre de 1998, establece que: "Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración".

23. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no ha objetado que el Proyecto Varela se trate de la difusión de una petición de celebración de un referéndum sobre reformas a los sistemas electoral y político cubanos. El ejercicio pacífico de este tipo de actividades se encuentra protegido por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de expresión y de opinión y de reunión, y en el 21 sobre la libertad de participación política.

24. A propósito de si en los procesos seguidos a estas 79 personas la inobservancia total o parcial de normas del derecho internacional relativas a un juicio imparcial ha sido de tal gravedad que conferiría a estas privaciones de libertad un carácter arbitrario, el Grupo de Trabajo, a la luz de las informaciones proporcionadas tanto por el Gobierno como por la fuente,

no está en condiciones de evaluarlo. Aun así, debe hacer notar que el carácter sumario de los juicios, que ha sido confirmado, debe tener proporcionalidad con la ofensa y con la pena impuesta.

25. Independientemente que el derecho interno haya o no sido respetado, el Grupo considera que la legislación aplicada contraviene lo dispuesto por los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que limita el ejercicio libre de los derechos de opinión y expresión, de no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; el de reunión y asociación pacíficas y de participar directamente en el gobierno de su país.

26. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Nelson Aguiar Ramírez, Osvaldo Alfonso, Pedro Pablo Álvarez Ramos, Pedro Argüelles Morán, Víctor Rolando Arroyo, Mijail Bárzaga Lugo, Alfredo Domínguez Batista, Margarito Broche, Marcelo Cano Rodríguez, Carmelo Díaz Fernández, Eduardo Díaz Fleites, Antonio Díaz Sánchez, Alfredo Domínguez Batista, Mario Enríquez Mayo, Óscar Espinosa Chepe, Alfredo Felipe Fuentes, Efrén Fernández Fernández, Adolfo Fernández Saínz, José Daniel Ferrer Castillo, Luis Enrique Ferrer García, Orlando Fundora Álvarez, José Ramón Gabriel Castillo, Próspero Gáinza Agüero, Miguel Galván Gutiérrez, Julio César Gálvez, Edel José García Díaz, José Luis García Paneque, Ricardo González Alfonso, Diosdado González Marrero, Léster González Pentón, Alejandro González Raga, Jorge Luis González Tanquero, Leonel Grave de Peralta, Normando Hernández González, Iván Hernández Carrillo, Juan Carlos Herrera Acosta, Regis Iglesias, José Ubaldo Izquierdo Hernández, Reinaldo Labrada Peña, Librado Linares García, Marcelo López, Héctor Maceda Gutiérrez, José Miguel Martínez Hernández, Luis Milán Fernández, Rafael Millet Leyva, Roberto de Miranda Hernández, Rafael Mollet Leyva, Nelson Molinet Espino, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Olivera Castillo, René Oñate, Héctor Palacio Ruiz, Pablo Pacheco Ávila, Arturo Pérez de Alejo, José Antonio Pérez Moré, Omar Pernet Hernández, Horacio Julio Piña Borrego, Fabio Prieto Llorente, Alfredo Pulido López, José Gabriel Ramos Castillo, Arnaldo Ramos Lausirique, Blas Giraldo Reyes Rodríguez, Raúl Rivero Castañeda, Alexis Rodríguez Fernández, Omar Rodríguez Saludes, Marta Beatriz Roque Cabello, Claro Sánchez Altariva, Miguel Sigler Amaya, Guido Sigler Amaya, Ariel Sigler Amaya, Ricardo Silva Gual, Fidel Suárez Cruz, Manuel Uval González, Julio Antonio Valdés Guerra, Miguel Valdés Tamayo, Héctor Raúl Valle Hernández, Manuel Vázquez Portal, Antonio A. Villarreal Acosta y Orlando Zapata Tamayo, es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

27. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que estudie la posibilidad de enmendar su

legislación para adaptarla a la Declaración y a las demás normas internacionales pertinentes aceptadas por ese Estado. Asimismo, que tome las iniciativas con vista a ser Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 9 de mayo 2003

### **OPINIÓN N° 10/2003 (CHINA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 16 de septiembre de 2002.

*Relativa a:* Wang Bingzhang, Yue Wu y Zhang Qi.

**El Estado ha firmado, pero aún no ha ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge favorablemente la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que le facilitó sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a las mismas.
5. La comunicación, cuyo resumen se transmitió al Gobierno, se refiere a:
  - a) El Dr. Wang Bingzhang, varón, nacido el 30 de diciembre de 1947, nacional chino que vive en Nueva York (Estados Unidos de América) activista en favor de los derechos humanos y la democracia. Los Estados Unidos de América le han concedido asilo político.
  - b) Yue Wu, varón, nacido el 7 de agosto de 1947, nacional chino que vive en París, con un documento de viaje como refugiado, también activista en favor de los derechos humanos y la democracia. Según la fuente, es un líder sindical reconocido internacionalmente. Participó en la manifestación de 1989 en la Plaza de Tiananmen; y
  - c) Zhang Qi, mujer, nacida el 29 de diciembre de 1962, activista china en favor de los derechos humanos y dirigente del Zhong Gong. Al parecer, era buscada por el Gobierno y escapó a Tailandia en 2000. A finales de 2001 se le concedió asilo político en los Estados Unidos de América.

6. Según parece, estas personas fueron detenidas, alrededor del 26 de junio de 2002 en la frontera entre China y Viet Nam, cerca del norte de la provincia septentrional de Quang Ninh, por miembros de la Oficina de Seguridad Pública china o por miembros del Ejército Popular de Liberación de China. Al principio fueron retenidos cerca de la frontera y posteriormente fueron trasladados a Beijing, donde permanecieron recluidos. Al parecer, no se presentó ninguna orden de detención en el momento de detenerles.

7. El Gobierno afirma en su respuesta que Wang Bingzhang está siendo investigado por las autoridades de seguridad del Estado chino bajo la sospecha del delito de espionaje. En mayo de 1999 se emitió la orden de detención por sospecha de actividades terroristas violentas.

8. El Gobierno añade que aproximadamente a las 22.00 horas del 3 de julio de 2002, las autoridades de seguridad pública de la ciudad de Fangchenggang, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, recibieron informes sobre un secuestro y rápidamente dieron la alarma. Se encontró a tres personas atadas, en el templo Baihu de los barrios situados al norte de la ciudad. Según las declaraciones de estas tres personas, habían sido secuestradas el 27 de junio en la provincia de Quang Ninh, en Viet Nam, y se les había exigido un rescate de 10 millones de dólares de los EE.UU. Al no pagarse el rescate, les vendaron los ojos y les trasladaron de un lugar a otro hasta el 3 de julio de 2002, cuando fueron rescatados por la policía china.

9. Tras una investigación, las autoridades de seguridad pública locales pudieron identificar a las tres personas secuestradas como Wang Bingzhang, Yue Wu y Zhang Qi.

10. El Gobierno afirma que, habida cuenta de que Wang Bingzhang era sospechoso de haber cometido un delito, y de conformidad con las disposiciones que determina la jurisdicción en este caso, las autoridades de seguridad pública de Guangxi entregaron a Wang Bingzhang a sus homólogos de Guangdong para que procedieran a la investigación. Toda vez que el Sr. Wang era sospechoso de haber participado en delitos de espionaje y de organizar y llevar a cabo actividades terroristas violentas, las autoridades de seguridad pública de Guangdong, actuando de acuerdo con la ley, ordenaron que se le mantuviera en arresto domiciliario. El 5 de diciembre de 2002, con la aprobación del ministerio fiscal, la policía de Guangdong, actuando de acuerdo con la ley, procedió a la detención preventiva del Sr. Wang. Su caso todavía se está investigando.

11. Con respecto a los casos de Yue Wu y Zhang Qi, el Gobierno declara que han sido absueltos de toda implicación en los delitos de espionaje y de organización de actividades terroristas violentas, de los que el Sr. Wang es sospechoso. Las autoridades de seguridad pública han levantado las órdenes de arresto domiciliario.

12. En sus explicaciones, el Gobierno afirma que este caso es un asunto penal de mucha gravedad, que implica una sospecha de poner en peligro la seguridad del Estado de China y la seguridad pública. Según la investigación de los hechos que han llevado a cabo las autoridades de seguridad del Estado chino, el Sr. Wang había establecido estrechos vínculos con las autoridades de espionaje y de inteligencia de Taiwán, que le habían pagado para recoger y robar secretos del Estado chino para ellos.

13. El Gobierno comunica también que, durante mucho tiempo, el Sr. Wang había defendido abiertamente la violencia y el terrorismo, afirmando que debían utilizarse métodos violentos, secuestros y explosivos, y que él mismo había planeado, organizado y llevado a cabo muchas actividades terroristas violentas. El Gobierno añade que las medidas adoptadas por la policía contra él son exclusivamente en respuesta a los delitos que se sospecha ha cometido.

14. El Gobierno concluye que las autoridades han actuado de conformidad con la ley y que Wang Bingzhang es sospechoso de haber llevado a cabo actividades delictivas consistentes en poner en peligro la seguridad del Estado y la seguridad pública. De acuerdo con las disposiciones de los artículos 6 y 7 del Código Penal chino, la jurisdicción penal china se extiende a todas las personas que cometen delitos en el territorio de China y a los ciudadanos chinos que cometen los delitos especificados en el Código fuera del territorio del país. Al mismo tiempo, las órdenes de arresto domiciliario impuestas al Sr. Wang y a sus dos compañeros se ajustaban a lo estipulado en los artículos 51 y 57 del Código de Procedimiento Penal chino y a las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

15. En sus comentarios y observaciones, la fuente replicó a la respuesta del Gobierno afirmando que el 27 de junio de 2002, Wang Bingzhang, Yue Wu y Zhang Qi fueron abordados en el vestíbulo de su hotel en Mongcai (Viet Nam), por un grupo de unos diez hombres vestidos de paisano. Pretendiendo ser agentes de policía vietnamitas, exigieron que los tres les acompañaran a la comisaría de policía local para ser interrogados. Tras resistirse al principio, el Sr. Wang fue agredido físicamente en el vestíbulo, y las tres personas finalmente cedieron. Poseían todos los documentos de viaje exigidos, incluidos los visados vietnamitas, y no habían cometido ninguna infracción.

16. Una hora antes, el Sr. Wang se había reunido con un activista sindical chino de la provincia de Guangxi que había cruzado la frontera. La reunión se había previsto dos meses antes y se centró en el movimiento obrero en China, el descontento de los trabajadores y el aumento del desempleo, la situación del Falun Gong y su campaña para obtener la libertad religiosa, y la corrupción de algunos funcionarios gubernamentales de Guangxi.

17. Las tres personas fueron secuestradas por vietnamitas, que les llevaron al otro lado de la frontera y les entregaron a los agentes chinos. Se les puso en habitaciones separadas en un motel, donde permanecieron durante tres días, atados. Durante ese tiempo, el líder de los secuestradores exigió un rescate de 10 millones de dólares de los EE.UU. Pidió información para ponerse en contacto con la familia de los tres, quienes facilitaron sus direcciones y números de teléfono. Sin embargo, los secuestradores no se pusieron en contacto en ningún momento con ningún familiar. Después de acusar a sus secuestradores de ser agentes chinos, el Sr. Yue fue golpeado y amordazado.

18. El 3 de julio de 2002, las tres personas fueron conducidas a otro motel, donde permanecieron tres días más, hasta que les condujeron a un templo budista en la ciudad de Fangchenggang, al sur de la provincia de Guangxi. Les dejaron en el templo durante unos minutos, hasta que llegaron policías locales de Guangxi en automóviles. La policía les trasladó a la comisaría de policía local, donde permanecieron recluidos hasta las 19.00 horas aproximadamente del día siguiente. Dijeron a la policía que habían sido secuestrados por ladrones en Viet Nam y pidieron regresar. Aunque creían en realidad que sus secuestradores eran agentes chinos, tuvieron miedo de mencionarlo a la policía local, que esperaban que les permitiera regresar a Viet Nam.



19. La tarde del 4 de julio de 2002, los tres fueron trasladados a Nanning, la capital de la provincia de Guangxi. Durante el viaje, el Sr. Yue preguntó a la policía: "¿qué ha ocurrido con los secuestradores?" La policía se negó a responder. Durante los 12 ó 13 días siguientes, permanecieron recluidos en una academia de formación policial en Nanning.

20. Durante los primeros seis meses de reclusión del Sr. Wang, durante los seis meses de reclusión del Sr. Yue, y durante los nueve meses de reclusión de la Sra. Zhang, nunca se les acusó de ningún delito ni se emitió ninguna orden para su detención o su reclusión. No se celebraron audiencias judiciales sobre la legalidad de su reclusión ni se dictó ninguna orden judicial de reclusión contra ellos. Según la fuente, se les negó el acceso a un abogado y nunca se les informó de que tuvieran derecho a la asistencia letrada. Se les denegó el permiso para ponerse en contacto con sus familias (excepto a Zhang Qi, que posteriormente estuvo bajo arresto domiciliario en el domicilio de su madre) para informarles de su detención o de los lugares donde estaban recluidos y se les mantenía en régimen de incomunicación.

21. La fuente considera además que el Gobierno negó tener conocimiento del paradero de Wang Bingzhang, Yue Wu y Zhang Qi hasta que el interés internacional en sus casos hizo que el Gobierno cambiara de actitud. El Gobierno no reconoció hasta el 4 de diciembre de 2002 que les había mantenido recluidos desde el 3 de julio de 2002. La fuente señaló que su "rescate" del secuestro fue una estratagema del Gobierno.

22. La fuente confirmó la afirmación del Gobierno de que Yue Wu y Zhang Qi fueron puestos en libertad a finales de diciembre de 2002.

23. La fuente añade que el 5 de diciembre de 2002 Wang Bingzhang fue acusado finalmente de "delitos de espionaje" y de "llevar a cabo actividades terroristas". Fue juzgado el 22 de enero de 2003 por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong. El Sr. Wang se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban. El juicio duró únicamente medio día, y se celebró a puerta cerrada. El Gobierno invocó a "secretos de Estado" como justificación del juicio a puerta cerrada. No se permitió la presencia de ningún familiar, simpatizante ni reportero. Aunque el Tribunal acusó a Wang Bingzhang de delitos muy graves, entre ellos el terrorismo y el espionaje, se negó a hacer pública ninguna prueba de sus delitos.

24. El 10 de febrero de 2003, Wang Bingzhang fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Sus abogados argumentaron que no había suficientes pruebas para condenarle. El Sr. Wang recurrió el veredicto y la condena del tribunal rápidamente. El recurso fue rechazado el 28 de febrero de 2003.

25. La fuente afirma que teniendo en cuenta que el tribunal denegó al Sr. Wang su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a disponer del tiempo y los medios suficientes para preparar su propia defensa, su derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, su derecho a citar a testigos de descargo, su derecho a contrainterrogar a los testigos que declaraban contra él y, en general, la falta de todo tipo de garantías que garantizaran una defensa adecuada y una audiencia plena, el juicio del Sr. Wang contravenía las normas para los procedimientos judiciales reconocidas internacionalmente.

26. La fuente añade que las acusaciones fueron inventadas intencionadamente contra el Sr. Wang. Dice también que es de todos sabido que la definición de términos como "espionaje" y "poner en peligro la seguridad del Estado" es muy elástica y por tanto varía respecto a las definiciones más estrictas que se emplean en otros países para definir este tipo de delitos. La fuente afirma que el caso de Wang Bingzhang representa la primera vez que el Gobierno ha presentado cargos de terrorismo contra un disidente a favor de la democracia en virtud de sus nuevas leyes antiterroristas. Esta es también una de las penas de prisión más duras que haya impuesto jamás el Gobierno a un disidente en favor de la democracia.

27. Después de examinar las comunicaciones de la fuente y la respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo constata que:

- a) Según el Gobierno, Wang Bingzhang, así como Yue Wu y Zhang Qi, fueron víctimas de un secuestro el 27 de junio de 2002 por personas indeterminadas. Las autoridades chinas los rescataron al encontrarlos en el templo Baihu el 3 de julio de 2002.
- b) Wang Bingzhang, Yue Wu y Zhang Qi, inmediatamente después de haber sido rescatados, fueron detenidos por las mismas autoridades que los encontraron. El Gobierno no ha especificado si las autoridades tenían para ello orden de detención. El Gobierno en su respuesta no ha clarificado por qué, quienes eran víctimas de un secuestro, se convierten repentinamente en acusados y sospechosos de otros delitos. El Gobierno tampoco ha aclarado en su respuesta si los responsables del secuestro de estas personas han sido ya buscados, encontrados o acusados.
- c) Las tres personas, especialmente, Wang Bingzhang, son, según la fuente, activistas internacionalmente reconocidos de movimientos pro democracia. El Gobierno, en cambio, habla de apología de métodos violentos por el Sr. Wang, quien habría sugerido el empleo de medios como el secuestro y acciones con explosivos, diciendo que él mismo se jacta de haber organizado y llevado a cabo muchas actividades violentas y terroristas.
- d) Aun así, el Gobierno no especifica si efectivamente el Sr. Wang Bingzhang puso sus propuestas en práctica, y no ofrece pruebas de las ocasiones concretas en llamamientos a la violencia. Salvo este secuestro, del que él mismo ha sido víctima, según lo afirma el mismo Gobierno, no se da información de otros secuestros o actos de violencia que él haya motivado.
- e) Parece claro que el Sr. Wang Bingzhang, durante sus primeros cinco meses de reclusión, no tuvo conocimiento de los cargos, derecho a asistencia letrada ni derecho a una revisión judicial de su detención y reclusión, y que, después de esa fecha, no gozó del derecho a la presunción de inocencia, el derecho a tener el tiempo y los medios suficientes para su defensa, el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, el derecho a un juicio rápido y el derecho a conainterrogar a los testigos.
- f) Todo esto constituye una serie de violaciones de tal gravedad que confieren a su privación de libertad un carácter arbitrario, en violación de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

- g) En cuanto a Yue Wu y Zhang Qi, el Grupo de Trabajo toma nota de que el Gobierno ha informado que estas personas ya no se hallan recluidas, lo cual fue confirmado por la fuente. El Grupo de Trabajo, sin embargo, debe señalar que el Gobierno no ha negado los hechos de que nunca fueron acusados de ningún delito ni se dictó ninguna orden para su detención o reclusión, durante sus nueve y seis meses de reclusión, respectivamente. Su reclusión ha sido en forma secreta y no se les informó de cargo alguno, por lo cual se puede establecer que estas detenciones no tuvieron una base legal.

28. Así pues, el Grupo de Trabajo, expresa la siguiente opinión:

Declara que, a pesar que Yue Wu y Zhang Qi no se encuentran recluidos, de conformidad con el inciso a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, la privación de libertad de estas dos personas ha sido arbitraria, por carecer manifiestamente de base legal alguna y contravenir al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

Declara que la reclusión del Sr. Wang Bingzhang es arbitraria porque contraviene lo dispuesto en los artículo 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

29. En consecuencia, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Wang Bingzhang de conformidad a las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la vez que lo insta nuevamente a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adoptada el 9 de mayo de 2003

### **OPINIÓN N° 11/2003 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 16 de agosto de 2002.*

*Relativa a:* Jaramani Najib Youcef.

#### **El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha proporcionado al Grupo de Trabajo sus observaciones.

El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.

5. Según la fuente, Najib Yousef Jaramani, nacido en 1956, de nacionalidad libanesa, que vive en Baabdat/Metnanon (Líbano) fue al parecer detenido el 24 de enero de 1997 en su domicilio por agentes de seguridad libaneses vestidos de paisano. Las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo la detención no se identificaron ni presentaron una orden de detención. Posteriormente, el Sr. Jaramani fue supuestamente trasladado a la República Árabe Siria, donde fue acusado de espionar para el enemigo sionista, declarado culpable y según parece condenado a muerte por las autoridades sirias. Según la fuente, las autoridades libanesas nunca han solicitado la repatriación de sus ciudadanos reclusos en Siria. La fuente considera que la detención del Sr. Jaramani es arbitraria porque fue detenido en el Líbano, y posteriormente trasladado a Siria y condenado allí sin ningún tipo de procedimiento de extradición.

6. En su respuesta, el Gobierno de la República Árabe Siria afirma que el Sr. Jaramani fue detenido y acusado de espiar para Israel. Fue juzgado y condenado a muerte en un juicio legal y de acuerdo con la ley.

7. En sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno, la fuente reitera las declaraciones formuladas en su comunicación inicial y pide al Grupo de Trabajo que adopte medidas urgentes para asegurarse de que se suspenda la pena de muerte. La fuente añade que el Sr. Jaramani fue juzgado a puerta cerrada y que, según su familia, no se le permitió contratar a un abogado ni pudo recurrir el fallo por el que se le condenaba a muerte. La fuente afirma que unos meses después de su detención el Sr. Jaramani fue recluso en régimen de incomunicación y no se permitió a su familia volver a visitarle.

8. El 12 de mayo de 2003, el Grupo de Trabajo escribió al Gobierno para pedirle que facilitara detalles sobre el tribunal que juzgó al Sr. Jaramani (si era civil o militar) y el procedimiento que se siguió: ¿contó con la asistencia de un abogado nombrado por el tribunal o elegido por él? ¿Se permitió a su familia visitarle y comunicarse con él? ¿Pudo recurrir la sentencia y, en tal caso, ha emitido el tribunal superior un fallo sobre el caso? Se envió al Gobierno un recordatorio el 19 de agosto de 2003. En su respuesta, el Gobierno se limitó a declarar que había transmitido la carta del Grupo de Trabajo a las autoridades pertinentes y todavía no había recibido la información solicitada.

9. Habida cuenta de los hechos mencionados, el Grupo de Trabajo considera que, para expresar una opinión sobre si la detención es arbitraria, debe decidir si el caso corresponde a una de las tres categorías de detención arbitraria definidas en sus métodos de trabajo, y en consecuencia, si entra en el ámbito del mandato del Grupo de Trabajo. Con respecto a la categoría I, aparentemente la privación de libertad tiene base jurídica, concretamente un fallo judicial. En cuanto a la categoría II, la fuente no ha afirmado en ningún momento que la detención del Sr. Jaramani sea resultado del ejercicio legítimo de sus derechos humanos. Así pues, sólo queda la categoría III. En el caso que se examina, la fuente cuestiona la legalidad de la detención del Sr. Jaramani, su traslado ilegal a Siria, su juicio por un tribunal incompetente y la violación de su derecho a un juicio imparcial.

10. Con respecto a estas cuestiones, el Grupo de Trabajo no considera que el traslado no autorizado de una persona de un país a otro sea suficiente, en este caso, para considerar la reclusión como arbitraria. Para que el Grupo de Trabajo considere arbitraria la detención, debe demostrar que el incumplimiento total o parcial de las normas internacionales por parte del tribunal en cuanto al derecho a un juicio justo fue de una gravedad suficiente para dar carácter arbitrario a la privación de libertad.

11. Por lo que respecta a la falta de una audiencia pública, aunque no hay duda de que el carácter público de las audiencias es una garantía importante, en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Siria es Parte, se reconoce que los tribunales tienen la facultad de excluir a la prensa y al público de la totalidad o de una parte de un juicio por las razones que se mencionan. En el caso que se examina, un caso de espionaje, el carácter privado del juicio no puede considerarse en sí mismo una violación del derecho a un juicio imparcial.

12. Con respecto al resto de las denuncias de la fuente, concretamente la de que el Sr. Jaramani no tuvo asistencia jurídica y no pudo recurrir la pena de muerte (afirmaciones que, en caso de fundamentarse, constituirían violaciones de las normas de un juicio justo de gravedad suficiente para dar carácter arbitrario a la privación de libertad) el Gobierno se ha limitado a declarar que el juicio se llevó a cabo de conformidad con las normas y principios que establece la ley, y no ha proporcionado la información solicitada por el Grupo de Trabajo para negar dichas denuncias, a pesar de haber tenido más de cuatro meses adicionales para hacerlo.

13. El Grupo de Trabajo considera que el hecho de que se condenara a muerte al Sr. Jaramani sin que el Gobierno pudiera demostrar que la condena fue pronunciada por un tribunal competente, independiente e imparcial, debidamente constituido con arreglo a la ley, o que el Sr. Jaramani fue asistido por un abogado elegido por él o tuvo la oportunidad de que un tribunal superior revisara su declaración de culpabilidad y su condena, constituye una violación de las normas de un juicio justo de gravedad suficiente para atribuir carácter arbitrario a la privación de libertad, lo que contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Árabe Siria es Parte.

14. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Najib Youcef Jaramani es arbitraria, ya que contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Árabe Siria es Parte, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. Después de emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, que podría tener consecuencias irreparables, de conformidad con las normas y principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 3 de septiembre de 2003

### OPINIÓN N° 12/2003 (CHINA)

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 31 de enero de 2003.

*Relativa a:* Liu Xianbin y Li Bifeng.

#### **El Estado ha firmado pero no ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber presentado una información en relación con el caso.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
5. Según la fuente, Liu Xianbin, nacional chino nacido el 25 de agosto de 1968, que reside en la ciudad de Suining, provincia de Sichuan, es un dirigente del Partido Democrático de China en la provincia de Sichuan y director adjunto de Observador de los Derechos Humanos de China, organización no oficial.
6. Durante varios años Liu Xianbin escribió cartas abiertas a las autoridades y participó en campañas nacionales de promoción de la democracia y los derechos humanos en China. Según se afirma, pasó dos años en prisión por participar en el movimiento democrático de 1989.
7. Al parecer, el 7 de julio de 1999 Liu Xianbin fue detenido en su domicilio sin una orden de detención por agentes de la seguridad del Estado de la ciudad de Suining y detenido. El 13 de julio de 1999 fue formalmente detenido.
8. El 6 de agosto de 1999 el Tribunal de Segunda Instancia de la ciudad de Suining condenó a Liu Xianbin a 13 años de prisión por "incitación a la subversión contra el poder del Estado" con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal de China de marzo de 1997. Según la información recibida, Liu Xianbin no pudo disponer de un abogado defensor y ejerció su propia defensa en el juicio. Su esposa intentó contratar a un abogado pero no lo logró, ya que varios abogados abandonaron el caso a causa de las presiones ejercidas por las autoridades chinas.
9. Según la información recibida, las autoridades de seguridad pública presentaron las siguientes pruebas durante el juicio: telegramas a organizaciones en el extranjero, que se citaron como pruebas de la colusión de Liu Xianbin con grupos establecidos en el extranjero y un complot para establecer el Partido Democrático de China en el extranjero; comentarios obtenidos fuera de contexto de un artículo que Liu Xianbin había escrito para Vigilante de los Derechos Humanos de China, que se citaron como pruebas de esta divulgación de opiniones contrarias al Partido Comunista; ensayos de Liu Xianbin, que se consideraron ataques contra el sistema de

responsabilidad rural de China y la política de planificación demográfica; y cartas abiertas de Liu Sianbin a dirigentes chinos, que se consideraron ataques contra el sistema judicial socialista y la ayuda humanitaria. Al parecer, Liu Xianbin cumple su condena en la prisión N° 3 de Sichuan.

10. Li Bifeng, ciudadano chino nacido en 1965, que reside en la ciudad de Mianyang, Sichuan, es un activista en asuntos laborales y representante de una organización no oficial llamada Conciencia China y Acción Asistencial, que publica información acerca de las protestas de los trabajadores despedidos y de sus condiciones de vida. Es también un poeta y escritor que a mediados del decenio de 1980 publicaba una revista disidente y que fue encarcelado durante cinco años por su participación en el movimiento democrático de 1989.

11. Según se informa, en junio de 1997 Li Bifeng envió a la prensa internacional una carta abierta que contenía información acerca de las protestas de trabajadores de la ciudad de Mianyang, donde 100.000 trabajadores despedidos de tres fábricas textiles en quiebra se manifestaron contra la malversación hecha por los directores de la fábrica del dinero destinado a la asistencia a su desempleo. Al parecer, esa protesta culminó en una represión por parte del Ejército del Pueblo en la que más de un centenar de trabajadores resultaron heridos y más de 80 detenidos.

12. En 1997, Li Bifeng habría escrito al Comité Central del Partido Comunista Chino instándole a que "pusiera en libertad a todos los presos políticos... y pusiera fin al sistema de gobierno de un partido único". En 1998 habría publicado además una encuesta en la que se mostraba que el 98% de los trabajadores despedidos entrevistados consideraban que los despidos no se realizaban de forma equitativa y que el Gobierno tenía que reformar el sistema de seguridad social.

13. Según las noticias, el 8 de marzo de 1998, cuando iba a visitar a su hija de dos años que se hallaba en Mianyang, Li Bifeng fue detenido en un puesto de peaje por agentes de la Oficina de la Seguridad del Estado de la ciudad de Mianyang.

14. Al parecer, fue detenido formalmente el 6 de abril de 1998, y el 24 de agosto de 1998 fue acusado de fraude relacionado, según la información recibida, con la venta de una caja de seguridad del lugar donde trabajaba.

15. El 24 de agosto de 1998, tras un juicio que duró un día, Li Bifeng fue condenado por fraude a siete años de prisión en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 193 del Código Penal chino. Se afirma que ningún testigo declaró en contra suya, y que la única prueba fue una nota de reconocimiento de deuda que, al parecer, relacionaba a Li Bifeng con una transacción sospechosa. Según la información recibida, su abogado había recibido severas instrucciones para que no lo defendiera.

16. Se dice que Li Bifeng cumple su condena en la prisión de Chuandong, provincia de Sichuan, donde se halla recluso desde abril de 1998, y que antes estuvo recluso en el centro de detención de la ciudad de Jiangyou.

17. En su respuesta el Gobierno de China manifestó que había investigado detenidamente las cuestiones alegadas en la comunicación e informado al Grupo de Trabajo de que:

- a) Li Bifeng fue detenido y mantenido en prisión por las autoridades de seguridad pública de la ciudad de Beijing, con la aprobación de la Fiscalía del Pueblo de la ciudad de Beijing, bajo la sospecha de fraude. La detención fue comunicada a su familia según el procedimiento judicial establecido. El 28 de abril de 1998 el Tribunal del Pueblo de la ciudad de Mianyang lo condenó a siete años de prisión firme por el delito de fraude, y actualmente está cumpliendo esta condena en la prisión de Ya' an.
- b) Liu Xianbin fue condenado el 7 de agosto de 1999 por el Tribunal Popular de Segunda Instancia de la ciudad de Suining a 13 años de prisión firme, y despojado de sus derechos políticos durante 3 años por el delito de subversión contra la autoridad del Estado, y actualmente cumple condena en la prisión de Chuandong.

18. El Gobierno añadió que se procedió a la detención del Sr. Li y el Sr. Liu exclusivamente porque eran sospechosos de quebrantar la legislación china, que en la tramitación de ambos casos las autoridades de seguridad pública chinas se ajustaron también estrictamente al procedimiento jurídico y que los legítimos derechos de esas personas fueron plenamente protegidos y en ninguno de los dos casos puede hablarse de una detención arbitraria.

19. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la información facilitada por el Gobierno para que pudiera formular observaciones adicionales, como así lo ha hecho. La fuente declaró que en su respuesta el Gobierno no hizo una exposición de los hechos ni facilitó información adicional que sustentara su afirmación de que se habían cumplido las leyes y procedimientos chinos, y tampoco presentó ninguna documentación o información que justificara ese cumplimiento. La fuente concluyó que el Gobierno había detenido al Sr. Li y al Sr. Liu por haber manifestado pacíficamente sus derechos humanos y no les había proporcionado el amparo procesal garantizado por la legislación china y los tratados internacionales.

20. El Grupo de Trabajo estima, en consecuencia, que el Gobierno se ha limitado a afirmar que en ambos casos se aplicó correctamente la legislación china y se siguió escrupulosamente el procedimiento adecuado, y no ha proporcionado información alguna sobre la naturaleza de los cargos imputados al Sr. Li y al Sr. Liu; el Gobierno tampoco ha presentado ninguna prueba o argumento para refutar las detalladas alegaciones de la fuente de que la detención y condena de Li Bifeng y Liu Xianbin fueron consecuencia del ejercicio pacífico de actividades sindicales o políticas.

21. El Gobierno no impugna el hecho de que Li Bifeng y Liu Xianbin hayan sido encarcelados en el pasado, el primero durante cinco años y el segundo durante dos años, por su participación en el movimiento de 1989 en favor de la democracia, ni que el Sr. Liu sea el jefe del Partido Democrático de China, un partido político no reconocido, ni que el Sr. Li participe activamente en el Observador de los Derechos Humanos de China, organización sindical no oficial. El Gobierno se limita a señalar a la atención el hecho de que antes de su detención el Sr. Liu y el Sr. Li estaban desempleados.

22. El Gobierno no ha aducido argumentos convincentes para refutar las alegaciones de la fuente, que mantiene que Liu Xianbin fue condenado a 13 años de prisión por publicar artículos en los que criticaba al Gobierno y al Partido Comunista chino, y que Li Bifeng fue declarado



culpable de fraude, sin ninguna prueba y sin disponer de un juicio justo, por haber realizado una investigación acerca del despido de 20.000 trabajadores en la provincia de Sichuan, después de haber escrito una carta abierta a las autoridades y publicado información sobre los disturbios que, al parecer, tuvieron lugar en esa provincia.

23. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo sólo puede llegar a la conclusión de que el Sr. Li y el Sr. Liu fueron detenidos y privados de libertad por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizado en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En cuanto a las denuncias de violaciones del derecho a un juicio justo, el Grupo de Trabajo considera que no dispone de información suficiente para emitir una opinión al respecto.

24. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La detención de Li Bifeng y Liu Xianbin es arbitraria porque es contraria a lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

25. Después de emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de las personas anteriormente mencionadas de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y alienta al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 4 de septiembre de 2003

### **OPINIÓN N° 13/2003 (CHINA)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 2 de noviembre de 2001.*

*Relativa a:* Tenzin Choewang, Sey Khedup, Tserin Lhagon, Yeshe Tenzin, Thraba Yeshe, Ngawang Tsultrim, Nyima Dhakpa y Gyurmey.

**El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge satisfecho la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que le facilitó sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir

una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.

5. Según la fuente, el 19 de marzo de 2000, alrededor de las 2.00 horas, siete hombres enmascarados llegaron al monasterio de Sog Tsendhen y detuvieron al monje Tenzin Choewang, que se encargaba de su cuidado, y a otros cuatro monjes tibetanos. Los hombres registraron la habitación del Sr. Choewang, donde hallaron casetes del Dalai Lama. Se afirma que gracias a un vehículo de la policía que estaba estacionado fuera se pudo identificar a los enmascarados, que actuaban sin orden judicial.

6. Según la fuente, la forma sistemática en que se llevó a cabo la detención y el hecho de que los enmascarados supieran dónde se hallaba cada uno de los monjes indicaban claramente que las autoridades habían vigilado estrechamente los movimientos y actividades de los monjes, con la cooperación tácita de algunas de las personas que se hallaban dentro del monasterio de Sog Tsendhen. Se afirma que el monasterio es un "nido" de actividades políticas, razón por la cual se halla bajo estricta vigilancia; los monjes son vigilados estrechamente y su libertad de movimiento está restringida.

7. Según la información recibida, Tenzin Choewang de 64 años de edad, conserje del monasterio de Sog Tsendhen, Sey Khedup, de 27 años, y Yeshe Tenzin, de 36 años, monjes del monasterio, Thraba Yeshe, de 45 años, empleado en la central hidroeléctrica del condado de Sog y carpintero del monasterio, y Tserin Lhagon, de 41 años, granjero del distrito de Yakla, en la ciudad de Sog, fueron arrestados por agentes de la Oficina de Seguridad Pública de Nagchu y detenidos en la Oficina de Información de Lhasa de la TAR (Región Autónoma del Tíbet).

8. Se afirma que fueron condenados en diciembre de 2000 en virtud del Código Penal de China por las siguientes razones: el Sr. Choewang y el Sr. Yeshe a siete años de prisión por los delitos de apoyar "actividades separatistas" y por actividades "que ponen en peligro la seguridad nacional", en virtud del párrafo 103 del Código Penal de China, y por apoyar "las actividades separatistas de la banda del Dalai", respectivamente; el Sr. Lhagon y el Sr. Tenzin a 15 años de prisión por actividades "que ponen en peligro la seguridad nacional" y por apoyar las actividades separatistas de la banda del Dalai"; y el Sr. Khedup a cadena perpetua por actividades "que ponen en peligro la seguridad nacional" y por "apoyar las actividades separatistas de la banda del Dalai". Al parecer, todos ellos fueron trasladados a la prisión de Drapchi donde se hallan actualmente reclusos.

9. Ngawang Tsultrim, monje de 24 años de edad, del término municipal de Sagang, condado de Dyokhang, fue, al parecer, detenido en octubre de 1999 en Lhasa poco después de su regreso del monasterio de Drepung en la India por agentes de la Oficina de Seguridad Pública. Estuvo recluso en el Centro de detención de Gutsa y fue condenado a principios del año 2000 a tres años de prisión por "actividades separatistas" o por "menoscabar la unidad nacional", en virtud del Código Penal de China; al parecer, está encarcelado en la prisión de Drapchi.

10. Nyma Dhakpa, monje de 27 años de edad del monasterio de Tawu Nyitso, prefectura de Karze, provincia de Sichuan, fue, al parecer, detenido en mayo de 2000 en Lhasa por agentes de la Oficina de la Seguridad Pública y estuvo recluso en el Centro de detención de Tawu. Se afirma que recibió una fuerte paliza. Fue condenado el 5 de octubre de 2000 por el tribunal

regional a nueve años de prisión, acusado de propaganda e incitación contra las masas, y está recluido en el Centro de detención de Tawu.

11. Según la fuente, a finales de 1999, el Sr. Dhakpa había pegado carteles de propaganda independentista en las verjas de un jardín conmemorativo de la región de Tawu. Los carteles exhibían consignas como "Tíbet libre", "Los tibetanos no tienen libertad en el Tíbet" y "El Tíbet no es parte de China", y en la parte inferior figuraba su firma. Al día siguiente agentes del condado arrestaron a otro Nyima Dhakpa del monasterio de Sog Tsendhen. Ello dio tiempo al Sr. Dhakpa para huir hasta que fue finalmente detenido en mayo de 2000.

12. En su respuesta el Gobierno manifiesta que el Sr. Choewang, el Sr. Yeshi, el Sr. Lhagon y el Sr. Tenzin, tras crear un grupo separatista, el "Consejo de la Juventud de Xuecheng", pegaron carteles y distribuyeron octavillas de propaganda separatista y realizaron muchas actividades separatistas ilegales. En virtud del Código Penal los cuatro hombres fueron declarados culpables de fomentar el separatismo por el Tribunal Popular de Segunda Instancia del distrito de Nagchu el 10 de noviembre de 2000, y condenados a las siguientes penas: Tenzin Choewang, 3 años de prisión y 2 años de privación de los derechos políticos; Thraba Yeshi, 5 años de prisión y 3 años de privación de los derechos políticos; Tserin Lhagon, 15 años de prisión y 10 años de privación de los derechos políticos; y Yeshi Tenzin, 10 años de prisión y 5 años de privación de los derechos políticos. Los cuatro hombres cumplen actualmente sus condenas en la prisión de la Región Autónoma del Tíbet.

13. El Gobierno afirma, además, que Ngawang Tsultrim, varón de etnia tibetana nacido en 1975, fue detenido el 13 de octubre de 1999 por órganos de la seguridad pública de Lhasa por fomentar el separatismo; el 23 de noviembre de ese mismo año, la Fiscalía del Pueblo del municipio de Lhasa autorizó su detención. El 2 de abril de 2000 el Tribunal Popular de Segunda Instancia del municipio de Lhasa resolvió que su propaganda del separatismo en la Región Autónoma del Tíbet constituía un delito de separatismo y lo condenó a tres años de prisión y dos años de privación de sus derechos políticos. Actualmente cumple condena en la prisión de la Región Autónoma del Tíbet.

14. En cuanto a Nyima Dhakpa, el Gobierno afirma que entre 1998 y 2000 participó frecuentemente en la ciudad del condado de Dawn en actividades destinadas a incitar al separatismo y a socavar la unidad del Estado, que constituían violaciones graves del artículo 103 y de otras disposiciones pertinentes del Código Penal chino. En mayo de 2000 fue detenido por la Fiscalía de conformidad con la ley y con la aprobación de la Prefectura de Karze. El 20 de octubre el Tribunal Popular de Segunda Instancia de la Prefectura de Karze, de conformidad con la ley, condenó a Nyima Dhakpa a nueve años de prisión firme y a cuatro años de privación de sus derechos políticos. Actualmente está cumpliendo su condena. Los funcionarios encargados de su vigilancia actúan ajustándose estrictamente a lo dispuesto por la ley y nunca se le ha aplicado ningún castigo corporal.

15. El Gobierno explica que la Constitución china establece claramente que los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión, prensa, religión y otras libertades, de asociación, de reunión, de circulación y de manifestación, y que tienen derecho a criticar y a formular sugerencias acerca de cualquier órgano del Estado o de sus empleados. El Gobierno añade que, de conformidad con la ley, protege el ejercicio por los ciudadanos de esos derechos y libertades; por su parte, en uso de su derecho a la libertad de expresión los ciudadanos chinos no pueden

actuar en perjuicio de los intereses del Estado, de la sociedad o de la colectividad. Al proteger el disfrute por los ciudadanos de todas sus libertades legítimas, el Gobierno de China, actuando de conformidad con la ley, adopta medidas contra las actividades que quebrantan la ley o perjudican el interés legítimo del Estado, de la colectividad o de los ciudadanos. Ello es compatible con las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas anteriormente mencionadas han sido condenadas a prisión porque realizaban actividades que ponían en peligro la seguridad del Estado y la integridad territorial del país y violaban el Código Penal chino.

16. El Gobierno señala que cualquier país investigaría y castigaría, de conformidad con su legislación, esta clase de conducta. Al ordenar el arresto de esas personas y someterlas a juicio, sus legítimos derechos fueron plenamente protegidos: se obtuvo la aprobación del ministerio fiscal y las autoridades encargadas de la seguridad pública actuaron de conformidad con la ley al detenerlos; las sentencias dictadas por los tribunales se basaron en hechos claros, las pruebas eran abundantes y concluyentes, las condenas fueron justas, las sentencias fueron proporcionadas a los delitos y las actuaciones judiciales cumplieron las garantías procesales.

17. La fuente responde que todos los presos fueron detenidos por ejercer simplemente sus derechos fundamentales en virtud de las normas internacionales. Afirman que la respuesta del Gobierno demuestra que ninguno de los detenidos había cometido actos violentos y que en todos los casos fueron encarcelados por el ejercicio pacífico de su libertad de religión, asociación u opinión. El Gobierno afirma que "garantiza todas las libertades cívicas de conformidad con la ley", pero añade que todas esas garantías están sujetas al "interés legítimo del Estado". Según el Gobierno, "cualquier Estado castigaría" a las personas que actuaran de la misma forma que lo hicieron los mencionados presos.

18. La fuente afirma que esta interpretación que hace el Gobierno de las normas internacionales relativas a los derechos y responsabilidades es simplemente errónea. Los Estados democráticos no encarcelan a las personas durante 3 a 15 años simplemente porque sean miembros de una organización política, practiquen pacíficamente su religión o se manifiesten en contra de las políticas del gobierno.

19. El Gobierno no ha dado una respuesta en el caso de Sey Khedup y no impugna los hechos de que era un monje que fue detenido con el grupo el 19 de marzo de 2000 y en la actualidad cumple una condena de cadena perpetua por "poner en peligro la seguridad nacional" y "apoyar las actividades secesionistas de la banda del Dalai".

20. El Gobierno no ha facilitado información acerca de Gyurmey y ha declarado que, pese a las amplias investigaciones realizadas por las autoridades chinas, todavía no ha sido posible encontrar a esa persona, y ha pedido al Grupo que le facilite más detalles.

21. El Gobierno declara que Tenzin Choewang, Yeshe Tenzin, Sey Khedup, Thraba Yeshe y Tsering Lhagon estaban organizando un grupo juvenil. Pero no se ha impugnado que su objetivo era asociarse pacíficamente o expresar sus creencias pacíficamente sin incitar o recurrir a la violencia. Esas personas también estaban pegando carteles y repartiendo octavillas, ejerciendo su derecho a la libertad de opinión y expresión, que comprende la libertad de mantener opiniones sin injerencias y de pedir, recibir y divulgar información e ideas a través de cualquier medio. Sobre la base de esos actos fueron juzgados por poner en peligro la seguridad nacional y apoyar

las actividades separatistas, condenados a penas de prisión de 3 a 15 años (en el caso del Sr. Khedup incluso a cadena perpetua) y despojados de sus derechos políticos, si bien la respuesta del Gobierno no hace ninguna referencia concreta a los artículos del Código Penal que tratan de los atentados contra la seguridad del Estado de los cuales fueron acusados.

22. El Grupo de Trabajo, en el informe de su visita a China (E/CN.4/1998/44/Add.2, párr. 43) dice que "salvo que se limiten ciertos delitos a materias claramente especificadas y en circunstancias claramente definidas, existe el grave peligro de aplicación indebida". Al parecer, eso es lo que ha sucedido en el presente caso, tanto más cuanto que en su respuesta el Gobierno no especifica la naturaleza de las actividades de las que esos hombres fueron acusados, excepto que fundaron una asociación pacífica y distribuyeron octavillas, y no menciona ninguna prueba en apoyo de las acusaciones ni de que utilizaran la violencia en sus actividades.

23. En cuanto a Ngawang Tsultrim y Nyima Dhakpa, aun cuando fueron acusados también de propaganda separatista, aunque en circunstancias diferentes, los cargos se refieren también al ejercicio de la libertad de expresión, que es un derecho garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se ha impugnado el hecho de que sus actividades eran pacíficas.

24. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

El Grupo de trabajo declara que la privación de libertad de Tenzin Choewang, Sey Khedup, Tserin Lhagon, Yeshe Tenzin, Thraba Yeshe, Ngawang Tsultrim y Nyima Dhakpa es arbitraria porque es contraria a lo dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

Habida cuenta de la situación relativa al caso de Gyurmey y, a reserva de que se reciban información y detalles al respecto en fecha posterior, el Grupo de Trabajo considera que no puede prejuzgar el carácter arbitrario de su detención y decide, de conformidad con el apartado c) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, mantener el caso pendiente hasta que se reciba esa información.

25. De acuerdo con la opinión expresada, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y finalice lo antes posible el proceso de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adoptada el 4 de septiembre de 2003

### OPINIÓN N° 14/2003 (MALDIVAS)

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 3 de febrero de 2003.

*Relativa a:* Mohammed Zaki, Ibrahim Moosa Luthfee, Ahmed Ibrahim Didi y Fathimath Nisreen.

#### **El Estado no ha ratificado ni firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha formulado sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias de los casos considerados, teniendo en cuenta las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas.
5. La comunicación se refiere a Mohammed Zaki, residente en Kuala Lumpur (Malasia), propietario de la empresa "Nazaki", que se dedica al transporte y comercio, a la manufactura del aluminio, el transporte marítimo y la construcción; Ibrahim Moosa Luthfee, residente en Malé, empresario que dirige una empresa de informática llamada "Viuga" que tiene oficinas en Malé; Ahmed Ibrahim Didi, también empresario, y Fathimath Nisreen, secretaria personal de Ibrahim Moosa Luthfee.
6. Según la información presentada al Grupo de Trabajo, estas cuatro personas fueron detenidas por su supuesta participación en la redacción y su contribución a un boletín de Internet denominado "*Sandhaanu*" que contiene artículos considerados como críticos para el Gobierno de Maldivas. Mohammed Zaki, que habitualmente reside en Kuala Lumpur, estaba en Malé por motivo de negocios. Fue detenido el 30 de enero de 2002. Ibrahim Moosa Luthfee fue detenido el 31 de enero de 2002 en su residencia de Malé. Ambos fueron detenidos sin orden judicial por la policía del Servicio de Seguridad Nacional.
7. Ahmed Ibrahim Didi fue detenido el 31 de enero de 2002 en el aeropuerto internacional de Bandaranaike de Colombo, por agentes de Interpol de Sri Lanka y enviado a Malé. Estaba a punto de subir a un avión con destino a Bangkok donde iba a someterse a un tratamiento médico por problemas cardíacos. Fathimath Nisreen fue detenida sin orden judicial en las oficinas de "Viuga", en Malé, el 1° de febrero de 2002, también por la policía del Servicio de Seguridad Nacional.
8. Los cuatro fueron llevados a la sede de la policía en Malé donde permanecieron recluidos en régimen de aislamiento durante dos semanas. Posteriormente fueron trasladados al centro de detención de Dhoonidhoo, situado en una pequeña isla a unos cinco kilómetros de Malé. No se

les permitió recibir visitas de familiares ni amigos. El 2 de mayo de 2002, tras varios recursos, Mohammed Zaki fue devuelto al Cuartel General de la Policía en Malé donde se le permitió recibir visitas de algunos familiares durante unas horas.

9. El 29 de mayo de 2002, por primera vez, los detenidos comparecieron ante un tribunal penal en Malé. Al parecer fueron acusados de cometer actos hostiles al Gobierno en virtud del artículo 29 del Código Penal de Maldivas, y de difamación, con arreglo al artículo 163 del Código Penal. El 26 de junio de 2002, se celebró una segunda audiencia.

10. El 26 de junio de 2002, Ahmed Ibrahim Didi y Fathimath Nisreen fueron trasladados a una isla utilizada como prisión, llamada Mafushi, situada a 18 millas de Malé. El 27 de junio, Mohammed Zaki e Ibrahim Moosa Luthfee fueron trasladados a la prisión de Mafushi. Se informó de que sus condiciones de encarcelamiento en ese centro constituían tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Fueron mantenidos en régimen de aislamiento, en celdas de 1,20 m por 1,20 m y tenían que dormir en el suelo de cemento sobre una plancha de contrachapado. No se les permitió recibir visitas de familiares.

11. Se denunció que en ningún momento se permitió que los detenidos estuvieran representados por un abogado. El 7 de julio de 2002, los cuatro detenidos comparecieron nuevamente ante el tribunal en Malé para ser condenados. Mohammed Zaki, Ibrahim Luthfee y Ahmad Didi fueron condenados a penas de cadena perpetua que, en la República de Maldivas, es de 25 años de reclusión. Se les presentó un documento donde figuraban los siguientes cargos:

- a) Insultos al Presidente y a su Gobierno;
- b) Intento de derrocar al Gobierno haciendo llamamientos al pueblo para luchar;
- c) Incitación al odio del público hacia el Gobierno por medio de un boletín informativo llamado "*Sandhaanu*";
- d) Difusión de noticias falsas; y
- e) Distribución del boletín "*Sandhaanu*" por correo electrónico.

12. Fathimath Nisreen fue condenada a diez años de prisión. Se le presentó un documento donde figuraban los siguientes cargos:

- a) Redacción de información falsa en artículos de "*Sandhaanu*";
- b) Expresión de su descontento con las políticas del Gobierno;
- c) Intento de derrocar al Gobierno haciendo llamamientos al pueblo para luchar; y
- d) Apoyo a los autores de "*Sandhaanu*".

13. Tras la condena, los cuatro detenidos fueron devueltos a la prisión de Mafushi donde se encuentran actualmente cumpliendo las condenas.

14. Se dijo que en los casos en que el Gobierno considera que los cargos son de índole política, puede no permitirse a los reclusos presentar recurso ante el Tribunal Superior. No está claro si los reclusos tendrán derecho a recurrir las sentencias. Los familiares de los detenidos han enviado numerosas cartas con recursos al Presidente de la República y al Ministerio de Defensa, exponiendo sus preocupaciones. Al 25 de octubre de 2002 (fecha de la presentación de la comunicación) no habían recibido respuesta alguna.

15. Se denunció además que, aunque "*Sandhaanu*" utiliza términos muy críticos, en realidad no preconiza una oposición política violenta al Gobierno. Incluso si los cuatro detenidos hubiesen participado en la publicación y distribución de la revista, esa participación no supondría más que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

16. La fuente indica además que, en enero de 2002, la policía malasia llevó a cabo un registro del domicilio de Mohammed Zaki en Kuala Lumpur y se llevó su computadora.

17. El 10 de julio de 2002, las autoridades condujeron a Mohammed Zaki a Malé para un nuevo interrogatorio a cargo de la policía sobre sus actividades comerciales; en particular le pidieron información sobre un barco llamado Mazeena del que en 1995 era propietario. Le pidieron información sobre el capitán del barco y sobre un cargamento de cemento para Viet Nam que se había llevado a cabo en esa época aproximadamente. Según las fuentes, este nuevo interrogatorio parece haber sido realizado con fines de acoso e intimidación, puesto que ya había sido condenado a cadena perpetua.

18. En su respuesta, el Gobierno negó, en términos generales, todas las acusaciones formuladas por la fuente. Señaló que el procedimiento llevado a cabo contra las cuatro personas era conforme a la Constitución y a la legislación de la República de Maldivas.

19. En sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno, la fuente, por un lado, reiteró sus anteriores denuncias. Por otro lado, admitió que había habido llamamientos en "*Sandhaanu*" a una *jihad* contra el Gobierno. Según la fuente, sin embargo, la utilización de la palabra *jihad* no implica necesariamente un llamamiento a la violencia. Aunque hay distintas interpretaciones sobre el significado del término *jihad* (que van desde la oposición no violenta hasta levantamientos violentos), no ha habido actividad política violenta en las Maldivas a causa de ese llamamiento de la revista.

20. Por lo que respecta a las denuncias de la fuente de que durante el proceso penal contra las cuatro personas no se garantizó su derecho fundamental a un juicio imparcial, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no impugna la acusación de la fuente de que Mohammed Zaki e Ibrahim Moosa Luthfee fueron detenidos sin orden judicial de detención, de que las cuatro personas estuvieron detenidas durante unos cuatro meses sin que se formularan cargos ni fueran sometidos a juicio, de que a ninguno de ellos se le permitió estar representado por un abogado, y de que no pudieron recurrir la condena ni el fallo.

21. El Grupo de Trabajo no considera convincentes las denuncias formuladas por la fuente de que las cuatro personas fueron enjuiciadas exclusivamente por expresar pacíficamente sus convicciones políticas. La información facilitada por la fuente, en particular la mención de llamamientos a una *jihad*, confirman la hipótesis de que algunos artículos de *Sandhaanu* u otras publicaciones incitaban a los lectores a realizar actos violentos.



22. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Mohammed Zaki, Ibrahim Moosa Luthfee, Ahmed Ibrahim Didi y Fathimath Nisreen es arbitraria, ya que contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

23. Después de emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y alienta al Gobierno a firmar y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 4 de septiembre de 2003

### **OPINIÓN N° 15/2003 (TÚNEZ)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de diciembre de 2002.*

*Relativa a:* Sr. Yahyaoui.

#### **El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha formulado sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso considerado.
5. La comunicación que se menciona a continuación fue transmitida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en los términos siguientes:
6. El Sr. Zouhair Yahyaoui, nacido el 8 de diciembre de 1967, de nacionalidad tunecina, fundador y administrador (*webmaster*) del sitio Internet TUNeZINE, fue detenido el 4 de junio de 2002 hacia las 19.00 horas, en Ben-Arous, por seis agentes vestidos de civil de la policía judicial en el cibercafé donde trabajaba y administraba su sitio Internet. A continuación fue conducido a su domicilio, a unos treinta metros del cibercafé, donde los policías procedieron a un registro y se incautaron del equipo informático.
7. El Sr. Yahyaoui fue condenado el 20 de junio de 2002, por la Cuarta Sala de lo Correccional del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, a dos años y cuatro meses de prisión en virtud del artículo 306 del Código Penal (propagación de noticias falsas) y del artículo 84 del

Código de Telecomunicaciones (uso no autorizado de líneas telefónicas). Esta sentencia fue confirmada el 10 de julio de 2002 por la 14ª Sala del Tribunal de Apelación de Túnez (dos años de prisión).

8. Al principio, el Sr. Yahyaoui estuvo recluido en una celda de detención en los sótanos del Ministerio del Interior, más tarde en el Centro de detención de El Gourjani, posteriormente en la prisión civil del bulevar "9 de abril", en Túnez, y por último en la prisión de Borj El Amri, donde se encuentra actualmente.

9. La fuente considera que la detención y encarcelamiento del Sr. Yahyaoui son arbitrarios porque son resultado del ejercicio de la libertad de expresión y de opiniones políticas en su calidad de redactor y *webmaster* del sitio Internet TUNeZINE que difunde información sobre la situación de los derechos humanos en Túnez y dispone de dos foros de debate libre. Este sitio Internet ha sido censurado en Túnez.

10. La fuente indica asimismo que el Sr. Yahyaoui fue condenado en primera instancia por un tribunal que no era competente, el de Túnez, y no el de Ben-Arous, a una pena privativa de libertad, sin que ningún abogado, de los 50 aproximadamente que se presentaron para su defensa, pudiera presentar alegaciones o conclusiones por escrito. Se prohibió a los abogados el derecho de visita, pese a la petición interpuesta ante el Tribunal de Apelación, petición de la que se hizo caso omiso. Además, nadie pudo asistir al proceso, ni siquiera la familia del Sr. Yahyaoui. Los recursos de casación presentados inmediatamente después de la última sentencia tampoco recibieron respuesta. Según la fuente, el conjunto de las violaciones de los derechos de la defensa constituye un atentado muy grave al principio de equidad.

11. La fuente informa asimismo de las torturas a las que fue sometido el Sr. Yahyaoui tras su detención, durante el período de encarcelamiento en los locales del Ministerio del Interior, del 4 al 6 de junio de 2002, y el 8 de septiembre de 2002 cuando, mientras le llevaban a la enfermería por un fuerte dolor en los riñones, dos guardias le propinaron una fuerte paliza. El Sr. Yahyaoui formuló una denuncia que no se pudo registrar hasta el 17 de septiembre de 2002 y a la que no se respondió.

12. La fuente indica asimismo que el tío del Sr. Yahyaoui, el juez Mokhtar Yahyaoui, fue dado de baja por el Consejo disciplinario de la magistratura en diciembre de 2001 por haber denunciado la falta de independencia de la justicia tunecina y hace varios meses que es objeto de medidas de intimidación. La fuente teme que la detención y condena del Sr. Yahyaoui intensifiquen el acoso contra el tío y su familia.

13. En su respuesta, el Gobierno tunecino indica que los propietarios de un "*publinet*" (cibercafé) denunciaron un robo ante la policía judicial, afirmando que las líneas telefónicas de su oficina fueron utilizadas sin su conocimiento por su empleado Zouhair Yahyaoui, lo que les ocasionó gastos adicionales que tuvieron repercusiones inusuales y considerables en su presupuesto. Además, las investigaciones realizadas confirmaron que el empleado era el autor de la utilización fraudulenta de las líneas telefónicas especiales. La investigación permitió establecer que el interesado utilizó la red Internet de forma fraudulenta con el fin de crear un sitio para difundir pseudoinformaciones graves que constituyen un delito de propagación de noticias falsas de tal índole que pueden alterar el orden público.

14. Entre estas noticias falsas, cabe señalar una información sobre la incursión de un comando procedente del extranjero para atacar un lugar estratégico del país y que, al parecer, había provocado la muerte de siete policías; noticias sobre atentados contra personas y bienes en determinados lugares turísticos, en especial el anuncio de un atentado con bomba en un hotel de Susa; y la difusión de llamamientos al boicoteo del turismo y los productos tunecinos.

15. El fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, que se ocupa del asunto, dictó una orden de detención contra el acusado. Éste compareció el 8 de junio de 2002 ante el Tribunal Correccional de Túnez por dos casos distintos, en virtud de los artículos 84 del Código de Telecomunicaciones y 264 del Código Penal, en el primer caso, y de los artículos 49 del Código de Prensa y 306 *bis* del Código Penal, en el segundo. El tribunal condenó al acusado en el primer caso (robo) a un año y cuatro meses de prisión firme y en el segundo (atentado al orden público) a un año de prisión. El inculcado, así como el ministerio público, interpusieron un recurso de apelación a raíz de lo cual, el 10 de julio de 2002, el tribunal redujo la pena pronunciada en el primer caso a un año de prisión y confirmó la sentencia en el segundo caso.

16. El Gobierno también señala que la familia del acusado fue inmediatamente informada de la detención y del lugar donde estaba detenido, con arreglo al artículo 13 del Código de Procedimiento Penal, y se autorizó a los abogados a visitarlo, de conformidad con la ley.

17. En conclusión, el Gobierno estima que la detención del Sr. Zouhair Yahyaoui no tiene carácter arbitrario ya que ha sido procesado por participar en actos delictivos y no por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que está garantizado por la legislación tunecina, y que su condena es el resultado de una decisión judicial de un tribunal competente al término de un proceso imparcial en el que se han respetado todas las garantías procesales.

18. En su comentario sobre la respuesta del Gobierno, la fuente indicó que la denuncia de robo presentada por los propietarios de un "*publinet*" que menciona el Gobierno no figura en ningún documento del caso, y que los dos propietarios del local del cibercafé donde se produjo la detención, el 4 de junio de 2002, fueron a su vez detenidos y torturados en la sede del Ministerio del Interior. Añade que las dos actas (Nos. 648 y 649) en que se basan los dos casos por los que fue condenado Yahyaoui mencionan claramente que el inicio del proceso se produjo a raíz de "la información sobre las conexiones de un desconocido, con el pseudónimo de Ettounsi, que administra su sitio para la difusión de información [...] que ha podido ser localizado y detenido y que ha resultado ser el llamado Zouhair Yahyaoui [...]".

19. Por lo que respecta a la difusión de noticias falsas, la fuente refuta las acusaciones formuladas por el Gobierno y afirma que no se hizo mención alguna de esos hechos en las actas del proceso, y añade que el llamamiento al boicoteo no fue difundido en el sitio, sino que procede de jóvenes tunecinos que participaron en un debate en el foro del sitio. La fuente vuelve a insistir en sus comentarios sobre las condiciones de detención, los actos de tortura, el incumplimiento de los plazos legales de prisión preventiva, las malas condiciones de detención y la violación de las normas de un proceso imparcial que motivaron que Zouhair Yahyaoui recurriese en tres ocasiones a la huelga de hambre para protestar contra las deplorables condiciones de detención.

20. Se desprende de lo que antecede que las denuncias de la fuente y las formuladas por el Gobierno son totalmente contradictorias. Para la fuente, la condena de Zouhair Yahyaoui constituye una violación de las normas de un proceso imparcial y tenía por fin sancionar la libertad de expresión que ejerció en un sitio Internet que operaba de forma clandestina. Para el Gobierno, la investigación que dio lugar a la condena de Zouhair Yahyaoui tuvo su origen en una denuncia de robo de líneas telefónicas que sus empleadores supuestamente habían presentado contra él, y esta investigación reveló que el interesado utilizaba un sitio Internet donde se propagaban noticias falsas cuya índole puede alterar el orden público. La fuente afirma que nunca hubo tal denuncia y que los presuntos denunciadores fueron a su vez detenidos y torturados y que su local sigue cerrado hasta la fecha.

21. La respuesta del Gobierno en este caso no es convincente. Por un lado, afirma que la investigación se inició a raíz de una denuncia por una trivial historia de robo de líneas telefónicas y, por otro, sostiene que Zouhair Yahyaoui tiene un sitio Internet que propaga noticias falsas, que anuncia atentados con bombas, la incursión de comandos procedentes del extranjero y otros hechos que podrían haber provocado una falsa alarma, pánico y alteración grave del orden público. El Grupo de Trabajo ha recibido comunicados de prensa y llamamientos urgentes de varias organizaciones no gubernamentales que confirman las denuncias de la fuente y demuestran que el sitio TUNeZINE difunde información sobre la situación de las libertades fundamentales en Túnez y dispone de dos foros de debate libre. Por otro lado, el Centro PEN American otorgó a Zouhair Yahyaoui el premio PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write. También se afirma que Zouhair Yahyaoui fue torturado para que revelase la contraseña del sitio TUNeZINE, que este sitio desapareció después de su detención y que desde entonces está censurado en Túnez. En la respuesta del Gobierno no se hizo mención alguna de estas denuncias.

22. En cuanto al ejercicio de la libertad de expresión en Internet, el Grupo de Trabajo reafirma que el derecho a la libertad de opinión y expresión que garantizan respectivamente los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye la libertad de difundir ideas de toda índole, por cualquier procedimiento y por todos los medios, salvo que al ejercer ese derecho, la o las personas en cuestión hayan recurrido al delito, el odio racial, hayan hecho uso de la violencia o hayan puesto en peligro, violando la ley, la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, o la salud o la moral públicas, así como los derechos o la reputación de otros, lo que no parece ser el caso en el presente asunto.

23. El Grupo de Trabajo señala, asimismo, por lo que respecta a la violación del derecho a un proceso imparcial, que mientras la fuente afirma que nadie pudo asistir al proceso y que los abogados de Zouhair Yahyaoui no fueron autorizados a verlo y no pudieron presentar alegaciones ni conclusiones ni ante el tribunal que lo condenó, ni ante la jurisdicción de apelación, ni ante el Tribunal de Casación, el Gobierno se ha limitado a informar del desarrollo del procedimiento y a sostener que la condena es el resultado de una decisión judicial de un tribunal competente al término de un proceso imparcial donde se respetaron todas las garantías procesales, sin presentar argumentos que invaliden las denuncias de la fuente.

24. El Grupo de Trabajo considera que la publicidad del proceso en el caso presente y el derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarios para la preparación de su defensa y de comunicarse con el letrado de su elección son garantías fundamentales cuya violación reviste

tal gravedad que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario por cuanto contraviene las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que Zouhair Yahyaoui está en realidad detenido por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y de opinión, lo que constituye una violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que Túnez es Parte.

26. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Zouhair Yahyaoui es arbitraria, ya que contraviene las disposiciones del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Túnez es Parte, y corresponde a las categorías II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

27. Después de emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 5 de septiembre de 2003

### **OPINIÓN N° 16/2003 (CUBA)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de julio de 2002.*

*Relativa a:* Léster Téllez Castro, Carlos Brizuela Yera, Carlos Alberto Domínguez y Bernardo Arévalo Padrón.

#### **El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su apreciación al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha formulado sus comentarios y observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias de los casos considerados, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas.

5. Los casos que se mencionan a continuación fueron denunciados al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria como sigue:

- a) Léster Téllez Castro, periodista, director de la Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA), fue arrestado el 4 de marzo de 2002 cuando se dirigía a visitar en Ciego de Ávila al Sr. Jesús Álvarez Castillo, corresponsal de la Agencia Cuba Press. El arresto se produjo en forma violenta y los agentes de las fuerzas del orden no mostraron orden de arresto alguna. El 19 de abril fue trasladado a la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila. No se han formulado cargos en su contra. Sin embargo, ha sido extraoficialmente informado que será acusado de "perturbación del orden en una institución médica", de "negarse a obedecer" y de "ultraje".
- b) Carlos Brizuela Yera, periodista, colaborador del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, fue detenido en las mismas condiciones y circunstancias que el Sr. Téllez Castro. El 11 de marzo de 2002 fue trasladado a un centro de detención de la provincia de Holguín. Tampoco se han formulado cargos en su contra, aunque se le ha informado extraoficialmente que va a ser acusado de los mismos delitos señalados en el párrafo anterior.
- c) Carlos Alberto Domínguez, periodista, colaborador de la agencia Cuba Verdad, Director del Instituto del Derecho y miembro de la organización autodenominada Partido Democrático del 30 de Noviembre, fue arrestado el 23 de febrero de 2002 en la ciudad de La Habana por cuatro agentes de Seguridad del Estado. El 29 de marzo de 2002 fue trasladado a la cárcel de Valle Grande en La Habana. Se le acusa de haber participado en la organización de manifestaciones políticas que iban a tener lugar el 24 de febrero de 2002 para conmemorar la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, de Miami, Florida. Formalmente, se han formulado cargos en su contra por los delitos de "perturbación del orden público" y de "negarse a obedecer". Se afirma que se le impide reunirse con su abogado y que recientemente se ha reducido la duración de la visita de sus familiares. Se afirma también que su salud se ha degradado sensiblemente.
- d) Bernardo Arévalo Padrón, periodista, fundador de la agencia de prensa Línea Sur, fue arrestado en 1997 y sentenciado a seis años de cárcel en noviembre de dicho año por ultraje al Presidente y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Gobierno. En octubre de 2000 adquirió el derecho de solicitar la libertad condicional, en razón de haber cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, se rechazó su petición.

6. La fuente considera que estas personas fueron arrestadas y se encuentran en detención por razones fundamentalmente políticas; por el sólo hecho de haber ejercido en forma pacífica su derecho a la libertad de expresión reconocido por la Constitución de la República de Cuba, y por haber expresado sus discrepancias ideológicas.

7. El Gobierno en su repuesta sostiene que:

- a) El Sr. Téllez Castro se presentó en el hospital donde se estaba examinando al Sr. Álvarez Castillo, junto a otras personas, provocando una grave alteración del orden público que paralizó los servicios públicos del hospital por más de una hora.

Las personas que esperaban ser atendidas en el hospital reaccionaron espontáneamente frente a las ofensivas acciones del Sr. Téllez Castro y de quienes le acompañaban, defendiendo su derecho legítimo a acceder a los servicios médicos que requerían con mayor o menor urgencia. A partir de la situación de desorden y alteración de la tranquilidad ciudadana creada como consecuencia de las acciones del Sr. Téllez y de sus acompañantes, se hizo necesaria la intervención de agentes de la policía para restablecer los servicios médicos y evitar agresiones físicas.

Léster Téllez Castro es un elemento antisocial, impulsivo, irrespetuoso, provocativo en su actitud hacia las autoridades. Ha estado involucrado en varios intentos de salida ilegal del país, guardó prisión por hurto en 1992; fue procesado por robo con fuerza en 1993 y por contravención por hurto en 1993.

- b) Carlos Brizuela Yera cumplió cuatro años de privación de libertad, de 1994 a 1998, por intentar contra la vida de un oficial de policía. Léster Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera se encuentran en prisión preventiva por los delitos de desorden público, resistencia y desacato, en sus figuras agravadas. Estos delitos aparecen debidamente tipificados en el Código Penal cubano y el enjuiciamiento se llevará a cabo con todas las garantías del debido proceso, como corresponde al estado de derecho.
- c) Carlos Alberto Domínguez realizó trámites migratorios en 1994 para viajar a los Estados Unidos de América, por razones de reunificación familiar. Dicha posibilidad fue negada por la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. El Sr. Domínguez ha sido responsable de varios hechos constitutivos de delitos en el ordenamiento penal vigente. El 23 de febrero del 2002, y tomando en cuenta su premeditada reincidencia, fue detenido. Se encuentra en el establecimiento penitenciario de "Valle Grande", en la ciudad de La Habana. El Sr. Domínguez no es periodista; goza de una licencia de trabajador por cuenta propia como relojero. No existe en Cuba ninguna agencia de prensa con el nombre de Cuba-Verdad. Su detención no estuvo asociada con el ejercicio de la libertad de religión o la de expresión y opinión. El Sr. Domínguez actuó con el claro y premeditado objetivo de violentar el orden público e interrumpir el normal desarrollo de actividades de interés social.
- d) El Sr. Arévalo Padrón se encuentra cumpliendo una sanción de privación de libertad de seis años por delito de desacato, previsto y sancionado en la ley penal vigente. Durante todas las fases del procedimiento penal, el Sr. Arévalo Padrón contó con las garantías necesarias en respeto al principio jurisdiccional del debido proceso. El Sr. Arévalo Padrón no es periodista, ni dirige agencia de prensa alguna. El Sr. Arévalo Padrón ha organizado y participado en acciones con el claro objetivo de subvertir el orden constitucional decidido libre y soberanamente por el pueblo cubano y sus actos, además de constituir claras violaciones de la legalidad, han planteado un claro atentado contra la vida y la seguridad de otros ciudadanos. Junto a otros ciudadanos, intentó fundar una célula clandestina para ejecutar acciones de carácter terrorista dentro del territorio nacional, bajo el estímulo y financiamiento de la organización terrorista autotitulada "Cuba Independiente y Democrática", radicada en los Estados Unidos de América. Le fue concedido el cambio a régimen de mínima severidad, como paso previo al otorgamiento de la libertad condicional.

Sin embargo, aprovechando las facilidades que le brindaba su estancia en un campamento abierto, violó en reiteradas ocasiones el reglamento disciplinario, por lo que este beneficio le fue revocado en junio de 2002.

8. La fuente ha respondido sobre estos casos que Léster Téllez Castro se dedica al periodismo y a la defensa de los derechos humanos desde hace dos años y medio. Reconoce que entonces salió de la cárcel, tras una condena de seis años, por robo con fuerza, pero argumenta que en el momento en que tuvieron lugar los hechos era un adolescente frágil, mal influenciado y que, según sus familiares y amigos, ha llevado una conducta ejemplar desde que terminó la condena. Agrega que las autoridades cubanas no cesan de recordar ahora esos antecedentes, para desacreditar su actuación e intentar justificar su encarcelamiento actual ante la comunidad internacional. La fuente ha admitido que Carlos Brizuela Yera, como su amigo Téllez, tiene también antecedentes judiciales. Ya había sido detenido por enarbolar, en una manifestación callejera, un cartel proclamando "Abajo Fidel", aunque el Gobierno le ha acusado de atentar contra la vida de un policía en la condena que ya ha cumplido de 1994 a 1998. La fuente afirma que en esta ocasión ambos fueron detenidos con otros ocho activistas en una manifestación cuando fueron a visitar al Sr. Álvarez Castillo, hospitalizado luego de ser agredido por policías.

9. Sobre Carlos Alberto Domínguez, la fuente sostiene que su militancia política ya le valió múltiples detenciones y una prohibición de abandonar el país, a pesar de que es titular, lo mismo que su mujer y sus tres hijos, de un visado norteamericano, desde junio de 2000.

10. En cuanto a Bernardo Arévalo Padrón, la fuente afirma que fue condenado a seis años de cárcel principalmente por haber calificado de "mentirosas" a autoridades cubanas, al no respetar la Declaración Final de la Cumbre Iberoamericana.

11. El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las consideraciones tanto del Gobierno como de la fuente sobre estos casos, considera que en los casos de Léster Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera, tanto el Gobierno como la fuente concuerdan en que su detención se produce luego de una manifestación de protesta frente a un hospital, en la cual otras personas fueron también detenidas. El Gobierno, salvo por el hecho de señalar que se interrumpieron por una hora los servicios hospitalarios debido a la manifestación, no ha rebatido convincentemente el hecho de que ésta ha sido hecha de forma pacífica por quejarse de la situación de una persona golpeada por la policía. El ejercicio de los derechos de opinión y manifestación está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sobre los antecedentes judiciales de estas dos personas señalados por el Gobierno y reconocidos por la fuente, el Grupo de Trabajo considera que lo que se ha presentado a consideración del Grupo es la situación actual de detención de estas personas y no su situación judicial anterior.

12. En el caso de Carlos Alberto Domínguez, no ha sido objetado el hecho de que fue detenido en base a la organización de manifestaciones políticas, en las cuales no se alega uso de la violencia. No se ha especificado por parte del Gobierno cuáles serían los cargos bajo los cuales se ha violentado el orden público o interrumpido actividades de interés social, y en todo caso, es aparente que la organización de estas manifestaciones se ha producido para conmemorar unos hechos y expresar así una opinión política diferente a la sustentada por el Gobierno, un derecho que está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



13. En el caso de Bernardo Arévalo Padrón, se le ha detenido en virtud de los cargos de desacato, por haber criticado públicamente a las autoridades máximas del país. El Gobierno le acusa de que con sus acciones ha atentado contra la vida y seguridad de los ciudadanos, además de fundar una organización para ejecutar acciones terroristas. Sin embargo, no se especifica cómo se han producido estos hechos, y no se objeta el hecho de que la crítica pública a las autoridades le haya valido seis años de cárcel. El Grupo de Trabajo sostiene en relación al ejercicio de la libertad de expresión que ésta no debe admitir mayores restricciones, y que en todo caso éstas restricciones deben reunir los requisitos de legalidad y legitimidad y de ser necesarias para una sociedad democrática. Tales restricciones se aplicarían al recurso a la violencia, a la incitación al odio racial o religioso, a la incitación a cometer crímenes. En este caso no se producen este tipo de situaciones, ni en las acciones ni en las críticas públicas del Sr. Arévalo a las autoridades. El Grupo de Trabajo considera en consecuencia que ha sido detenido meramente por haber hecho uso del ejercicio pacífico de su libertad de opinión.

14. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Léster Téllez Castro, Carlos Brizuela Yera, Carlos Alberto Domínguez y Bernardo Arévalo Padrón es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 9, 10, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de estas cuatro personas, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que tome las iniciativas adecuadas con vistas a considerar ser Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adoptada el 5 de septiembre de 2003

### **OPINIÓN N° 17/2003 (CUBA)**

*Comunicación* dirigida al Gobierno el 6 de febrero de 2003.

*Relativa a:* Leonardo Miguel Bruzón Ávila, Juan Carlos González Leyva y Oscar Elías Biscet González.

#### **El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su apreciación al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)

4. Habida cuenta de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha formulado sus comentarios y observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias de los casos considerados, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas.
5. Según las informaciones recibidas por el Grupo de Trabajo, Leonardo Miguel Bruzón Ávila, librero independiente, presidente de la organización denominada "Movimiento 24 de Febrero" fue arrestado el 22 de febrero de 2002 por miembros de la policía, mientras se encontraba organizando una manifestación pacífica para conmemorar el 24 de febrero de 1895, fecha de inicio de la guerra de independencia, y el 24 de febrero de 1996, fecha en la cual dos avionetas de la organización denominada "Hermanos al Rescate" fueron derribadas. Desde entonces se encuentra detenido en la prisión de Quivicán en la provincia de La Habana. Se informa además que no ha sido enjuiciado ni se han formulado cargos en su contra.
6. Juan Carlos González Leyva, de 37 años de edad, residente en Ciego de Ávila, casado con Maritza Calderín Columbie, presidente de la organización denominada Fundación Cubana por los Derechos Humanos y miembro de la denominada Organización de Abogados Independientes Corriente Agramontista, invidente, fue arrestado el 4 de marzo de 2002 cuando participaba en una demostración pacífica en las afueras del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila, protestando por el arresto e ingreso en el hospital del periodista Jesús Álvarez Castillo. Durante su arresto habría sido golpeado en la cabeza. Se alega que no se le estaría brindando la atención médica necesaria ni los cuidados que requiere su ceguera. En algunas ocasiones se le habría impedido utilizar sus gafas de invidente, su bastón, y una *Biblia* Braille. El Sr. González Leyva se habría quejado también de problemas digestivos que atribuye a la introducción de sustancias extrañas en sus alimentos. La fuente informa además que la esposa de esta persona, su padre y hermanos habrían sufrido una serie de actos de intimidación y represalia, incluyendo arrestos de corta duración.
7. Oscar Elías Biscet González, fundador de la agrupación denominada "Amigos de los Derechos Humanos", fue arrestado, conjuntamente con otras 16 personas, el 6 de diciembre de 2002, cuando acudía a participar en una reunión de su agrupación en el barrio Lawton de La Habana. Durante su arresto fue golpeado por la policía. La fuente señala que el 6 de noviembre de 2002, esta persona había participado en una conferencia de prensa en La Habana sobre las condiciones de los prisioneros y las prisiones en Cuba. El Sr. Biscet González estuvo anteriormente detenido en la prisión de Holguín donde pasó tres años y fue liberado el 31 de octubre de 2002.
8. La fuente considera que estas personas han sido detenidas solamente por el ejercicio de su derecho a las libertades de asociación y expresión y por manifestar, de manera pacífica, opiniones políticas contrarias a las de las autoridades.
9. El Gobierno, en sus respuestas sobre estos casos sostiene que el Sr. Leonardo Miguel Bruzón Ávila fue detenido por la comisión de actos constitutivos de delito, en virtud de la legislación penal vigente, antes de la comisión de los mismos. El Sr. Bruzón Ávila goza de todos los beneficios del debido proceso.

10. El Sr. Juan Carlos González Leyva fue responsable de actos constitutivos de delito conforme a la legislación nacional vigente, los que en ningún modo podrían ser calificados como "protesta pacifista frente al Hospital Antonio Luaces Iraola", tal como se expresa en la comunicación conteniendo las alegaciones. El 4 de marzo de 2002 se produjeron actos graves contra el orden público y de resistencia y desacato al cumplimiento de las funciones de la autoridad pública, que determinaron la detención de varios ciudadanos, entre ellos el Sr. Juan Carlos González Leyva.

11. En la mañana del propio 4 de marzo de 2002, el Sr. Jesús Álvarez Castillo fue conducido al hospital, en cumplimiento de los procedimientos de rigor de la Policía Nacional, tras realizar dicho ciudadano una denuncia, en el sentido de que habría sido objeto de lesiones al momento de su detención. Debe destacarse que el Sr. Álvarez Castillo se opuso de manera violenta a su arresto. Se pudo determinar que la denuncia era completamente infundada, luego que los facultativos médicos comprobaran que el Sr. Álvarez Castillo no poseía lesiones de índole alguna. Por su parte, el Sr. González Leyva y el resto de los ciudadanos mencionados en la comunicación, alertados de la presencia del Sr. Álvarez Castillo en el cuerpo de guardia del hospital, se personaron en la instalación con el objeto de promover acciones de desorden público y tratar de fabricar la falsa imagen de una actuación arbitraria de parte de las autoridades policiales durante el arresto del Sr. Álvarez Castillo.

12. En compañía de los ciudadanos mencionados en la denuncia, el Sr. González Leyva amenazó y hostigó en el interior del hospital al personal médico y paramédico de la institución, así como a pacientes y familiares que allí se encontraban, como consecuencia de lo cual se originaron gravísimos disturbios dentro de las instalaciones del centro hospitalario. Durante casi dos horas el grupo de ciudadanos en cuestión, entre ellos el Sr. González Leyva, se mantuvo obstruyendo la prestación de importantes servicios médicos del hospital, incluidos los de urgencia, poniendo en peligro la vida de numerosas personas, entre ellas las de varios niños.

13. Como consecuencia de las acciones referidas, un paciente que estaba recibiendo tratamiento para la hipertensión arterial se atemorizó y se alejó del centro hospitalario, lo cual le ocasionó un infarto, del cual aún convalece. Varios niños que esperaban por la realización de análisis de urgencia tuvieron que esperar hasta que la situación fue controlada por la policía. A solicitud de la dirección del hospital, los agentes de la policía intervinieron para restablecer el orden y los servicios médicos y en particular para poner fin a una situación que tendía a agravarse, como consecuencia de la creciente irritación y ansiedad de los pacientes y sus familiares, a partir de la imposibilidad de recibir los servicios médicos que necesitaban.

14. El Sr. González Leyva se provocó una autoagresión que le ocasionó una herida que necesitaba cinco puntos en la frente. Él golpeó fuertemente su cabeza contra el marco de una puerta metálica, con la evidente intención de responsabilizar de la lesión que se ocasionara a las autoridades policiales. Fue realizada una rigurosa investigación por parte de la Fiscalía en relación con lo ocurrido, la cual permitió corroborar de manera fehaciente la veracidad de lo antes expuesto. En la investigación se obtuvo la declaración inequívoca y voluntaria de testigos presenciales, que confirmaron los hechos antes descritos.

15. No es la primera ocasión que el Sr. González Leyva realiza autoagresiones de este tipo con el objetivo de acusar de maltrato a las autoridades actuantes. En todos los casos, tras las investigaciones realizadas, se ha podido comprobar la falsedad de sus acusaciones.

Los responsables de los hechos descritos se encuentran en prisión preventiva, por los delitos de desorden público, resistencia y desacato. El Gobierno asegura que contarán sin excepción con todos los beneficios del debido proceso. El Sr. González Leyva, atendiendo a su discapacidad física, no ha sido trasladado a prisión y se mantiene en las instalaciones del órgano de instrucción judicial de la provincia de Holguín, donde existen mejores condiciones y posibilidades para brindarle un tratamiento adecuado.

16. Según el Gobierno, en lo que se refiere al caso del Sr. Oscar Biscet González, en la tarde del 6 de diciembre de 2002, un grupo de personas se dirigieron a la vivienda de Raúl Arencibia para participar en una provocación contra el orden público y la seguridad ciudadana que había sido convocada por el ciudadano Oscar Elías Biscet. Ninguna de estas personas participaron en "encuentro pacífico" alguno, ni asistieron a clase alguna de derechos humanos. Lejos de una actividad docente o académica, ese día los ciudadanos antes mencionados atentaron abiertamente contra el orden público, provocando un grave incidente que provocó la respuesta airada de más de un centenar de personas al sentirse agredidas por el Sr. Biscet. Los hechos generaron una violenta interrupción de las actividades escolares que se desarrollaban en un centro educacional enclavado en el lugar, además de obstaculizar el tráfico de vehículos por más de una hora.

17. El Gobierno afirma que el Sr. Biscet fue el principal instigador y responsable, en franca comisión del delito de instigación para delinquir. El Sr. Biscet desde un principio actuó de manera agresiva, con la clara intención de escalar el desorden que había provocado hasta una situación sin control. Los responsables del desorden público se rehusaron a mostrar sus documentos de identificación. El Sr. Biscet y varias de las personas mencionadas se resistieron al arresto y agredieron a los agentes de las fuerzas del orden público. Los ciudadanos mencionados fueron detenidos por violar la legislación penal vigente en el país.

18. Afirma el Gobierno que según las investigaciones realizadas, durante la detención, traslado y permanencia en la unidad de policía, se pudo constatar que los agentes policiales no propinaron golpes u ocasionaron daño físico alguno a ninguna de las personas referidas en la denuncia. En todo momento fueron respetados los requisitos del debido proceso y se observaron estrictamente las normas de procedimiento penal vigentes. El Sr. Biscet González permaneció en prisión al quedar probada su responsabilidad como principal instigador del hecho delictivo descrito, fue sancionado por los tribunales competentes a 20 años de privación de libertad por el delito de instigación para delinquir y otras tipificaciones delictivas directamente dirigidas a lesionar la soberanía y el orden constitucional de la nación.

19. El Gobierno concluye diciendo que el Sr. Biscet González no es un "luchador pacifista" por los derechos humanos. Afirma que cuenta con abundantes elementos probatorios de que las actividades subversivas que durante varios años han sido ejecutadas por esta persona contra el orden constitucional que se diera el pueblo cubano, han sido instruidas y financiadas por un Gobierno extranjero y por organizaciones terroristas de origen cubano radicadas en el territorio de otro país.

20. La fuente ha reaccionado a la respuesta del Gobierno, diciendo que Leonardo Miguel Bruzón fue detenido al momento en que iba a celebrarse una misa y la conmemoración de una fecha patriótica, entre un grupo de opositores pacíficos. El Sr. Bruzón sigue esperando su juicio bajo acusaciones, informadas extraoficialmente, de "propaganda enemiga", "desacato", "desorden público" o "incitación a delinquir".

21. Sobre el caso de Juan Carlos González Leyva, la fuente afirma que ha sido detenido por más de 15 meses hasta la fecha sin un juicio, lo que sugiere que las autoridades han tenido dificultades en formular una acusación contra él. Su detención se produjo por haber ido con otros disidentes a un hospital local a protestar por una golpiza contra un periodista. El grupo manifestante, dice la fuente, se expresó pacíficamente, orando y diciendo eslóganes como "Vivan los derechos humanos" y "Viva Cristo Rey", y no estuvieron bloqueando la entrada de pacientes, sino al contrario, buscando que se atendiese a un paciente. Una hora más tarde el grupo fue rodeado de fuerzas de seguridad del Estado que les llevaron detenidos. Su resistencia había sido pacífica. El Sr. González Leyva ha rechazado siempre la violencia. Por otra parte, menciona que la sugestión del Gobierno de que el totalmente ciego Sr. González Leyva se haya inflingido daños sustanciales o lo haya hecho repetidas veces, pretende desacreditarlo, es falsa y no concuerda con su compromiso personal de activismo pacífico. En cuanto a sus condiciones de detención, la fuente reafirma que se encuentra en un edificio judicial, pero que comparte celda con un preso común, y que él y su esposa se han quejado sobre estas malas condiciones que no muestran ninguna sensibilidad a su situación de invidente.

22. Sobre el Dr. Biscet González, la fuente ha dicho que su trayectoria como médico y activista revela en sus actos públicos que es un hombre pacífico, que ha creado en La Habana la Fundación Lawton de Derechos Humanos como una organización humanitaria para promover y exigir la defensa de los derechos fundamentales a través de la lucha no violenta; que considera el derecho a la vida como el cimiento de los demás derechos humanos, siendo seguidor de las ideas de Ghandi y de Martín Luther King; que el lema de la Fundación es "Vida y Libertad" y que sus miembros, contra el aborto, la eutanasia y todo acto violento, están comprometidos a llevar a cabo sus ideales pacíficamente a través de la desobediencia civil. Agrega que el Dr. Biscet jamás ha hecho ninguna declaración pública de apoyo a una acción militar contra su propio país, ni promueve una invasión militar contra Cuba; que no tiene fundamento el argumento del Gobierno de relacionar con el terrorismo la colaboración del Dr. Biscet con el exilio cubano; que el 6 de diciembre el Dr. Biscet planeaba reunirse para discutir el tema de los derechos humanos con alrededor de una docena de activistas cuando la Seguridad de Estado no les permitió entrar a la casa. En protesta, los activistas se acostaron en el suelo, dando vivas a los derechos humanos. Entonces fueron detenidos.

23. Habiendo analizado las informaciones precedentes, el Grupo de Trabajo ha constatado que el Sr. Leonardo Miguel Bruzón Ávila se encuentra detenido en virtud de haber intentado organizar una manifestación en la que expresaría sus opiniones políticas sobre la conmemoración de una fecha, manifestación cuyo carácter pacífico no se ha objetado.

24. En cuanto a Juan Carlos González Leyva, ha sido asimismo detenido en virtud del ejercicio del derecho a su libertad de expresión, en una manifestación en que la violencia no ha sido evidente. Los cargos que se le han formulado han sido ambiguos y no se ha identificado claramente las ofensas que podrían meritarse su detención. Se trata, como lo comprueba el Grupo de Trabajo, de una protesta por motivos políticos, en la cual la misma resistencia a la detención pudo motivar los disturbios en el hospital.

25. Sobre la detención de Oscar Elías Biscet, el Grupo estima que se ha producido cuando se iba a llevar a cabo una reunión pacífica de disidencia política de su Fundación, lo cual constituye una libertad reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos que debe ser garantizada.

26. En los tres casos, y en diferentes circunstancias, el Grupo de Trabajo estima que los hechos se han producido dentro de los límites del uso pacífico de derechos reconocidos como libertades de opinión, expresión y de reunión, habiéndose detenido a estas tres personas por el ejercicio de estas libertades en posiciones contrarias al Gobierno.

27. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Leonardo Miguel Bruzón Ávila, Juan Carlos González Leyva y Oscar Elías Biscet González es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 9, 10, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que tome las iniciativas adecuadas con vista a ser Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 5 de septiembre de 2003

### **OPINIÓN N° 18/2003 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)**

*Comunicación dirigida al Gobierno el 22 de mayo de 2003.*

*Relativa a:* Tanious Kamil El-Habr.

#### **El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. (Texto idéntico al del párrafo 1 de la opinión N° 15/2002.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto idéntico al del párrafo 3 de la opinión N° 15/2002.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno, pero lamenta que no presentara al Grupo de Trabajo la información que le pidió y que, en la práctica, no facilitase su labor de investigación del caso. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones, que ha formulado sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso que se examina, teniendo en cuenta las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno al respecto.
5. Según la fuente, el Sr. Tanious Kamil El-Habr, nacido en 1965, ciudadano libanés y ex sargento del ejército libanés, que vive en Dekwaneh (Líbano), fue detenido el 13 de octubre de 1990 en la ciudad de Aain Saadé (Líbano), por miembros de las fuerzas del servicio de inteligencia sirias. En el momento de la detención no se presentó orden judicial alguna. En un primer momento fue conducido al Centro de Servicios de Inteligencia de Siria, en Anjar (Líbano). Posteriormente, fue trasladado al Centro de detención de la División Palestina en

Damasco (Siria), sin respetar ninguno de los procedimientos oficiales de extradición. El Sr. El-Habr estuvo encarcelado primero en la cárcel de Mazzé, en Siria, donde se autorizó a su padre a visitarlo.

6. Según la fuente, aunque el Sr. El-Habr no fue acusado de delito alguno, el coronel Ahmad An Naasan, primer juez militar, ordenó que se le mantuviera en prisión. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Palmira, donde se le negó el derecho a recibir visitas. La fuente informa además de que el Sr. El-Habr fue mantenido en régimen de incomunicación durante largos períodos. Permaneció en prisión más de 12 años sin que se formularan cargos contra él, sin juicio ni sentencia.

7. El Gobierno de la República Árabe Siria, en su respuesta, afirmó que las autoridades en cuestión no tenían información sobre la detención del Sr. El-Habr.

8. En sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno, la fuente indicó que el Sr. El-Habr había recibido visitas mientras se encontraba en la prisión militar siria de Mazzé y que su familia había sido informada por antiguos presos políticos en Siria, de que en septiembre de 1993 había estado encarcelado con ellos en la prisión del servicio de inteligencia de la fuerza aérea, próxima al aeropuerto de Mazzé. Según la fuente, las dos informaciones confirmaban la presencia del Sr. El-Habr en Siria.

9. La fuente sostiene que el Sr. El-Habr fue detenido junto con otros 200 libaneses por el ejército sirio cuando penetró en la zona oriental de Beirut el 13 de octubre de 1990; posteriormente fue trasladado a Siria y recluido en un centro de detención bajo mando sirio. La fuente facilita información sobre los lugares en que los familiares del Sr. El-Habr lo pudieron visitar y donde otros presos dicen haberlo visto, en tanto que el Gobierno sostiene que las autoridades competentes no tienen información alguna sobre la detención del Sr. El-Habr.

10. El Grupo de Trabajo, que ha recibido otras denuncias sobre el encarcelamiento por las autoridades sirias de personas detenidas ilegalmente en el Líbano y trasladadas, en las mismas circunstancias que el Sr. El-Habr, a Siria, donde permanecen detenidas, considera que la información y las pruebas reunidas por la fuente son suficientemente fidedignas para llegar a la conclusión de que el Sr. El-Habr o está detenido en Siria, después de haber sido traslado a ese país, o de que estuvo detenido allí durante un largo período, desde 1990 hasta septiembre de 1993, fecha en que fue visto por última vez en una prisión siria, sin que se hubiesen formulado cargos ni se hubiese pronunciado sentencia contra él y sin que se le diese a él ni a su familia justificación legal alguna de su detención, traslado a Siria y reclusión prolongada.

11. De las consideraciones anteriores se desprende que la detención del Sr. El-Habr es arbitraria, teniendo en cuenta que no hay base legal alguna que la justifique, y que corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

12. Así pues, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La detención de Tanious Kamil El-Habr es arbitraria, ya que contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Árabe Siria es Parte, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. Después de emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 5 de septiembre de 2003